

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

10ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN ORDINARIA — 2 DE ABRIL DE 1997

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM
y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor ANTONIO CAFIERO

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB
y señor RODOLFO NICOLÁS ADÉN

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MACLIETTI, Alberto
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSACCESI, Horacio

MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier Reynaldo
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.
PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio D.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

OYARZÚN, Juan C.
SÁEZ, José M.

POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 1017.)
2. **Por invitación del señor vicepresidente de la Nación el señor senador por Misiones, doctor Ernesto R. Oudín, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.** (Pág. 1017.)
3. **Homenaje a los caídos en la lucha por la recuperación de las islas Malvinas** (Pág. 1017.)
4. **Asuntos entrados:**
 - I. **Comunicaciones de la Presidencia.** (Pág. 1017.)
 - II. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos** (P.E.-56/97). (Pág. 1017.)
 - III. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica con el gobierno de la República de Armenia** (P.E.-57/97). (Pág. 1020.)
 - IV. **Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se declara en estado de emergencia a la actividad aseguradora del autotransporte público de pasajeros** (P.E.-71/97). (Pág. 1021.)
 - V. **Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca a licitación pública nacional e internacional para la concesión de los servicios postales, monetarios y de telegrafía que presta la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (Encotesa)** (P.E.-85/97). (Pág. 1024.)
 - VI. **Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se observa parcialmente la modificación de la ley de defensa del consumidor** (P.E.-96/97). (Pág. 1050.)
 - VII. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales entre la Argentina y el Brasil** (P.E.-97/97). (Pág. 1051.)
 - VIII. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.** (Pág. 1053.)
 - IX. **Proyecto de ley en revisión por el que se crea un régimen previsional optativo para amas de casa** (C.D.-25/97). (Pág. 1054.)
 - X. **Comunicaciones de señores senadores.** (Pág. 1055.)
 - XI. **Comunicaciones oficiales.** (Pág. 1055.)
 - XII. **Dictámenes de comisiones.** (Pág. 1057.)
 - XIII. **Peticiones particulares.** (Pág. 1058.)
 - XIV. **Proyecto de resolución de los señores senadores Sala y Mac Karthy por el que se autoriza la impresión de afiches que contengan el escudo de la localidad de Gualjaina, Chubut** (S.-215/97). (Pág. 1059.)
 - XV. **Proyecto de comunicación del señor senador de la Sota por el que se solicita un subsidio para la Asociación Mutual de Trabajadores de la Cultura "Alfredo Ferzaga" de Córdoba** (S.-216/97). (Pág. 1059.)
 - XVI. **Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca de la falta de reglamentación de la ley sobre creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo** (S.-217/97). (Pág. 1060.)
 - XVII. **Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray por el que se solicitan informes acerca de la constitución de una comisión integrada con miembros de organismos de seguridad** (S.-218/97). (Pág. 1060.)
 - XVIII. **Proyecto de ley del señor senador Storani y otros señores senadores por el que se establece un marco regulatorio de los servicios postales.** (S.-219/97). (Pág. 1062.)
 - XIX. **Proyecto de resolución del señor senador López y otros señores senadores por el que se declara la nulidad de la interpretación de los artículos 202 y 203 del Reglamento del Honorable Senado realizada en la sesión del 12 de marzo de 1997** (S.-221/97). (Pág. 1072.)
 - XX. **Proyecto de comunicación del señor senador Sáez por el que se solicita la declaración de interés nacional de la Feria Provincial del Libro en Chubut** (S.-222/97). (Pág. 1074.)
 - XXI. **Proyecto de declaración del señor senador Cantarero y otros señores senadores por el que se solicita la declaración de interés nacional de la 13ª Feria Internacional del Norte Argentino** (Ferino 97) (S.-223/97). (Pág. 1074.)
 - XXII. **Proyecto de declaración del señor senador Bauzá y otros señores senadores por el que se manifiesta discrepancia con un decreto del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay sobre ré-**

- CV. **Proyecto de declaración** del señor senador Villaverde por el que se expresa beneplácito por la obtención del **Título Mundial de la 29ª Edición de Rugby** por parte del **Seleccionado Sub-19** (S.-310/97). (Pág. 1160.)
- CVI. **Proyecto de ley** de la señora senadora Rivas por el que se transfiere el dominio de un inmueble ubicado en el departamento de Tafi a la provincia de Tucumán (S.-311/97). (Pág. 1161.)
- CVII. **Proyecto de resolución** de la misma señora senadora por el que se manifiesta preocupación por el maltrato de niños en el Jardín Maternal "La Casa de Ana" en Buenos Aires (S.-312/97). (Pág. 1162.)
- CVIII. **Proyecto de ley** de los señores senadores Peña de López y Menem sobre otorgamiento de una medalla a un soldado veterano de la Guerra de Malvinas (S.-319/97). (Pág. 1162.)
5. **Lectura y aprobación del plan de labor** para la sesión de la fecha (Pág. 1163.)
6. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político (Pág. 1163.)
7. A moción del señor senador Mac Karthy se reconsidera y se aprueba con modificaciones, el plan de labor para la sesión de la fecha (Pág. 1163.)
8. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre actividad nuclear (C.D.-52/96). Se aprueba. (Pág. 1164.)
9. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comercio en el proyecto de comunicación del señor senador Baum y otros señores senadores por el que se solicita se establezcan los mecanismos de control para los operadores de comercio exterior (S.-2.709/96). Se aprueba. (Pág. 1232.)
10. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Interior y Justicia y de Cultura en el proyecto de ley de los señores senadores Meneghini y Figueroa por el que se declara monumento nacional el Colegio "Absalón Rojas", ubicado en la manzana comprendida entre las calles Libertad, Misiones y las avenidas Saénz Peña y Moreno, en Santiago del Estero (S.-2.152/96). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1234.)
11. **Moción formulada** por el señor senador San Millán para que el dictamen en el proyecto de ley del señor senador Maglietti por el que se transfiere a la Asociación "Lugar de Encuentro" un inmueble sito en Formosa, vuelva a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales (S.-1.271/96). Se aprueba. (Pág. 1235.)
12. **Consideración del dictamen** de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Baum por el que se solicitan informes acerca de las acciones de control ante la aplicación de recargos en las facturas emitidas por Edesur y otras empresas prestatarias de servicios públicos (S.-1.210/96). Se aprueba. (Pág. 1237.)
13. **Consideración del dictamen** de la Comisión de Economía en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se arbitren las medidas necesarias, en caso de que fuese técnicamente posible, a fin de que el Banco de la Nación Argentina instale un minibanco en la localidad de El Calafate, Santa Cruz (S.-2.246/96). Se aprueba otro proyecto de comunicación. (Pág. 1238.)
14. **Moción formulada** por el señor senador Alasino para que el dictamen en el proyecto de comunicación del señor senador Meneghini, por el que se solicita se retiren de la comercialización aquellos productos alimenticios considerados por resoluciones del SENASA como riesgosos por proceder de países con antecedentes en encefalopatía espongiforme bovina, vuelva a las comisiones respectivas (S.-2.270/96). Se aprueba. (Pág. 1239.)
15. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Cultura y de Relaciones Internacionales Parlamentarias en el proyecto de resolución del señor senador de la Rosa por el que se declara de interés parlamentario el acta firmada por Buenos Aires, documento del "Encuentro de Legisladores Culturales del Mercosur y España" (S.-2.442/96). Se aprueba. (Pág. 1240.)
16. **Moción formulada** por el señor senador Alasino para que el dictamen en el proyecto de resolución del señor senador López por el que se declara de interés para el Honorable Senado el Congreso de Economía a realizarse en Buenos Aires, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, vuelva a la Comisión de Economía (S.-2.876/96). Se aprueba. (Pág. 1241.)
17. **Moción formulada** por el señor senador Costanzo para que el dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se declara de interés para el Honorable Senado la realización de las "Jornadas de TV por Cable - Cable 97" y la "VIII Exposición Internacional de la Industria del Cable", vuelva a la Comisión de Comunicaciones (S.-2.756/96). Se aprueba. (Pág. 1242.)
18. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Educación y de Comunicaciones en el proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se declaran de interés educativo y cultural las Primeras Jornadas Regionales de Productores Independientes de la Televisión Educativa, realizadas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (S.-2.381/96). Pasa al archivo. (Pág. 1243.)

19. **Moción** formulada por el señor senador **San Millán** para que el dictamen en el proyecto de resolución del señor senador **León** por el que se solicita la modificación del Régimen de Contrataciones del Estado, decreto 5.720/72, a fin de excluir de las licitaciones a aquellas empresas que tengan procesos abiertos por presunto cohecho en el trámite de contrataciones de éste, vuelva a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales (S.-2 731/96). Se aprueba. (Pág. 1244.)
20. **Consideración del dictamen de la Comisión de Pesca** en dos proyectos de comunicación: uno, del señor senador **León** y el otro, de la señora senadora **Rivas** por los que se solicitan informes acerca de la actividad pesquera en el Mar Argentino (S.-2.031 y 2.070/96). Se aprueba otro proyecto de comunicación. (Pág. 1245.)
21. **Consideración del proyecto de resolución** del señor senador **Figuerola** y demás integrantes de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa por el que se declaran de interés para el Honorable Senado las Jornadas Internacionales de Intercambio y Actualización PyMES (S.-212/97). Se aprueba. (Pág. 1247.)
22. **Moción** formulada por el señor senador **Alasino** para que el dictamen en el proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicitan informes sobre la posible destrucción de documentación por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, vuelva a la Comisión de Interior y Justicia (S.-2 512/96). Se aprueba. (Pág. 1248.)
23. **Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia** en el proyecto de declaración del señor senador **Figuerola** por el que se expresa pesar por el fallecimiento del líder chino **Deng Xiaoping** (S.-2.838/96). Se aprueba. (Pág. 1248.)
24. **Moción** formulada por el señor senador **Verna** para que el dictamen en el proyecto de resolución de los señores senadores **Genoud** y **Oyarzún** por el que se dispone homenajear al deportista **Gustavo Fabián Oriozabala**, vuelva a las comisiones de Deportes y de Presupuesto y Hacienda (S.-49/97). Se aprueba. (Pág. 1249.)
25. **Moción** formulada por el señor senador **Verna** para que el dictamen en el proyecto de comunicación del señor senador **Sáez** por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Municipalidad de **Trelew, Chubut**, destinado a la realización de un certamen internacional de ceros, vuelva a las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda (S.-2 771/96). Se aprueba. (Pág. 1250.)
26. **A moción** del señor senador **Sala** se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen en el proyecto de ley del que es autor junto con el señor senador **Mac Karthy** por el que se transfiere a título gratuito una fracción de terreno a la Municipalidad de **Puerto Madryn, Chubut** (S.-2.422/96). Se aprueba. (Página 1251.)
27. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería** en el proyecto de declaración del señor senador **Verna** por el que se declaran de interés para el Honorable Senado las Primeras Jornadas de Expo Campo Castex '97, La Pampa (S.-2.865/96). Se aprueba. (Pág. 1252.)
28. **A moción** del señor senador **Cantarero** se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del señor senador **San Millán** y otros señores senadores por el que se solicita se instruya a la misión argentina ante la Organización Mundial de Comercio en el sentido de que el Fondo Especial del Tabaco (ley 19.800) no tenga el carácter de subsidio (S.-283/97). (Pág. 1263.)
29. **A moción** del señor senador **Cantarero** se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley de los señores senadores **Peña de López** y **Menem** por el que se confiere al ciudadano **Pablo Bertín**, soldado veterano de la guerra de las Malvinas, la condecoración medalla "El pueblo argentino al valor en combate" (S.-319/97). (Pág. 1253.)
30. **A moción** del señor senador **Mac Karthy** se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de declaración del que es autor junto con otros señores senadores por el que se repudia el secuestro sufrido por el periodista **José Basualdo**, de la agencia **Puerto Madryn** y el diario "El Chubut" (S.-323/97). (Pág. 1254.)
31. **A moción** del señor senador **Bauzá** se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de declaración del que es autor junto con otros señores senadores por el que el Senado de la Nación pone de manifiesto su absoluta discordancia con el decreto 16.416 del corriente año, dictado por el Poder Ejecutivo de la República del Paraguay (S.-320/97). (Pág. 1255.)
32. **A moción** del señor senador **Aguirre Lanari** se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley del que es autor junto con otros señores senadores por el que se extiende el beneficio previsto por las leyes 23.848 y 24.652, de pensión a los ex-combatientes de Malvinas, al personal en situación de retiro y a derechohabientes (S.-304/97). (Página 1256.)
33. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador **Aguirre Lanari** para considerar dentro de dos semanas, con dictamen de comisión o sin él, el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la ampliación de los beneficios del decreto 1.562/96 a estaciones de servicios ubicadas en Corrientes (S.-247/97). Se aprueba. (Pág. 1257.)
33. **Apéndice:**
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1257.)
 - II. Inserciones. (Pág. 1258.)

—En Buenos Aires, a las 12 y 34 del miércoles 2 de abril de 1997:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Para una manifestación en minoría, tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: como de costumbre, creo que vale la pena que se fije un tiempo prudencial para formar quórum, transcurrido el cual —y luego de que se pase lista—, de no haber número suficiente, debería levantarse la sesión.

No podemos continuar esperando durante tanto tiempo.

Sr. Presidente. — Se seguirá llamando por quince minutos más.

—Se continúa llamando.

—A las 12 y 40.

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Misiones doctor Ernesto René Oudín a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Oudín procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

3

HOMENAJE

Sr. Presidente. — En la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer, en primer lugar se resolvió rendir homenaje a nuestros hermanos caídos en la lucha por la recuperación de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982 —hoy hace quince años—, guardando un minuto de silencio. A efectos de cumplir con esa decisión, invito a los presentes a ponerse de pie.

—Así se hace.

—Ingresan en el recinto señores senadores de la Unión Cívica Radical.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: simplemente, para dejar constancia —debido a que

nuestro bloque estuvo ausente en su momento— de nuestra total adhesión al homenaje que acaba de tributarse en esta Cámara a los caídos en la guerra de las Malvinas.

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se hizo llegar oportunamente la lista de asuntos entrados. Corresponde ahora que los señores senadores formulen las observaciones que estimen pertinentes.

Sr. Secretario (PiuZZi). — *(Lee)*

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 19 de marzo por el que se designa al señor senador Alasino para integrar con carácter de interino la Comisión de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia y al señor senador Gioja para integrar la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano, mientras dure la licencia por enfermedad del señor senador Vaca (D.P.-126/97). (A sus antecedentes.)

—Decreto de la misma fecha por el que se designa al señor senador Aguirre Lanari para integrar la comisión creada por la resolución D.R.-203/97, en reemplazo del señor senador Agúndez (D.P.-127/97). (A sus antecedentes.)

II

Aprobación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 18 de marzo de 1997.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en ciudad de México —Estados Unidos Mexicanos— el 5 de agosto de 1996.

El propósito del presente Convenio es el de crear un marco adecuado para promover los programas y proyectos de cooperación técnica y científica que se concierten entre organismos y entidades de los sectores público y privado, así como de universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales de ambos países.

La cooperación técnica y científica podrá tener, entre otras, las siguientes modalidades: realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo; envío de expertos; envío de equipos y material; pro-

nable Senado en virtud de la agresión física que ha sufrido un periodista en Puerto Madryn, provincia del Chubut.

Sr. Presidente. — En primer lugar corresponde considerar el pedido de reconsideración del plan de labor.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: aprovechando el pedido de reconsideración del plan de labor, y a efectos de que no se trata de un evento vencido, solicito que se incluya el expediente S.-2.865/96, que cuenta con despacho de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y se refiere a una muestra programada para los días 3, 4, 5 y 6 de abril en mi provincia.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Martínez Almudevar. — Señor presidente: solicito que se incluya el expediente S.-225/97, con la misma intención que la del señor senador Verna.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Cantarero. — Señor presidente: solicito que el expediente S.-283/97 sea tratado sobre tablas, dado que mañana en la ciudad de Salta la fuerza tabacalera y otras fuerzas productivas van a hacer una movilización en vista a que el señor secretario Solá quiere afectar los fondos a otros destinos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Sí, señor presidente, había un compromiso...

Sr. Presidente. — Lo estoy cumpliendo, así que si quiere incorporar proyectos y solicitar su tratamiento sobre tablas, hágalo.

Sr. Avelín. — ¿Y qué otra cosa más? *(Risas.)*

Sr. Presidente. — No sé qué más, pero el compromiso es que podíamos habilitar...

Sr. Avelín. — El compromiso era que el cancelar nos visitaría para informarnos sobre un proyecto que yo presenté, el 2.693/96, vinculado con la pretensión de Chile respecto de la línea que solicitaba.

Creo que ese compromiso se podría concretar la próxima semana, siempre y cuando usted lo invite para que nos informe sobre este tema, de forma tal de no tener que debatirlo en el recinto. En caso contrario, tendremos que hacerlo de esa forma.

Sr. Bauzá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bauzá. — Señor presidente: solicito que se reserve en mesa para su tratamiento sobre tablas el expediente S.-320/97.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador Mac Karthy y otros señores senadores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia aclara que se requieren dos tercios de los votos.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda habilitada la reconsideración.

En consideración el plan de labor con los pedidos de tratamiento sobre tablas solicitados.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Entiendo que también están incluidas las preferencias que vamos a tratar.

Sr. Presidente. — Sí, lo que ustedes pidieron reservar en mesa está todo incorporado. ¿Usted lo va a pedir como preferencia, cuando llegue el momento o quiere incorporar alguna más?

Sr. Aguirre Lanari. — Lo voy a pedir en su momento. Creí que ya estábamos hablando de eso.

Sr. Presidente. — No, es el nuevo plan de labor. Cuando llegue el momento de las preferencias a solicitar, usted tiene en Secretaría su pedido de preferencia, que se refiere al proyecto que ayer presentó en la reunión de presidentes de bloque.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor con las adiciones propuestas.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.

8

ACTIVIDAD NUCLEAR

Sr. Presidente. — En consecuencia corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre actividad nuclear. (Orden del Día N° 59, complemento y anexo.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — *(Lee)*

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-52/96), sobre actividad nuclear; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 21 de marzo de 1997.

Julio A. San Millán. — César Mac Karthy. — Héctor M. Maya. — Carlos L. de la Rosa. — Enrique Martínez Almudevar. — Julio C. Humada. — Jorge A. Villaverde. — Ernesto R. Oudin. — Fernando V. Cabana. — Horacio A. Zalazar. — Angel F. Pardo. — Carlos Manfredotti. — Juan C. Oyarzún.

En disidencia artículos 1º, 13, 18, 38 y 40:

Felipe R. Sapag.

En disidencia parcial:

Antonio F. Cafiero.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(7 de agosto de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY NACIONAL DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR

CAPÍTULO I

*Actividad nuclear. Funciones del Estado
Criterio de regulación. Jurisdicción*

Artículo 1º.— En materia nuclear el Estado nacional fijará la política y ejercerá las funciones de investigación y desarrollo, regulación y fiscalización, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Toda actividad nuclear de índole productiva y de investigación y desarrollo que pueda ser organizada comercialmente, será desarrollada tanto por el Estado nacional como por el sector privado.

En la ejecución de la política nuclear se observarán estrictamente las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco); el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad

y Control de Materiales Nucleares, y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas (decreto 603/92).

Art. 2º.— La Comisión Nacional de Energía Atómica creada por decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950 y reorganizada por decreto ley 22.498/56, ratificado por ley 11.467, continuará funcionando como ente autárquico en jurisdicción de la Presidencia de la Nación y tendrá a su cargo:

- a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear;
- b) Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnología en materia nuclear, comprendida la realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica;
- c) Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas por el organismo, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la República Argentina;
- d) Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos cumpliendo las funciones que le asigne la legislación específica;
- e) Determinar la forma de retiro de servicio de centrales de generación nucleoelectrónica y de toda otra instalación radiactiva relevante;
- f) Prestar los servicios que le sean requeridos por las centrales de generación nucleoelectrónica u otra instalación nuclear;
- g) Ejercer la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables especiales contenidos en los elementos combustibles irradiados;
- h) Ejercer la propiedad estatal de los materiales fisionables especiales que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país;
- i) Desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales;
- j) Desarrollar aplicaciones de radionúclidos y radiaciones en biología, medicina e industria;
- k) Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin que ello implique excluir al sector privado en tal actividad;
- l) Efectuar el desarrollo de materiales y procesos de fabricación de elementos combustibles para su aplicación en ciclos avanzados;
- m) Implementar programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de la tecnología nuclear;
- n) Establecer programas de cooperación con terceros países para los programas enunciados en el inciso precedente y para la investigación y el desarrollo de la tecnología de fusión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;

- n) Promover y realizar todo otro estudio y aplicación científica de las transmutaciones y reacciones nucleares;
- ñ) Actualizar en forma permanente la información tecnológica de las centrales nucleares en todas sus etapas y disponer del aprovechamiento óptimo de la misma;
- o) Establecer relaciones directas con otras instituciones extranjeras con objetivos afines;
- p) Celebrar convenios con los operadores de reactores nucleares de potencia, a los fines de realizar trabajos de investigación.

Art. 3º — La Comisión Nacional de Energía Atómica se registrará en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin establezca el directorio de la Comisión. Estará sujeta al régimen de contralor público.

El personal de la Comisión estará sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación.

Art. 4º — Las funciones del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica serán:

- a) Realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y las funciones determinadas por la presente ley;
- b) Aprobar los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el presupuesto anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional;
- c) Aprobar el informe anual de actividades;
- d) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre los asuntos relacionados con la energía atómica y sus aplicaciones;
- e) Establecer relaciones con instituciones extranjeras u organismos regionales o internacionales que tengan objetivos afines, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
- f) Aceptar bienes y donaciones;
- g) Concertar acuerdos con entidades públicas o privadas para la realización de los planes que concurren a los fines de la institución;
- h) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la estructura del organismo.

Art. 5º — El presidente del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que conciernen a la institución y de las resoluciones de directorio. Le compete:

- a) Asumir la representación legal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tanto administrativa, judicial como extrajudicialmente;
- b) Ejercer la dirección y administración de la institución;
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio;
- d) Someter al directorio los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el proyecto

de presupuesto anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional;

- e) Otorgar mandatos generales y especiales;
- f) Integrar por sí o por medio de representantes comisiones nacionales, provinciales y sectoriales en materia de competencia del organismo, incluyendo los aspectos ambientales;
- g) Informar al directorio la distribución general del presupuesto anual otorgado;
- h) Informar al directorio acerca del cumplimiento de los planes, proyectos y otras actividades previstas;
- i) Proponer al directorio la estructura del organismo en los niveles no definidos por el Poder Ejecutivo;
- j) Designar, promover, sancionar y remover al personal en conformidad con las leyes y reglamentos aplicados;
- k) Designar y promover al personal que cumplirá funciones jerárquicas y de coordinación;
- l) Designar y enviar representantes y destacar en comisión a personal idóneo a conferencias, reuniones o congresos regionales o internacionales;
- m) Delegar parcialmente en los órganos internos que determine las facultades que esta ley de atribuye.

Art. 6º — Los recursos de la Comisión Nacional de Energía Atómica se formarán con los siguientes ingresos:

- a) Los aportes del Tesoro nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario y por leyes especiales;
- b) El producido de su actividad en el campo de la producción y la prestación de servicios;
- c) Los subsidios, legados, herencias, donaciones y transferencias que reciba bajo cualquier título;
- d) Un canon que determine el Poder Ejecutivo nacional destinado a financiar las funciones de investigación y desarrollo que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que será un porcentaje de los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica generada por las centrales nucleares a cargo de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima o quien la sustituya legalmente;
- e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.

Art. 7º — La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá a su cargo la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su competencia.

Art. 89 — La Autoridad Regulatoria Nuclear deberá desarrollar las funciones de regulación y control que le atribuye esta ley con los siguientes fines:

- a) Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes;
- b) Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la República Argentina;
- c) Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina;
- d) Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

Art. 90 — Toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear deberá:

- a) Ajustarse a las regulaciones que imparta la Autoridad Regulatoria Nuclear en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización que lo habilite para su ejercicio;
- b) Cumplir todas las obligaciones que en materia de salvaguardias y no proliferación haya suscrito o suscriba en el futuro la República Argentina;
- c) Asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por ley 17.048, por la suma de ochenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 80.000.000) por accidente nuclear en cada instalación nuclear. La misma deberá ser cubierta mediante un seguro o garantía financiera a satisfacción del Poder Ejecutivo nacional o de quien éste designe, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ajustar la suma establecida como límite de responsabilidad en el párrafo anterior, en el caso de que se revisaran los términos de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, una vez que la modificación sea ratificada por ley.

Entiéndase por daño nuclear, conforme lo define la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, ratificada por ley 17.048 la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en una instalación

nuclear o de las sustancias nucleares que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella; o de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra fuente de radiaciones que se encuentren dentro de una instalación nuclear.

Se considera comprendido en el concepto de responsabilidad de daño nuclear, a cargo de un explotador de una instalación nuclear lo relativo a:

- i) Los daños que se produjeren sobre el personal del explotador así como sobre el personal de sus contratistas y subcontratistas con motivo del accidente nuclear de una instalación nuclear que opere dicha sociedad.
- ii) Los perjuicios que se causen con motivo del accidente nuclear a los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica que se encontraren desarrollando tareas referentes a la aplicación de salvaguardias previstas en acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.
- iii) Los accidentes que se produjeren con sustancias nucleares fuera del sitio de la instalación o fuera del transporte, cuando al momento de ocurrir el accidente nuclear tales sustancias hubieren sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono.

A su vez, todo explotador de una central de generación nucleoelectrónica deberá aportar a un fondo para retiro de servicio de centrales nucleares. La forma de constitución, administración y contralor de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 10. — Declárase sujeta a jurisdicción nacional la regulación y fiscalización de la actividad nuclear, en los aspectos definidos en el artículo 7º, conforme lo establecido por el artículo 11 de la presente ley.

Art. 11. — Todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear con la aprobación del estado provincial donde se proyecte instalar el mismo.

Art. 12. — Para definir la ubicación de un repositorio para residuos de alta, media y baja actividad, la Comisión Nacional de Energía Atómica propondrá un lugar de emplazamiento. Este deberá contar con la aprobación de la Autoridad Regulatoria Nuclear en lo referente a seguridad radiológica y nuclear y la aprobación por ley del estado provincial donde se ha propuesto la localización. Tales requisitos son previos y esenciales a cualquier trámite.

Art. 13. — Los lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos que la Comisión Nacional de Energía Atómica o Nucleoelectrónica Argentina Sociedad Anónima tengan en funcionamiento al momento de sancionarse la presente ley, así como sus ampliaciones, y sus vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo o fluviales no requieren para continuar en operación o para viabilizar el acceso o retiro de los residuos de los repositorios

de tal índole, autorización especial legislativa ni autorización de las municipalidades o provincias en cuyo territorio se encuentre localizado el repositorio o sus vías de acceso.

CAPÍTULO II

Autoridad Regulatoria Nuclear

Art. 14. — La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación. Dicha autoridad será la sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear.

Art. 15. — La Autoridad Regulatoria Nuclear gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran al Ente Nacional Regulador Nuclear, y por los que adquiriera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. La autoridad aprobará su estructura orgánica, previa intervención de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación.

Art. 16. — La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá las siguientes funciones, facultades y obligaciones:

- a) Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física;
- b) Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de centrales de generación nucleoelectrica;
- c) Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y concentración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores relevantes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales;
- d) Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria;
- e) Proponer ante el Poder Ejecutivo nacional la cesión, prórroga o reemplazo de una concesión de uso de una instalación nuclear de propiedad estatal cuando hubiese elementos que así lo aconsejen, o su caducidad cuando se motive en incumplimiento de las normas que dicte en materia de seguridad radiológica y nuclear;
- f) Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al incumplimien-

to de los licenciarios o titulares de una autorización o permiso reglados por la presente ley, así como también solicitar órdenes de allanamiento y requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera necesario para el debido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma;

- g) Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta en: apercibimiento, multa que deberá ser aplicada en forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal;
 - h) Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso;
 - i) Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también clausurar preventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuando se desarrollen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detección de faltas graves a las normas de seguridad radiológica y nuclear y de protección de instalaciones.
- A tales efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una seria amenaza para la seguridad de la población o la protección del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de salvaguardias;
- j) Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tecnológicos, comerciales o industriales y la adecuada aplicación de salvaguardias y medidas de protección física;
 - k) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear para el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material nuclear y radiactivo y de protección física del material transportado;
 - l) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias, permisos y autorizaciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización.
 - m) Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nucleares relevantes toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen

las existentes. Dentro de dicho procedimiento deberá prever que las modificaciones de normas existentes o el dictado de nuevas normas se fundamenten en un criterio de evaluación basado en la relación beneficio/costo de la aplicación de la nueva regulación;

- m) Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada;
- n) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;
- ñ) Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los temas sujetos a regulación;
- o) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.

Art. 17. — La Autoridad Regulatoria Nuclear estará dirigida y administrada por un directorio integrado por seis (6) miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, vocales.

Art. 18. — Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos de los cuales a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, debiendo contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Su mandato tendrá una duración de seis (6) años debiendo renovarse por tercios cada dos (2) años. Sólo podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional y pueden ser sucesivamente designados en forma indefinida.

En el caso de la primera designación el Poder Ejecutivo nacional deberá determinar la duración de los mandatos por sorteo.

Art. 19. — Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrán dedicación exclusiva, alcanzándose las incompatibilidades para funcionarios públicos previstas por la legislación vigente. No podrá ser designado integrante del directorio de tal Autoridad Regulatoria Nuclear quien sea titular de una licencia, permiso o autorización reglada por la presente ley, o tenga algún interés directo vinculado a dicha materia.

Art. 20. — El presidente del directorio durará seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser designado sucesiva e indefinidamente por períodos de ley. Ejercerá la representación legal de la Autoridad Regulatoria Nuclear. En caso de impedimento o ausencia transitoria será reemplazado por el vicepresidente.

Art. 21. — El directorio formará quórum con la presencia de cuatro (4) de sus miembros, uno de los cuales debe ser el presidente o el vicepresidente en su caso. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

En caso de empate el presidente o quien lo reemplaza tendrá doble voto.

Art. 22. — Son funciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear:

- a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de la autoridad;
- b) Dictar el reglamento de funcionamiento del directorio;
- c) Entender en todas las cuestiones referidas al personal de la autoridad;
- d) Formular el presupuesto anual y cálculo de recursos que elevará por intermedio del Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación para su aprobación junto con el presupuesto general de la Nación;
- e) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.

Art. 23. — La Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin establezca la autoridad. Estará sujeta al régimen de contralor público.

Art. 24. — La Autoridad Regulatoria Nuclear concecionará anualmente un proyecto de presupuesto que será publicado y del cual se le dará vista a los sujetos obligados al pago de la tasa regulatoria prevista en el artículo 28 de la presente ley, quienes podrán formular objeciones fundadas dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de tal publicación.

Art. 25. — Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se formarán con los siguientes ingresos:

- a) La tasa regulatoria que se crea en el artículo 28 de la presente ley;
- b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier título reciba;
- c) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos;
- d) Los aportes del Tesoro nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario;
- e) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de leyes y reglamentaciones aplicables.

Art. 26. — Los licenciarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.

Para el caso de centrales de generación nucleoelectrica esta tasa regulatoria anual no podrá ser superior al valor equivalente al precio promedio anual de cien megavatios hora (100 MW/h) en el Mercado Eléctrico

Mayorista determinado en función de los precios vigentes en dicho mercado el año inmediato anterior. Dicha suma deberá abonarse por megavatio de potencia nominal instalada nuclear hasta que finalicen las tareas de retiro de combustible irradiado del reactor en la etapa de retiro de servicio a cargo del explotador de dicha instalación.

Las nuevas centrales nucleoelectricas deberán además abonar, también anualmente y por adelantado, las tasas regulatorias correspondientes a la construcción y el proceso de licenciamiento, las que serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Para el resto de los licenciatarios titulares de una autorización o permiso sujetos a regulación, la Autoridad Regulatoria Nuclear dictará el correspondiente régimen de tasas por licenciamiento e inspección, el que no podrá exceder el cero con cinco por ciento (0,5 %) de los ingresos o indicador equivalente de la actividad sujeta a regulación del año fiscal anterior.

La mora en el pago de la tasa o de las multas previstas en el artículo 16, inciso g) será automática y devengará los intereses punitivos que determine la autoridad de aplicación. El certificado de deuda por falta de pago expedido por la Autoridad Regulatoria Nuclear será título suficiente para habilitar el procedimiento ejecutivo ante los tribunales federales en lo civil y comercial.

Art. 27. — El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación, no siendo de aplicación el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.

Art. 28. — En sus relaciones con los particulares y con la administración pública la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias.

Art. 29. — Cuando como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o por denuncia de terceros, la Autoridad Regulatoria Nuclear considerase que cualquier acto de un licenciatario de instalación nuclear, de un titular de una autorización o permiso o de una persona física o jurídica que se encuentre en algún aspecto sujeto a regulación y control, así como de quienes utilicen o produzcan tecnología nuclear o gestionen residuos radiactivos, es violatorio de la presente ley, de su reglamentación, o de las resoluciones que dicta la Autoridad Regulatoria Nuclear, notificará a todas las partes interesadas, estando facultada para, previo a resolver sobre la existencia de la violación, disponer las medidas preventivas que estime convenientes.

CAPÍTULO III

Definiciones

Art. 30. — A los fines de la presente ley enténdase por:

- a) *Actividades nucleares*, los usos de las transmisiones nucleares a escala macroscópica;

b) *Material nuclear*, el plutonio 239, uranio 233, uranio 235, uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233, uranio conteniendo una mezcla isotópica igual a la encontrada en la naturaleza, uranio empobrecido en el isótopo 235, torio con pureza nuclear o cualquier material que contenga uno o más de los anteriores;

c) *Instalación nuclear*, concepto entendido en los términos definidos en el artículo 19, inciso j) de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares aprobada por ley 17.048;

d) *Instalación nuclear relevante*, incluye reactor nuclear, instalación crítica, instalación radiactiva relevante y acelerador relevante, de acuerdo a las definiciones establecidas o a establecer por la Autoridad Regulatoria Nuclear;

e) *Información restringida*, toda información que un solicitante o titular de una licencia, permiso o autorización entregue a la Autoridad Regulatoria Nuclear y que deba ser tratada de manera confidencial en virtud de obligaciones legales o contractuales de dicho titular, o la que esté relacionada con:

- I. Los procesos y tecnologías para la producción de material fisionable especial.
- II. La aplicación específica de salvaguardias.
- III. Los sistemas de protección física implementados en instalaciones nucleares.

f) *Material fisionable especial*, el plutonio, el uranio 233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233 y cualquier material que contenga uno o varios de los elementos citados;

g) *Producción de material fisionable especial*, la separación química del material fisionable especial de otras sustancias o la producción por métodos de separación isotópica de materiales fisionables especiales.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 31. — La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física recae inexcusablemente en el poseedor de la licencia, permiso o autorización. El cumplimiento de lo establecido en esta ley, y en las normas y requerimientos que de ellas se deriven, no lo exime de tal responsabilidad ni de hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad radiológica y nuclear, la salvaguardia y la protección física.

El titular de una licencia, permiso o autorización puede delegar total o parcialmente la ejecución de tareas, pero mantiene integralmente la responsabilidad establecida en este artículo.

Art. 32. — El Estado nacional será el único propietario de los materiales fisionables especiales contenidos

en los elementos combustibles irradiados al ejecutarse una actividad abarcada por la presente ley así como de los materiales fusionables especiales que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país.

Art. 33. — Derógase el artículo 2º, el artículo 5º, el artículo 9º, el artículo 11, el artículo 16 y el artículo 17 del decreto ley 22.498 del 19 de diciembre de 1956.

CAPÍTULO V

Privatizaciones

Art. 34. — Declárase sujeta a privatización la actividad de generación nucleoelectrica que desarrolla Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoelectrica Argentina S.A.), como una unidad productiva indivisible, en forma directa o asociada con otras entidades, en sus distintos aspectos (construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, retiro de servicio de centrales nucleares), así como la de dirección y ejecución de obra de centrales nucleares que desarrolla la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE S.A.).

Esta privatización deberá asegurar la terminación de la central nucleoelectrica en construcción en un plazo no mayor de seis (6) años a partir de la sanción de la presente ley.

Art. 35. — Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoelectrica Argentina S.A.) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:

- a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoelectrica existente y/o la construcción de una nueva;
- b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoelectrica.

Art. 36. — Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoelectrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades, considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

Art. 37. — A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas,

de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

Art. 38. — El licenciatario de las centrales nucleoelectricas o la sociedad que se constituya con el objeto de la privatización autorizada en el artículo 34, contratará su provisión de agua pesada a la Planta Industrial de Agua Pesada instalada en el país y deberá responsabilizarse de la devolución del agua pesada adquirida para la Central Nuclear Embalse, conforme a las características técnicas de calidad y precio internacional.

Art. 39. — Los procesos de privatización autorizados en el presente capítulo se regirán por la ley 23.696, el artículo 98 de la ley 24.065, el artículo 14 de la ley 21.629 y por lo dispuesto en esta ley.

Art. 40. — Las centrales nucleoelectricas deberán utilizar combustible nuclear procedente o elaborado de minerales radiactivos de yacimientos ubicados en el país.

Art. 41. — La presente ley comenzará a regir a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Art. 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIENNI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al proyecto presentado por los diputados Miglionez y Abasto.

Disidencia total del senador nacional doctor Alfredo Avelin al dictamen de comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano sobre el proyecto de ley nuclear (C.D.-52/96)

Honorable Senado:

En opinión del suscrito el problema central de aprobar el proyecto de referencia reside en la convalidación — a través del artículo 34 y conexos — de una serie de interrogantes que se han registrado en relación a la privatización de las centrales nucleares y que no han sido aclarados todavía por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Me refiero concretamente a los siguientes puntos inherentes a la cuestión de la valuación de dichas centrales:

1. Falta de respuesta al pedido de informes sobre valuación de las centrales nucleares.

En abril de 1995 fue aprobado por este Honorable Senado un proyecto de comunicación de mi autoría, el S.-1.200/94, del 18-10-94, pidiendo informes al gobierno nacional sobre la valuación de las centrales nucleares, que fue enviado al Poder Ejecutivo por nota D.R.-192/95, del 5-4-95 pero que no ha tenido respuesta hasta la fecha.

La contestación a este pedido de informes fue reclamada reiteradamente a través de otros proyectos relacionados con el tema, en particular:

— El S.-1.702, del 30-11-95, proyecto de comunicación complementario del S.-1.200/94, pidiendo informes sobre absorción de pasivos, avales del Estado, préstamos existentes y nuevos créditos de Nucleoeléctrica S.A. (NASA).

— El S.-1.754, del 12-12-95, proyecto de resolución insistiendo en el pedido de respuesta al S.-1.200/94 y solicitando una investigación sobre lo actuado en materia de valuación de las centrales nucleares.

— El S.-1.824, del 26-12-95, proyecto de resolución que pide al Poder Ejecutivo derogar la resolución 283/94 de la ex Secretaría de Energía —sobre valuación de las centrales nucleares— y la investigación específica del caso de la recepción provisoria de la Central Nuclear Embalse (CNE), que ya está contenida en dicha estimación.

— El S.-1.504/96, del 18-8-96, proyecto de resolución que insiste nuevamente en que el Poder Ejecutivo dé respuesta al S.-1.200/94, pide aclaración de ciertos términos de la respuesta del gobierno al S.-1.702/95 (P.E. 930/95) y solicita tener en cuenta la existencia de un juicio en el fuero federal sobre la valuación de las centrales nucleares.

Ninguna de estas reclamaciones ha permitido obtener la contestación del gobierno nacional respecto del S.-1.200/94.

Cabe destacar, a título informativo, que el proyecto de comunicación S.-1.702/95 antes citado, del 30-11-95, pedido de informes que era complementario del anterior, fue aprobado después del S.-1.200, el 20-12-95, pero sí fue contestado por el gobierno nacional, con fecha 13-6-96, mientras que no se ha dado respuesta al anterior y principal (el S.-1.200/94).

La ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo a todos estos reclamos evidencia una seria falta de voluntad de contestación por parte del gobierno nacional.

2. Existencia de una investigación judicial en curso.

Actualmente se sustancia en el Juzgado Federal N° 2 Criminal y Correccional —a cargo del doctor Jorge L. Ballester— la causa 17.208, caratulada "Sañes, Raúl Eduardo s/Denuncia", por la cual se investiga irregularidades en la valuación de las centrales nucleares.

Tales irregularidades son básicamente las mismas que las planteadas en los proyectos citados de mi autoría.

No parece conveniente que este Congreso Nacional avance en la aprobación de una ley sobre actividades nucleares que convalide lo actuado por el Poder Ejecutivo en esta materia de valuación sin que se haya concluido el citado expediente o se tenga, al menos, un claro panorama del estado de dicho expediente.

El titular de la Comisión de Asuntos Administrativos y Constitucionales, senador nacional Julio A. San Millán, remitió una nota, sobre el tema al citado juez Ballester con fecha 28-11-96, de la que todavía no se ha tenido contestación.

3. No intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En conocimiento que la Auditoría General de la Nación ha sido informada también sobre este problema de la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de valuación de las centrales nucleares, el suscrito hizo llegar a ese organismo copia de las principales iniciativas presentadas, así como las respuestas parciales obtenidas del Poder Ejecutivo, entendiendo que las mismas pueden resultar de utilidad en caso que la AGN realice una investigación al respecto.

El senador San Millán, remitió igualmente, una nota a la Auditoría sobre este mismo tema, con fecha 27-11-96, de la cual todavía no se ha tenido respuesta.

Se considera que la AGN —ente dependiente del Congreso de la Nación— constituye, en estas circunstancias, el ámbito técnico adecuado para tomar intervención en este asunto.

4. Nulidad del decreto 1540/94 y de la resolución 283/94.

El proyecto de ley sobre actividad nuclear, que hoy se debate, convalidaría el avance unilateral e ilegal realizado por el Poder Ejecutivo en materia de reestructuración y privatización de las centrales atómicas, a través del decreto P.E.-1540/94 y de la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía, los que contienen irregularidades de procedimiento y de valuación.

En opinión del suscrito el Congreso Nacional debe derogar el decreto 1540 y, consiguientemente, la resolución 283. Esta posición con respecto a la nulidad del decreto 1540 ya fue sostenida por el suscrito en su proyecto de ley S.-009/94, del 6-11-94, que no tuvo tramitación en este Honorable Senado.

La aprobación del proyecto de ley nuclear conlleva el peligro de convalidación de tales documentos, dejando aitzerto el camino para que el gobierno nacional siga adelante con el proceso de venta de la NASA a pesar de las irregularidades señaladas.

5. Pedido de investigación pendiente sobre las irregularidades denunciadas por parte del Congreso.

El proyecto de resolución S.-1.754/95, del 12-12-95, que solicitaba respuesta sobre el S.-1.200/94, pide también una investigación de todo lo actuado en relación a la valuación de las centrales nucleares.

La idea es que —como consta en la iniciativa— se comunique y/o dé participación de estas actuaciones a los organismos de contralor del Estado, fundamentalmente la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) y la Auditoría General de la Nación (AGN), así como —en lo que correspondiere— al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA).

Avanzar en la aprobación del proyecto de ley nuclear sin haber despejado este tema en lo pertinente a la valuación de la NASA dejaría un grave punto oscuro en la aclaración oportuna de responsabilidades a nivel de gobierno.

6. Información no oficial e insuficiente del Poder Ejecutivo a través de la NASA.

Conforme lo expuesto en el punto d) del presente trabajo, el gobierno nacional no ha dado respuesta hasta la fecha al pedido de este Honorable Senado (proyecto de comunicación S-1.200/94 - Nota D.R. 102/95).

Recentemente —con fecha 28-11-96— el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de este cuerpo, doctor Julio A. San Millán, remitió una nota al actual secretario de Energía y Puertos, ingeniero Alfredo H. Mirkin, solicitando la información referida a la tasación y valuación de las centrales nucleares antes del tratamiento del proyecto de ley sobre actividad nuclear (C.D. 52/96).

Por comunicación de la citada comisión al suscrito, del 10 del corriente, se toma conocimiento de un memorándum con la firma del presidente de la NASA, doctor J. E. Martínez Ceballos, y del titular de la Asesoría Jurídica de la misma, doctor F. M. Antonini, referente a la causa 17.266 (no al proyecto S-1.200/94 y siguientes) y que habría sido transmitida como posición de la Secretaría de Energía en respuesta a la nota del senador San Millán.

Tal respuesta —que, repito, no es la contestación oficial requerida insistentemente al Poder Ejecutivo— contiene, sin embargo, algunas afirmaciones que cabe destacar:

a) Reconoce que el valor de los activos físicos de la CNEA transferidos a la NASA (517 millones de pesos) no es coincidente con el capital social aportado a la misma (261 millones). Esto es, una diferencia de 256 millones en menos;

b) Considera que constituye un error asimilar el capital social de la NASA con el valor de la empresa en marcha o compararlo con el valor de los activos correspondientes transferidos por la CNEA (las centrales nucleares);

c) Expresa que el valor del capital inicial de la NASA fue determinado conforme al método de valuación del Flujo de Fondos Netos Descontados "generados por la actividad o activo que se privatiza";

d) Justifica, consecuentemente, la diferencia apuntada en el párrafo a) en que el valor de los activos de la CNEA es el registrado según libros, mientras que el del capital de la NASA corresponde al calculado según el criterio de flujo de fondos netos descontados, según lo consignado en la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía.

Aparentemente, esta nota de la presidencia de la NASA habría sido tomada como respuesta satisfactoria por parte de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado a los efectos del proyecto de ley nuclear.

Pero aquí cabe una observación importante a las aseveraciones formuladas en dicha nota: la sospecha de subvaluación de las centrales nucleares no proviene solamente de dudar del revalúo contable negativo de los activos físicos transferidos (de cuya información todavía se carece) sino de cuestionar la forma en que habría sido realizado el propio estudio de valuación

de la NASA, aplicando el citado criterio de Flujo de Fondos Netos Descontados.

Es decir, aquí no se trata sólo de confrontar cifras contables de activos de la CNEA contra capital social de la NASA, determinado por el método de flujo de fondos, sino de advertir una subvaluación que se habría producido dentro de la aplicación de este método.

Dicho con otras palabras: no estamos —como dice la nota de la presidencia de la NASA— ante un error de interpretación (valor contable de activos en lugar de flujo de fondos) sino de un problema de omisión de valores "dentro" de la aplicación del propio método de valuación elegido.

En función de informaciones parciales obtenidas por el suscrito se puede identificar, en principio, dónde residirían algunos puntos claves de la sospechada subvaluación.

La resolución 283/94 se apoyó en un informe elaborado por la consultora Expectativa, de agosto de 1994. Ese trabajo ofrece más de 80 alternativas de valuación de la NASA (que van desde 20 a 1.100 millones de pesos), entre las cuales la Secretaría de Energía habría seleccionado (sin que se conozcan las razones) la opción de 261 millones.

Para determinar este "abanico" de alternativas, la consultora citada aplicó el método del flujo de fondos netos descontados generados por la NASA.

Con posterioridad, se habría detectado y reconocido que en la citada valuación no fueron tenidos en cuenta 8 rubros, por valor de unos 148 millones de pesos. Esto es: una omisión de importes que debieron ser considerados dentro del método elegido por las autoridades.

Además, por lo que sabemos, no se encontraría aún debidamente aclarado un monto de 128 millones que aparece descontado de los activos de la Central Nuclear Embalse y que corresponden a un problema de arrastre de larga data vinculado con la falta de recepción definitiva de dicha central.

Ambos ítem —que suman 276 millones de pesos (cifra sintomáticamente cercana a la diferencia apuntada en el punto a) de 256 millones)— no son entonces producto de una errónea asimilación de registros de activos con criterio de valuación según el método de flujo de fondos netos descontados —como dice ahora la nota de la NASA—, sino producto de una omisión de rubros dentro de la aplicación del propio método.

Dicho en otros términos: la nota de la presidencia de la NASA —aparte de no constituir una respuesta oficial del Poder Ejecutivo al Senado— contendría una seria distorsión en la explicación de la subvaluación de las centrales nucleares, que viene así a corroborar los interrogantes de base que son motivo de mi cuestionamiento.

En conclusión:

Aprobar el presente proyecto de ley nacional de la actividad nuclear significa convalidar serias irregularidades que comprometen los intereses y el patrimonio del Estado nacional en una materia en que el Poder Ejecutivo ha avanzado unilateralmente —a través del decreto P.E.-1.540/94 y de la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía— a despecho de la oportuna

competencia del Congreso sobre el tema y sin suministrar la debida información relativa a la valuación de las centrales nucleares.

Esta valuación está fundadamente sospechada de haberse producido fijando una tasación baja de la NASA, sin el debido respaldo técnico y económico, sin que el gobierno nacional haya brindado las aclaraciones del caso y sin que hayan intervenido —o concluido su labor— otros organismos de investigación del Estado.

Por eso, en mi opinión, esta Honorable Cámara no debe aceptar lo actuado por el gobierno nacional en este problema, no sólo porque ello implica la ratificación de un comportamiento cuestionable seguido por las autoridades de la administración central sino, además, porque una confirmación de este tipo afecta la transparencia en las decisiones de gobierno y hasta la misma garantía de seguridad jurídica del proceso de privatización a que el Poder Ejecutivo quiere arribar.

Ya la política de privatizaciones en la Argentina, en su conjunto, está puesta en "tela de juicio" como apéndice de una fórmula de pago con activos del servicio de la deuda externa. Sería más grave todavía que a ello se sume, en este caso de las centrales nucleares, la existencia de una subvaluación de las mismas.

Por las razones expuestas, el suscrito fundamenta su oposición al dictamen de referencia y advierte sobre la grave responsabilidad que este Honorable Congreso asumiría al convalidar lo actuado por el Poder Ejecutivo y no dejar aclarado como corresponde el problema de una valuación discutible de la NASA en caso de aprobar el presente proyecto de ley.

Alfredo Avellán.

Dictamen de comisión en minoría

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano, en disidencia parcial, han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-52/96), sobre actividad nuclear; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

*Actividad nuclear. Funciones del Estado
Criterio de regulación. Jurisdicción*

Artículo 1º.—En materia nuclear el Estado nacional fijará la política y ejercerá las funciones de investigación y desarrollo, regulación y fiscalización, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La actividad nuclear de índole productiva y de investigación, desarrollo y servicio que pueda ser organizada comercialmente será desarrollada tanto por el Estado nacional, provincial o municipal como por el sector privado.

En la ejecución de la política nuclear se observarán estrictamente las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco); el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como también los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y el Régimen Nacional del Control de Exportaciones Sensitivas (decreto 603/92).

Definiciones

Art. 2º.—A los fines de la presente ley entiéndase por:

- a) Actividades nucleares, los usos de las transmutaciones nucleares a escala microscópica;
- b) Material nuclear, el plutonio 239, uranio 235, uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233, uranio conteniendo una mezcla isotópica igual a la encontrada en la naturaleza, uranio empobrecido en el isótopo 235, torio con pureza nuclear o cualquier material que contenga uno o más de los anteriores;
- c) Instalación nuclear, concepto entendido en los términos definidos en el artículo 1º, inciso j) de la Convención de Viena de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares aprobada por la ley 17.048;
- d) Instalación nuclear relevante, incluye reactor nuclear, instalación crítica, instalación radiactiva relevante y acelerador relevante, de acuerdo a las definiciones establecidas o a establecer por la Autoridad Regulatoria Nuclear;
- e) Información restringida, toda información que un solicitante o titular de una licencia, permiso o autorización entregue a la Autoridad Regulatoria Nuclear y que deba ser tratada de manera confidencial en virtud de obligaciones legales o contractuales de dicho titular, o la que esté relacionada con:
 - I. Los procesos y tecnologías para la producción de material fisionable especial.
 - II. La aplicación específica de salvaguardias.
 - III. Los sistemas de protección física implementados en instalaciones nucleares;
- f) Material fisionable especial, el plutonio, el uranio 233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233 y cualquier material que contenga uno o varios de los elementos citados;
- g) Producción de material fisionable especial, la separación química del material fisionable es-

pecial de otras sustancias o la producción por método de separación isotópica de materiales fisionables especiales.

Art. 3º — La Comisión Nacional de Energía Atómica crea por decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950 y reorganizada por decreto ley 22.498/56, ratificado por ley 14.467, continuará funcionando como ente autárquico en jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional y tendrá a su cargo:

- a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear;
- b) Elaborar un plan de actividades plurianual;
- c) Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnología en materia nuclear, comprendida la realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica;
- d) Propender, percibiendo la compensación económica correspondiente a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas por el organismo, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la República Argentina;
- e) Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos cumpliendo las funciones que le asigne la legislación específica;
- f) Determinar la forma de retiro de servicios y desmantelamiento de centrales de generación nucleoelectrónica y de toda otra instalación nuclear relevante;
- g) Prestar con cargo los servicios que le sean requeridos por las centrales de generación nucleoelectrónica y otra instalación nuclear;
- h) Ejercer la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables especiales contenidos en los elementos combustibles irradiados;
- i) Ejercer la propiedad estatal de los materiales fisionables y fisionables especiales que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país;
- j) Desarrollar, construir y operar reactores nucleares prototipos de baja potencia y de investigación;
- k) Desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e industria;
- l) Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin que ello implique excluir al sector privado en tal actividad;
- ll) Efectuar el desarrollo de materiales y proceso de fabricación de elementos combustibles para su aplicación en ciclos avanzados;
- m) Desarrollar programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de la tecnología nuclear;

n) Establecer programas de cooperación con terceros países para los programas enunciados en el inciso precedente y para la investigación y el desarrollo de la tecnología de fusión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;

- o) Promover estudios para la protección del ambiente;
- p) Promover y realizar todo otro estudio y aplicación científica de las transmutaciones y reacciones nucleares;
- q) Mantenerse actualizada en los avances de la tecnología mundial en todas sus etapas, haciendo un aprovechamiento óptimo de ese conocimiento;
- r) Establecer relaciones directas con otras instituciones extranjeras con objetivos afines;
- s) Celebrar convenios con los operadores de reactores nucleares de potencia, a los fines de realizar trabajos de investigación y desarrollo;
- t) Informar en forma permanente a la sociedad sobre la actividad nuclear y estado de desarrollo de la misma.

Art. 4º — La Comisión Nacional de Energía Atómica se regirá en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin establezca el directorio de la comisión. Estará sujeta al régimen de contralor público.

El personal de la comisión estará sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación.

Art. 5º — Las funciones del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica serán:

- a) Realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y las funciones determinadas por la ley;
- b) Aprobar los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el presupuesto anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional;
- c) Aprobar el informe anual de actividades;
- d) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre los asuntos relacionados con la energía atómica y sus aplicaciones;
- e) Establecer relaciones con instituciones extranjeras u organismos regionales o internacionales que tengan objetivos afines, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
- f) Aceptar bienes y donaciones;
- g) Concertar acuerdos con entidades públicas o privadas para la realización de los planes que concurren a los fines de la institución;
- h) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la estructura del organismo.

Art. 6º — El presidente del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que conciernen a la institución y de las resoluciones de directorio. Le compete:

- a) Asumir la representación legal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tanto administrativa, judicial como extrajudicialmente;
- b) Ejercer la dirección y administración de la institución;
- c) Convocar y presidir las reuniones de directorio;
- d) Someter al directorio los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el proyecto de presupuesto igual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional;
- e) Otorgar mandatos generales y especiales;
- f) Integrar por sí o por medio de representantes comisiones nacionales, provinciales y sectoriales en materia de competencia del organismo, incluyendo los aspectos ambientales;
- g) Informar al directorio la distribución general del presupuesto anual otorgado;
- h) Informar al directorio acerca del cumplimiento de los planes, proyectos y otras actividades previstas;
- i) Proponer al directorio la estructura del organismo en los niveles no definidos por el Poder Ejecutivo;
- j) Designar, promover, sancionar y remover al personal en conformidad con las leyes y reglamentos aplicados;
- k) Designar y promover al personal que cumplirá funciones jerárquicas y de coordinación;
- l) Designar y enviar representantes y destacar en comisión a personal idóneo a conferencias, reuniones o congresos regionales o internacionales;
- m) Delegar parcialmente en los órganos internos que determine, las facultades que esta ley le atribuye.

Art. 7º — Los recursos de la Comisión Nacional de Energía Atómica se formarán con los siguientes ingresos:

- a) Los aportes del Tesoro nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario y por leyes especiales;
- b) El producido de su actividad en el campo de la producción y la prestación de servicios;
- c) Los subsidios, legados, herencias, donaciones y transferencias que reciba bajo cualquier título;
- d) Un canon que determine el Poder Ejecutivo nacional destinado a financiar las funciones de investigación y desarrollo que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que será un porcentaje de los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica generada por las

centrales nucleares a cargo de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima o quien la sustituya legalmente;

- e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.

Art. 8º — La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá a su cargo la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de los materiales nucleares, transporte de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, de acuerdo al artículo 1º de la presente ley en lo pertinente; así como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su competencia.

Art. 9º — La Autoridad Regulatoria Nuclear deberá desarrollar las funciones de regulación y control que le atribuye esta ley con los siguientes fines:

- a) Proteger a las personas, y al ambiente, contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes;
- b) Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en la República Argentina;
- c) Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República Argentina;
- d) Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

Art. 10. — Toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear deberá:

- a) Ajustarse a las regulaciones que imparta la Autoridad Regulatoria Nuclear en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización que lo habilite para su ejercicio;
- b) Cumplir todas las obligaciones que en materia de salvaguardias y no proliferación haya suscrito o suscriba en el futuro la República Argentina;
- c) Asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por la ley 17.048, por la suma de ochenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 80.000.000) por accidente nuclear en cada instalación nuclear.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ajustar la suma establecida como límite de responsabilidad en el párrafo anterior, en el caso de que se revisaran los términos de

la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, una vez que la modificación sea ratificada por ley o cuando se ratificara cualquier otro documento internacional que así lo hiciera necesario.

Entiéndase por daño nuclear, conforme lo define la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, ratificada por ley 17.048 la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas y otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear o de las sustancias nucleares que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella; o de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra fuente de radiaciones que se encuentren dentro de una instalación nuclear.

Se considera comprendido en el concepto de responsabilidad de daño nuclear, a cargo de un explotador de una instalación nuclear relativo a:

- I. Los daños que se produjeren sobre el personal del explotador así como sobre el personal de sus contratistas y subcontratistas con motivo del accidente nuclear de una instalación nuclear que opere dicha sociedad.
- II. Los perjuicios que se causen con motivo del accidente nuclear a los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica que se encontraren desarrollando tareas referentes a la aplicación de salvaguardias previstas en acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina, a los agentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear que se encontraren cumpliendo funciones dentro de la instalación nuclear y a cualquier otra persona que haya sido autorizada a ingresar dentro de las instalaciones (de acuerdo a las normas vigentes al respecto en la instalación correspondiente).
- III. Los accidentes que se produjeren con sustancias nucleares fuera del sitio de la instalación o fuera del transporte, cuando al momento de ocurrir el accidente nuclear tales sustancias hubieren sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono.
- IV. Los daños que directa o indirectamente afecten o puedan afectar en forma inmediata o mediata al ambiente, así como los gastos ocasionados como consecuencia del riesgo o peligro de daño inminente y grave, que provengan de la actividad nuclear en cualquiera de sus etapas.

Asumir la responsabilidad por los costos que ocasione el cierre o interrupción de las actividades nucleares o la salida de servicio, temporal o definitiva, de una central de generación nucleoelectrónica.

Para el cumplimiento de los incisos c) y d) deberá contratarse un seguro o constituirse una garantía financiera o incluso constituirse un fondo en el caso del último

inciso mencionado, a satisfacción del Poder Ejecutivo nacional o de quien éste designe, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente.

Todo explotador de una instalación nuclear relevante deberá aportar a un fondo para retiro de servicio y desmantelamiento de la misma, y para la gestión de los residuos radiactivos. La forma de constitución, administración y control de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.

Asimismo, deberá notificar en forma inmediata a la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre cualquier accidente o falla de operación que se produzca como parte del desarrollo de las actividades nucleares.

Art. 11. — Declárase sujeta a jurisdicción nacional la regulación y fiscalización de la actividad nuclear, en los aspectos definidos en el artículo 8º, conforme lo establecido por el artículo 12 de la presente ley.

Art. 12. — Todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante, así como sus ampliaciones y/o modificaciones, deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear con la aprobación del estado provincial donde se proyectó instalar el mismo.

Art. 13. — Para definir la ubicación de un repositorio temporario o definitivo para residuos de alta, media y baja actividad, la Comisión Nacional de Energía Atómica propondrá un lugar de emplazamiento. Este deberá contar con la aprobación de la Autoridad Regulatoria Nuclear en lo referente a seguridad radiológica y nuclear y la aprobación por ley del estado provincial donde se ha propuesto la localización. Deberá convocarse a una audiencia pública y realizarse una evaluación de impacto ambiental que deberá ser puesta a disposición del público en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

La audiencia pública mencionada deberá ser convocada con una anticipación no menor a diez (10) días hábiles, en un medio de difusión de circulación local, brindándose la información adecuada vinculada al emprendimiento u obra.

Tales requisitos son previos y esenciales a cualquier trámite. Se incluye bajo este concepto aquellos repositorios, temporarios o definitivos, que a la fecha tuvieron iniciados cualquier estudio de prefactibilidad técnica, así como las ampliaciones y/o modificaciones de aquellos que se encuentren en funcionamiento.

Art. 14. — Los lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios o definitivos que la Comisión Nacional de Energía Atómica o Nucleoelectrónica Argentina Sociedad Anónima tenga en funcionamiento con residuos o desechos nucleares depositados al momento de sancionarse la presente ley, y sus vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo o fluviales no requieren para continuar en operación o para viabilizar el acceso a retiro de los residuos de los repositorios de tal índole, autorización especial legislativa ni autorización de la municipalidad o provincia en cuyo territorio se encuentre localizado el repositorio o sus vías de acceso

CAPÍTULO II

Autoridad Regulatoria Nuclear

Art. 15. — La Autoridad Regulatoria Nuclear actuará como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación. Dicha autoridad será la sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear.

Art. 16. — La Autoridad Regulatoria Nuclear gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfiera al Ente Nacional Regulador Nuclear, y por los que adquiriera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. La autoridad aprobará su estructura orgánica, previa intervención de la Secretaría de la Función Pública de la Nación.

Art. 17. — La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá las siguientes funciones, facultades y obligaciones:

- a) Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física y ambiental;
- b) Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de centrales de generación nucleoelectrica;
- c) Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y concentración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores relevantes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.
- d) Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime necesaria;
- e) Proponer ante el Poder Ejecutivo nacional la cesión, prórroga o reemplazo de una concesión de uso de una instalación nuclear de prioridad estatal cuando hubiere elementos que así lo aconsejen, o su caducidad cuando se motive en incumplimientos de las normas que dicte en materia de seguridad radiológica y nuclear;
- f) Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes frente al incumplimiento de los licenciarios o titulares de una autorización o permiso reglados por la presente ley, así como también solicitar órdenes de allanamiento y requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera necesario para el debido ejercicio de las facultades otorgadas por esta norma;
- g) Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta en: apercibimien-

to, multa que deberá ser aplicada en forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potencialidad del daño, suspensión de una licencia, permiso o autorización o su revocación. Dichas sanciones serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal;

- h) Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación de normas que dicte en ejercicio de su competencia, asegurando el principio del debido proceso;
 - i) Disponer el decomiso de los materiales nucleares o radiactivos, así como también clausurar preventivamente las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear cuando se desarrollen sin la debida licencia, permiso o autorización o ante la detección de faltas graves a las normas de seguridad radiológica y nuclear y de protección de instalaciones.
- A tales efectos, se entiende por falta grave al incumplimiento que implique una seria amenaza para la seguridad de la población o la protección del ambiente o cuando no pueda garantizarse la aplicación de las medidas de protección física o de salvaguardias;
- j) Proteger la información restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tecnológicos, comerciales o industriales y la adecuada aplicación de salvaguardias y medidas de protección física y ambiental;
 - k) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear para el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de material nuclear y radiactivo y de protección física del material transportado;
 - l) Establecer, de acuerdo con parámetros internacionales, normas de seguridad radiológica y nuclear referidas al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares y otorgar las licencias, permisos y autorizaciones específicas habilitantes para el desempeño de la función sujeta a licencia, permiso o autorización;
 - ll) Determinar un procedimiento de consultas con los titulares de licencias para instalaciones nucleares relevantes toda vez que se propongan nuevas normas regulatorias o se modifiquen las existentes;
 - m) Evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad del daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada;
 - n) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre la actividad del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;

- n) Solicitar información a todo titular de licencia, permiso o autorización sobre los temas sujetos a regulación, quienes estarán obligados a entregarla;
- o) Aprobar planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares, programas de evaluación ante emergencias y de entrenamiento para trabajadores y vecinos; todos ellos con la activa participación de la comunidad;
- p) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.

Art. 18. — La Autoridad Regulatoria Nuclear estará dirigida y administrada por un directorio integrado por seis (6) miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes, vocales.

Art. 19. — Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear serán designados por el Poder Ejecutivo nacional. Dos de los cuales a propuesta de la Cámara de Senadores y Diputados respectivamente, otro en representación de las provincias en que se desarrollen actividades nucleares y otro en representación de la comunidad científico-tecnológica independiente, debiendo todos contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia. Su mandato tendrá una duración de seis (6) años debiendo renovarse por tercios cada dos (2) años. Sólo podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional y pueden ser sucesivamente designados en forma indefinida.

En el caso de la primera designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá determinar la duración de los mandatos por sorteo.

Art. 20. — Los miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrán dedicación exclusiva, alcanzándoles las incompatibilidades para funcionarios públicos previstas por la legislación vigente. No podrá ser designado integrante del directorio de tal Autoridad Regulatoria Nuclear quien sea titular de una licencia, permiso o autorización reglada por la presente ley, o tenga algún interés directo vinculado a dicha materia.

Art. 21. — El presidente del directorio durará seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser designado sucesiva e indefinidamente por periodos de ley. Ejercerá la representación legal de la Autoridad Regulatoria Nuclear. En caso de impedimento o ausencia transitoria será reemplazado por el vicepresidente.

Art. 22. — El directorio formará quórum con la presencia de cuatro (4) de sus miembros, uno de los cuales debe ser presidente o el vicepresidente en su caso. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

En caso de empate el presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto.

Art. 23. — Son funciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear:

- a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de la autoridad;
- b) Dictar el reglamento de funcionamiento del directorio;

- c) Entender en todas las cuestiones referidas al personal de la autoridad;
- d) Formular el presupuesto anual y cálculo de recursos que elevará por intermedio del Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación para su aprobación junto con el presupuesto general de la Nación;
- e) En general, toda otra acción dirigida al mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.

Art. 24. — La Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin establezca la autoridad. Estará sujeta al régimen de contralor público.

Art. 25. — La Autoridad Regulatoria Nuclear confeccionará anualmente un proyecto de presupuesto que será publicado y del cual se le dará vista a los sujetos obligados al pago de la tasa regulatoria prevista en el artículo 27 de la presente ley, quienes podrán formular objeciones fundadas dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de tal publicación.

Art. 26. — Los recursos de la Autoridad Regulatoria Nuclear se formarán con los siguientes ingresos:

- a) La tasa regulatoria que se crea en el artículo 27 de la presente ley;
- b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que bajo cualquier título reciba;
- c) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos;
- d) Los aportes del Tesoro Nacional que se determinen en cada ejercicio presupuestario;
- e) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de leyes y reglamentaciones aplicables.

Art. 27. — Los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.

Para el caso de las centrales de generación nucleoelectrica esta tasa regulatoria anual será equivalente al valor del precio promedio anual de cien megavatios hora (100 MWh) en el Mercado Eléctrico Mayorista determinando en función de los precios vigentes en dicho mercado el año inmediato anterior. Dicha suma deberá abonarse por megavatios de potencia nominal instalada nuclear hasta que finalicen las tareas de retiro de combustible irradiado del reactor en la etapa de retiro de servicio a cargo del explotador de dicha instalación.

Las nuevas centrales nucleoelectricas deberán además abonar, también anualmente y por adelantado, las tasas regulatorias correspondientes a la construcción y el proceso de licenciamiento, las que serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Para el resto de los licenciarios titulares de una autorización o permiso sujetos a regulación, la Autoridad Regulatoria Nuclear dictará el correspondiente régimen de tasas por licenciamiento e inspección, el que no podrá exceder el cero con cinco por ciento (0,5 %) de los ingresos o indicador equivalente de la actividad sujeta a regulación del año fiscal anterior.

La mora en el pago de la tasa o de las multas previstas en el artículo 16, inciso g) será automática y devengará los intereses punitivos que determine la autoridad de aplicación. El certificado de deuda por falta de pago expedido por la Autoridad Regulatoria Nuclear será título suficiente para habilitar el procedimiento ejecutivo ante los tribunales federales en lo civil y comercial.

Art. 28. — El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación, no siendo de aplicación el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.

Art. 29. — En sus relaciones con los particulares y con la administración pública la Autoridad Regulatoria Nuclear se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias.

Art. 30. — Cuando como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o por denuncia de terceros, la Autoridad Regulatoria Nuclear considerase que cualquier acto de un licenciario de instalación nuclear, de un titular de una autorización o permiso o de una persona física o jurídica que se encuentre en algún aspecto sujeto a regulación y control, así como de quienes utilicen o produzcan tecnología nuclear o gestionen residuos radiactivos, es violatorio de la presente ley, de su reglamentación, o de las resoluciones que dicte la Autoridad Regulatoria Nuclear, notificará a todas las partes interesadas, estando facultadas para, previo a resolver sobre la existencia de la violación, disponer las medidas preventivas que estime convenientes.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 31. — La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física y ambiental, recae inexcusablemente en el poseedor de la licencia, permiso o autorización. El cumplimiento de lo establecido en esta ley, y en las normas y requerimientos que de ellas se deriven, no lo exime de tal responsabilidad ni de hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad radiológica y nuclear, la salvaguardia y la protección física y ambiental.

El titular de una licencia, permiso o autorización puede delegar total o parcialmente la ejecución de tareas, pero mantiene integralmente la responsabilidad establecida en este artículo.

Art. 32. — El Estado nacional será el único propietario de los materiales fisiónables especiales contenidos en los elementos combustibles irradiados al ejecutarse una actividad abarcada por la presente ley así como de

los materiales fusiónables y fusiónables especiales que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país.

Art. 33. — Derógase el artículo 2º, el artículo 5º, el artículo 9º, el artículo 11, el artículo 16 y el artículo 17 del decreto ley 22.498 del 19 de diciembre de 1956.

CAPÍTULO V

Privatizaciones

Art. 34. — Declárase sujeta a privatización la actividad de generación nucleoelectrica que desarrolla Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoelectrica Argentina S.A.), como una unidad productiva indivisible, en forma directa o asociada con otras entidades, en sus distintos aspectos (construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, retiro de servicio de centrales nucleares), así como la dirección y ejecución de obra de centrales nucleares que desarrolla la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas Sociedad Anónima (ENACE S.A.).

Esta privatización deberá asegurar la terminación de la Central Nucleoelectrica Atucha II en construcción en un plazo no mayor de cinco (5) años a partir de la adjudicación.

Art. 35. — Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoelectrica Argentina S.A.) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada prevista en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisión que signifiquen:

- a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoelectrica existente y/o la construcción de una nueva;
- b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoelectrica.

Art. 36. — Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoelectrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades, considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

Art. 37. — A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de

las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

Art. 38. — El licenciatario de las centrales nucleoelectricas o la sociedad que se constituya con el objeto de la privatización autorizada en el artículo 34, contratará su provisión de agua pesada a la Planta Industrial de Agua Pesada instalada en el país y deberá responsabilizarse de la devolución del agua pesada alquilada para la Central Nuclear Embalse, conforme a las características técnicas de calidad y precio internacionales.

Art. 39. — Los procesos de privatización autorizados en el presente capítulo se regirán por la ley 23.696, el artículo 96 de la ley 24.065, el artículo 14 de la ley 24.629 y por lo dispuesto en esta ley.

Art. 40. — Las centrales nucleoelectricas deberán utilizar combustible nuclear procedente o elaborado de minerales radiactivos de yacimientos ubicados en el país, siempre que reúna las características técnicas de calidad y precio internacionales.

Art. 41. — La presente ley comenzará a regir a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Art. 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 21 de marzo de 1997.

Antonio F. Cafiero.

El antecedente del presente dictamen no se publica por estar inserto en el Orden del Día Nº 59.

Dictamen de comisión en minoría

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Energía y de Ecología y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-52/96) sobre actividad nuclear; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY DE POLITICA NUCLEAR

El Senado y Cámara de Diputados...

TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas

Artículo 1º — La presente ley rige los aspectos relativos a la investigación y desarrollo, producción, regulación y control en materia nuclear.

Art. 2º — A los fines de la presente ley, se asignan a los términos abajo expuestos, los siguientes significados:

Radiaciones ionizantes: Radiaciones capaces de producir directa o indirectamente iones a su paso a través de la materia.

Material nuclear: Material que contiene sustancias que emiten radiaciones ionizantes.

Mineral nuclear: Mineral que contenga uranio o torio.

Isótopos radiactivos: Isótopos de los elementos naturales o artificiales que emiten radiaciones ionizantes.

Combustible nuclear: Elemento que contiene mineral nuclear en grado de pureza apropiado, lo que le permite continuar o mantener un proceso autosostenido de fisión, cuando es introducido dentro de un reactor nuclear.

Residuos radiactivos: Materiales nucleares que, en general, provienen como desecho de un proceso industrial de producción, separación o purificación. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso y se los suele clasificar en alta, media y baja radiactividad.

Reactor nuclear: Estructura con una geometría y configuración tal, que permite alojar a los combustibles nucleares rodeándolos de un elemento denominado moderador, de modo que se mantenga un proceso autosostenido de fisión.

Central nuclear: Instalación fija para la producción de energía mediante un reactor nuclear.

Instalaciones nucleares: Las definidas en el artículo 1º, inciso j) de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por ley 17.048.

Art. 3º — Constituyen objetivos a ser logrados a través de la aplicación de la presente ley:

3.1. Asegurar y desarrollar el dominio y las aplicaciones de la tecnología nuclear independiente, con fines pacíficos, para contribuir al desarrollo nacional.

3.2. Obtener la participación en la producción energética nacional de la energía nuclear, en la proporción de asegurar la autosuficiencia del país en materia de energía, ante cualquier eventualidad que disminuya el aporte brindado por otras fuentes de energía manteniendo el actual carácter diversificado de tales fuentes.

3.3. Desarrollar un programa continuado de investigación nuclear con fines pacíficos, integrando la investigación en las áreas energéticas y de ciencias de materiales, y promover la innovación tecnológica en este campo.

3.4. Mantener y asegurar el dominio del ciclo de combustible nuclear asegurando su autoabastecimiento.

3.5. Desarrollar la tecnología de nuevas generaciones de reactores nucleares más aptos para el país.

3.6. Asegurar el autoabastecimiento de minerales nucleares y otros insumos críticos de interés nuclear.

3.7. Desarrollar técnicas y promover el uso intensivo de las aplicaciones de radiaciones y radioisótopos en procesos industriales, medicinales, agropecuarios, geológicos, biológicos, etcétera.

3.8. Desarrollar una estructura científico-técnica con capacidad de propia realización que genere los conocimientos necesarios para alcanzar un alto nivel de aporte nacional en materia nuclear.

3.9. Formar y capacitar en medida creciente personal científico y técnico especializado en el campo nuclear, asegurar su permanente ocupación y promover su permanencia en el país.

3.10. Asegurar la protección de la población —incluyendo a los trabajadores dedicados a actividades nucleares— y del medio ambiente contra los posibles efectos de origen nuclear.

3.11. Perfeccionar el sistema nacional de seguridad nuclear y protección radiológica, para la población en general y para el personal directamente afectado a tareas nucleares.

3.12. Regular el otorgamiento de licencias o autorizaciones para la instalación de centrales nucleares, la producción, comercialización y utilización de radioisótopos y radiaciones, y las restantes actividades nucleares en las que la presente ley contempla la participación de la actividad privada, y controlar la realización de tales actividades; así como también la producción, almacenamiento, transporte y comercialización, importación o exportación a cualquier título, de combustibles nucleares, residuos y todos aquellos materiales que presenten riesgos para la salud de la población o perjudiquen el medio ambiente.

3.13. Promover la cooperación latinoamericana e internacional en el campo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

Art. 4º — Decláranse de interés nacional de alta prioridad, los aspectos relativos al desarrollo, producción, uso y control de la energía nuclear.

Art. 5º — El Estado nacional tendrá a su cargo en forma exclusiva la regulación y control en materia nuclear.

Además, participará activamente en la investigación y desarrollo, producción, y comercialización en dicha materia, así como en la formación de recursos humanos para desempeñarse en relación con la misma.

Las restantes personas jurídicas públicas —dentro de sus respectivas competencias—, así como las privadas, podrán participar en la actividad nuclear.

Los participantes en tal actividad quedarán sujetos en cuanto a la misma a las disposiciones de la presente ley, y demás normas aplicables a ella.

TITULO II

Organos y funciones

Art. 6º — El Estado nacional ejercerá las funciones que se atribuye en el presente, a través de los siguientes órganos:

1. El Ente Nacional de Regulación y Control en Materia Nuclear (Enrenuc).
2. La Sociedad de Investigación, Formación de Recursos Humanos, Desarrollo y Producción Nuclear Sociedad del Estado, en adelante "la Sociedad" (CONEA Sociedad del Estado).
3. El Congreso de la Nación, con intervención de la Comisión Bicameral sobre Energía Atómica.

Art. 7º — El Ente de Regulación y Control en Materia Nuclear (Enrenuc) tendrá por misiones las de garantizar la salud de las personas, la integridad de los bienes y la preservación del medio ambiente ante los riesgos derivados de las actividades nucleares; hacer cumplir la presente ley, sus modificatorias y complementarias, así como las restantes normas vigentes o a dictarse en la ma-

teria; asesorar al Poder Ejecutivo nacional en relación a la materia nuclear; y asegurar la eficiencia y racionalidad de las actividades nucleares realizadas por el Estado.

Tendrá el carácter de Autoridad Regulatoria Nuclear.

Serán sus atribuciones:

1. Elaborar la propuesta de su presupuesto.
 2. Proponer al Poder Ejecutivo nacional, el dictado de las normas regulatorias que fuere menester implementar en materia nuclear, en todo lo referente a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias.
 3. Controlar la aplicación de tales normas, brindando seguridad a las personas y bienes, con relación a los efectos de las radiaciones ionizantes.
 4. Asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales vigentes para la Argentina, respecto de la actividad nuclear.
 5. Otorgar, suspender y revocar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación y retiro de servicios de centrales nucleares.
 6. Otorgar, suspender y revocar licencias, permisos y autorizaciones en materia de minerales nucleares, concentrados, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores de partículas, de instalaciones radiactivas y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas e industriales.
- El otorgamiento tendrá lugar previa adecuada evaluación del impacto ambiental de la actividad de que se trate.
7. Coordinar y controlar la importación y exportación de material nuclear.
 8. Controlar la eficiencia y racionalidad por parte del Estado en el desempeño de todo tipo de actividades nucleares, ya sea por sí o a través de sociedades total o mayoritariamente estatales así como el carácter justo y razonable de los precios de los bienes y servicios nucleares que venda.
 9. Preservar los secretos tecnológicos, comerciales o industriales, así como la aplicación de salvaguardias y medidas de protección física.
 10. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones para el desempeño de sus tareas, al personal que se desempeñe en instalaciones nucleares o radiactivas.
 11. Realizar inspecciones en instalaciones nucleares o radiactivas, así como solicitar informes a toda entidad pública o privada, quienes deberán suministrarlos.
 12. Efectuar auditorías de costos y toda otra medida que fuera necesaria para asegurar la racionalidad y eficacia del Estado en el ejercicio de actividades nucleares, así como el carácter justo y razonable de los precios que perciba por sus actividades.
 13. Entender en todos los aspectos relativos a los residuos nucleares, así como al desmantelamiento de las centrales nucleares concluida su vida útil.
 14. Aplicar sanciones por violación de las normas contenidas en la presente, así como en futuras leyes complementarias y modificatorias, de apercibimiento, multa de diez mil (u\$s 10.000) a un millón (u\$s 1.000.000) de dólares estadouni-

denses, suspensión de licencia, permiso o autorización y su revocación, y clausura preventiva y definitiva de instalaciones nucleares o radiactivas.

Tal resolución será dictada previo sumario administrativo, en el que habrá de asegurarse al imputado el derecho de defensa. Regirá en lo aplicable el Reglamento de Investigaciones de la Administración Pública Nacional, así como las normas complementarias que dicte el Ente.

A los efectos derivados del ejercicio de las facultades conferidas al Ente en la presente, así como de aquellas que le son otorgadas en materia de inspección, éste podrá solicitar al Poder Judicial la realización de allanamientos, así como el auxilio de la fuerza pública en caso necesario.

La decisión respectiva será recurrible dentro del término de diez (10) días en forma directa, por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso podrá ser interpuesto y deberá ser fundado dentro de dicho plazo. Regirán en lo no previsto en la presente las disposiciones relativas al recurso de apelación concedido libremente y en ambos efectos, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

15. Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre todos los aspectos relativos a política nuclear.

Art. 8º — A los efectos del ejercicio de sus funciones, el Ente estará facultado para ingresar a todas las instalaciones nucleares, tanto estatales como privadas, y realizar las constataciones que fueren necesarias, preservando debidamente los secretos industriales y tecnológicos.

A ese fin, podrá allanar los lugares que constituyan asiento de tales instalaciones y hacer uso de la fuerza pública, a través del Poder Judicial de la Nación.

Art. 9º — El Ente de Regulación y Control en Materia Nuclear constituirá un ente autárquico, que funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación.

Su personal se regirá por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (ley 22.140), normas modificatorias y complementarias.

Art. 10. — El Ente precedentemente referido será administrado por un directorio integrado por cinco miembros —un presidente, un vicepresidente y tres vocales— que durará cuatro años en sus funciones, y no podrán ser reelectos.

Sus decisiones serán por simple mayoría de miembros presentes, formando quórum tres (3) de sus miembros.

En caso de empate, el presidente o quien lo reemplaza tendrá doble voto.

El presidente deberá ser un científico de importante trayectoria en materia nuclear, designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Los restantes serán designados: uno (1) por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, uno (1) por el Conicet, uno (1) por la sociedad y uno (1) por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Art. 11. — Los miembros del directorio del Ente tendrán dedicación exclusiva, siendo incompatible el ejercicio de dicha función, con toda otra función o empleo, público o privado, exceptuando la participación en sociedades científicas.

No podrán realizar o haber realizado en los últimos dos (2) años, actividad alguna en relación de dependencia o contractual con personas físicas o jurídicas sujetas a su actividad regulatoria.

Art. 12. — Son funciones del Directorio:

1. Ejercer la dirección y administración del Ente.
2. Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
3. Asesorar al Poder Ejecutivo sobre los asuntos relacionados con las previsiones necesarias para la protección contra peligros atómicos.
4. Establecer relaciones directas con otras instituciones extranjeras que tengan objetivos afines.
5. Designar y enviar delegados o representantes a conferencias, reuniones y congresos.
6. Redactar, para su aprobación por el Poder Ejecutivo nacional, los proyectos de reglamentos necesarios para:
 - a) El funcionamiento de la institución;
 - b) La explotación de materiales nucleares;
 - c) El transporte, la exportación e importación de los mismos;
 - d) La instalación de plantas industriales de energía atómica o cualquier otro establecimiento en que se utilice;
 - e) El contralor permanente de las actividades relacionadas con sustancias radiactivas;
 - f) La disposición de los residuos nucleares, así como el desmantelamiento de centrales nucleares que hayan concluido su vida útil.
7. Fijar las tasas correspondientes a los servicios de inspección y fiscalización, y las sanciones y multas aplicables en caso de infracción, dentro de los límites establecidos en el artículo 17.
8. Elaborar el proyecto del presupuesto anual, para su oportuno envío al Poder Ejecutivo nacional, a fin de ser incluido en el Presupuesto de la Administración Nacional.
9. A propuesta del presidente, designar, ascender, trasladar y remover al personal.
10. Proveer lo necesario para controlar en todo el país la producción, existencia, comercialización y uso de materiales esenciales vinculados con la utilización de la energía atómica, con arreglo a las leyes que rigen la materia.
11. Emitir opinión en forma previa a la consideración por parte del Poder Ejecutivo nacional, de todo proyecto o propuesta de exportación o importación de material nuclear.
12. Elevar un informe anual a la Comisión Bicameral relativo a los programas y actividades realizados y responder a cualquier requerimiento específico que ésta le formule en su materia. El presidente del directorio tendrá la representación legal del ente.

En caso de ausencia o impedimento, será reemplazado por el vicepresidente y en caso de ausencia o impedimento de éste, por el director que el cuerpo designare al efecto.

Art. 13. — El ente estará sujeto a los controles de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.

Se registrará en materia administrativa, financiera, patrimonial y contable por lo establecido en la presente ley, así como por las normas vigentes en las respectivas materias en el orden nacional.

Art. 14. — Constituirán recursos del ente:

1. Las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto de la Administración Nacional.
2. Las tasas que perciba como consecuencia de su actividad regulatoria.
3. Las donaciones, herencias y legados que reciba.
4. Todo beneficio que obtenga como consecuencia de la gestión de su patrimonio.
5. Todo otro ingreso que le sea asignado en el futuro.

Art. 15. — Los licenciatarios, titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización del Ente, sean públicas o privadas, abonarán anualmente y por adelantado una tasa regulatoria que será fijada en el Presupuesto General de la Administración Nacional, a propuesta del Ente.

TITULO III

De las autorizaciones, licencias o permisos

Art. 16. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que tenga el propósito de desarrollar una actividad nuclear, deberá solicitar, según los casos, el otorgamiento del permiso, autorización o licencia para hacerlo.

Al efectuar la referida solicitud, deberá formular el compromiso de cumplir las reglamentaciones que imparta el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de Ente de Regulación y Control Nuclear.

También deberá asumir las obligaciones que en materia de salvaguardias haya suscripto o suscriba en el futuro la República Argentina.

Asimismo, deberá asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear, determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por ley 17.048, la que deberá ser cubierta mediante un seguro o garantía financiera a satisfacción del Poder Ejecutivo nacional, por el monto que éste determinará y que tenderá a obtener la máxima cobertura posible del riesgo nuclear, conforme a los parámetros existentes en aquellos países de mayor desarrollo en materia nuclear.

Por otra parte, todo explotador de una central de generación nucleoelectrica deberá aportar a un Fondo para Retiro de Servicio de Centrales Nucleares y a un Fondo para Repositorios Finales de Residuos Nucleares.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá la forma de constitución, administración y contralor de estos fondos, cuyos aportes deberán ser establecidos en montos suficientes para posibilitar el cumplimiento de su finalidad.

El Estado nacional asume plena responsabilidad por daños derivados de la operación de sus propias actividades nucleares, incluyendo las de sus entes descentralizados, así como, en forma subsidiaria del explotante, de las restantes actividades nucleares que se realicen en el país.

Art. 17. — Todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear deberá contar con la licencia de construc-

ción que autorice su localización, otorgada por el Ente de Regulación y Control Nuclear, y con la aprobación de la autoridad local en su ámbito de competencia. Asimismo, se deberá informar previamente a la Comisión Bicameral para su conocimiento.

TITULO IV

De la Sociedad de Investigación, Desarrollo y Producción Nuclear Sociedad del Estado

Art. 18. — Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, la Sociedad de Investigación, Formación de Recursos Humanos, Desarrollo y Producción Nuclear "CONEA Sociedad del Estado".

La Sociedad estará sujeta al régimen establecido en la ley 20.705 y disposiciones de la ley 19.550 que le sean aplicables. Sucederá a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a Nucleoelectrica Argentina S.A., en los términos establecidos en el capítulo relativo a las disposiciones transitorias y complementarias de la presente ley. Tendrá capacidad para actuar como sujeto de derecho público y de derecho privado.

El objeto de la Sociedad consiste en la realización de actividades industriales derivadas de las transmutaciones y reacciones nucleares, incluyendo a la generación de nucleoelectricidad; en la comercialización de los productos derivados de su actividad; en la formación de recursos humanos especializados en todos los aspectos relativos a las actividades nucleares; y en la promoción y realización investigación y desarrollo, y de estudios y aplicaciones científicas de dichas transmutaciones y reacciones; la investigación y desarrollo sobre ciencia de materiales con destino a su oportuna aplicación en las actividades antedichas.

También establecerá la Sociedad las políticas empresarias y realizará con criterio unitario la dirección superior y el control de gestión de las participaciones que a la entrada en vigencia de la presente poseyera la Comisión Nacional de Energía Atómica en otras sociedades; ejerciendo los derechos emergentes de tales participaciones, y los que reconocieran a la expresada Comisión los respectivos estatutos o contratos sociales.

Art. 19. — A los efectos indicados, la Sociedad podrá, para el mejor logro de sus objetivos fusionar o escindir establecimientos; promover, financiar y participar en el desenvolvimiento de actividades nucleares, o relacionadas con las mismas.

Los planes de mediano y largo plazo de la Sociedad serán aprobados por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 20. — La Sociedad tendrá a su cargo el ejercicio de todos los derechos emergentes de las participaciones accionarias, títulos o certificados representativos del capital de sociedades, que integren su patrimonio.

El ejercicio de los derechos societarios correspondientes a los certificados representativos del capital de la Sociedad estarán a cargo del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 21. — La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio cuyo número de miembros y facultades surgirán de su Estatuto y que serán designados por el Poder Ejecutivo nacional. Queda establecido que los ministerios de Economía, Obras y Servicios Públicos, Defensa, Interior, y Relaciones Exteriores y Culto, la Secretaría de Ciencia y

Tecnología, y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, propondrán cada uno un director.

Art. 22. — El capital de la sociedad será el que resulte de la valuación que establezca el Poder Ejecutivo nacional de los bienes que se transfieren al patrimonio de la misma, conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

El patrimonio de la Sociedad estará integrado por:

1. Los bienes que componen el patrimonio de las actuales Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina S.A.
2. Los bienes —incluyendo participaciones accionarias— que sean transferidos a la misma, en el futuro, con los alcances referidos en el artículo de la presente.
3. Los bienes que le transfiera el Poder Ejecutivo nacional.
4. Los ingresos provenientes de todas sus operaciones y actividades.
5. Los fondos del Tesoro nacional destinados a la Sociedad con carácter de no reintegrables o aportes de capital, así como otras donaciones o contribuciones que reciba.
6. Las reservas patrimoniales que se constituyan.

Art. 23. — La Sociedad propondrá a las Asambleas de Accionistas de las sociedades en cuyo capital accionario participe la designación o la remoción de directores o administradores de las mismas, en la proporción que corresponda a su tenencia accionaria o participación en el capital, atendiendo a las disposiciones legales vigentes y a las establecidas en los respectivos estatutos sociales.

Art. 24. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a constituir a propuesta de la Sociedad, sociedades vinculadas a actividades de producción y comercialización nuclear, del tipo y capital social que considere necesario, siempre que su objeto social pueda considerarse comprendido dentro del ámbito establecido en el artículo de la presente ley, o referido a actividades vinculadas con el mismo.

La adquisición por parte de la Sociedad de acciones o cuotas representativas del capital de una empresa, cuya actividad principal se encuentre comprendida dentro del ámbito referido en el artículo precedente, en cualquier porcentaje; la suscripción de nuevas acciones, la ampliación y reducción de capitales sociales; la renuncia al derecho de preferencia, el ejercicio del derecho de receso o cualquier otra decisión relacionada con la efectiva posición accionaria en las sociedades incorporadas, así como también la liquidación de sociedades o la transferencia total o parcial de las tenencias accionarias a inversores privados, y la venta o transferencia total o parcial de establecimientos fabriles a la actividad privada, podrán ser decididos por la Sociedad.

No obstante, la liquidación de sociedades y la transferencia de la totalidad de sus paquetes accionarios, o de una fracción de los mismos, que determinara la pérdida para el Estado del control de la respectiva sociedad, la renuncia de preferencia que implicara idénticos efectos, y el ejercicio del derecho de receso en sociedades en las cuales el Estado nacional ejerciera el control, requerirán la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 25. — Estarán a cargo de la sociedad, la realización de las actividades de investigación básica y aplicada en

materia nuclear, así como de la formación de recursos humanos en materia nuclear actualmente llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

TITULO V

De la Comisión Bicameral de Política Nuclear

Art. 26. — Créase en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Política Nuclear.

La misma tendrá por misión:

1. La supervisión y control de las actividades desarrolladas por el Estado nacional y por los sectores privados en materia nuclear, tendiendo a asegurar tanto la plena conformidad de la misma con las normas jurídicas vigentes y a las obligaciones internacionales contraídas en la materia por el mismo, así como su máxima eficiencia y economía.
2. El estudio y formulación de propuestas en materia de política nuclear, tendiendo al logro de los objetivos enunciados en el artículo 20.
3. Constituir comisión de estudio y dictamen, de todo asunto o proyecto vinculado a la energía nuclear.
4. Tomar conocimiento previo de las licencias de construcción de instalaciones nucleares otorgadas por el Ente de Regulación y Control Nuclear.

La Comisión tendrá todas las facultades inherentes al cumplimiento de su cometido, y en particular, las siguientes:

- a) Realizar estudios y pericias, requiriendo el concurso de técnicos y la colaboración de Universidades e institutos técnicos y de investigación, tanto nacionales como privados;
- b) Requerir de todo organismo o ente público nacional, provincial o municipal, como asimismo de entidades privadas, toda la información que estime necesaria, la que deberá serle suministrada;
- c) Constituirse en todo lugar que sea asiento de actividades nucleares o de personas físicas o jurídicas dedicadas a la realización de las mismas, requiriendo del Poder Judicial la colaboración necesaria;
- d) Requerir del Poder Judicial cite y haga comparecer con el auxilio de la fuerza pública a las personas que se consideren pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados a la materia de la comisión;
- e) Efectuar al Poder Ejecutivo nacional propuestas tendientes al logro, en materia de política nuclear, de los objetivos enunciados en el artículo 30.

Art. 27. — La comisión estará integrada por cinco miembros de la Cámara de Senadores e igual número de miembros de la Cámara de Diputados, designados por las Cámaras respectivas. Tendrá carácter permanente y dictará su propio reglamento interno.

Art. 28. — La Comisión producirá y elevará a las Cámaras de Diputados y Senadores y al Poder Ejecutivo nacional todos los estudios, análisis, informes y propuestas que considere necesarias.

En especial, confeccionará y remitirá a dichas Cámaras y Poder sendos informes públicos anuales, en los cuales informará respecto de los resultados de la labor desarrollada, y efectuará las propuestas que considere adecuadas.

TITULO VII

De los elementos y minerales nucleares

Art. 29. — Los yacimientos y depósitos de todo tipo que contengan minerales nucleares, constituyen bienes privados de las provincias.

Art. 30. — Es libre la prospección de minerales nucleares.

Su explotación podrá ser objeto de concesión, en las condiciones previstas en el Código de Minería y Leyes Complementarias.

Los referidos minerales no pueden ser retirados del país, y sólo pueden ser vendidos o transferidos a la Sociedad, quien pagará por ellos el precio que determinará el Ente de Regulación y Control en Materia Nuclear.

Art. 31. — La Sociedad podrá a su vez alquilar materiales y elementos nucleares a personas jurídicas o físicas privadas que realicen actividades nucleares en la Argentina. La locación se efectuará bajo estrictas medidas de control, no pudiendo en ningún caso retirarse minerales o material nuclear del país.

Concluido su uso, los mismos serán reintegrados a la Sociedad.

Art. 32. — En lo no previsto en la presente, el régimen aplicable a los elementos y minerales nucleares, así como el de los yacimientos y las minas que los contengan, será el indicado en el decreto ley 22.477 del 18 de diciembre de 1956 y supletoriamente el Código de Minería y sus normas complementarias; ejerciendo la Sociedad, las funciones que en la misma se atribuyen a la Comisión Nacional de Energía Atómica, excepción hecha de las relativas a fiscalización y control, que serán ejercidas por el Ente Nacional de Regulación y Control Nuclear.

Art. 33. — Transfiérese a la Sociedad, la totalidad del patrimonio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, incluyendo las participaciones accionarias y derechos estatutarios en otras sociedades, que se encuentran actualmente en cabeza de la segunda.

Exclúyense en el caso de la referida Comisión, los institutos de formación de recursos humanos, los que son transferidos, con sus bienes y dotación de personal, a la Sociedad.

Dispónense la liquidación y disolución de los entes referidos en el párrafo primero del presente artículo, a cuyo efecto se faculta al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias.

Transfiérese asimismo a la Sociedad, la totalidad del personal existente en dichos entes, con la excepción a que se alude en el segundo párrafo del presente.

La Sociedad será a todos los efectos continuadora de tales entes, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias, así como a adecuar las

estructuras orgánico-funcionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 34. — La presente ley comenzará a regir en el día de su publicación.

Art. 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 120 del reglamento interno, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de comisiones, 1º de abril de 1997.

Juan I. Melgarejo. — Raúl A. Galván. — Alcides H. López. — Mario A. Losada. — José Genoud. — Conrado H. Storani.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

1. La CNEA: Su desmembramiento, desmantelamiento y liquidación en la política de hechos consumados del Poder Ejecutivo nacional.

A partir de 1994 se vienen sucediendo numerosas decisiones administrativas, cuyo propósito ha sido el desmembramiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la separación de las actividades productivas de las de regulación de la actividad y de las de Investigación y Desarrollo, con el declarado objetivo de privatizar las actividades productivas de la CNEA, y la virtual desaparición de su invalorable patrimonio de recursos humanos a través de sucesivos planes de retiros voluntarios, despidos y fundamentalmente desaliento de su personal técnico y científico al cual se debe el status logrado por la Comisión a lo largo de décadas de dedicada labor.

Hoy nos encontramos ante el hecho consumado no sólo del aludido desmembramiento, sino de su virtual liquidación.

Los aludidos actos administrativos comenzaron por el dictado del decreto 1.540 del 30 de noviembre de 1994, a través del cual, en forma manifiestamente ilegal —por modificarse a través del mismo normas de naturaleza legislativa— se procedió al desmembramiento, con miras a su venta, de la referida Comisión, retirándosele la gran mayoría de las funciones que le confería su ley orgánica (decreto-ley 22.498/56, ratificado por ley 14.467), y a transferírselas juntamente con su personal, a entes creados por vía del mismo decreto, ignorando lo preceptuado por el cuerpo normativo citado, cuyo ámbito excedió notoriamente la mera creación de un organismo, para establecer, juntamente con su predecesor decreto-ley 22.497/56, ratificado por ley 14.467, las bases fundamentales de nuestra política nuclear.

Fue así que tras un tormentoso proceso previo caracterizado por las públicas diferencias entre el entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Manuel Mondino, y el secretario de Energía, Carlos Bastos —con el agregado de un artículo del técnico de la Fundación Mediterránea Juan Novara, calificando a la producción de energía nuclear como costosa e ineficiente ("Página/12")—, finalmente el Poder Ejecutivo nacional optó una vez más por la decisión, por sí y ante sí, de aspectos ajenos a su competencia, obviando tanto la necesaria intervención del Congreso Nacional, como el debate público en un aspecto de fundamental importancia para el futuro de nuestro país.

Para fundar dicho acto, se invocó —inapropiadamente, a nuestro criterio— lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 23.696, para aspectos que aparecen como excediendo en forma manifiesta las finalidades tenidas en cuenta al sancionar dicha norma —referidas sin duda alguna a la supresión de organismos prescindibles de la Administración Pública— introduciendo en forma inconsulta un cambio fundamental en la política nuclear, de inequívoca competencia legislativa.

Ello tuvo lugar en este caso, a través de la creación, en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, 12 del "Ente Nacional Regulador Nuclear", como entidad autárquica; así como a la constitución de "Nucleoeléctrica S.A.", a cargo de la generación de energía; permaneciendo las funciones en materia de investigación y desarrollo remanentes a cargo de la así reducida Comisión Nacional de Energía Atómica.

En lo relativo a "Nucleoeléctrica S.A.", se previó que "...desarrollará la actividad de generación nucleoelectrica vinculada a la Central Nuclear Atucha I; a la Central Nuclear Embalse de Río Tercero y la de construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II respetando las normas vigentes en materia de seguridad nuclear y radiológica, así como las que defina el Ente Nacional Regulador Nuclear y las que regulan el Mercado Eléctrico Mayorista".

También se estipuló que "Nucleoeléctrica Argentina S.A. deberá cumplir todas las obligaciones que en materia de salvaguardias haya suscrito la República Argentina y asumirá la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por ley 17.048, hasta la suma que se establezca, la que deberá ser cubierta mediante un seguro o garantía financiera, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente..." (Artículo 4°).

Asimismo, se dispuso la transferencia al nuevo ente por parte de la antigua CNEA de las centrales en cuestión, así como de sus recursos presupuestarios dedicados a la construcción, operación, reparación y mantenimiento, y el personal afectado a tales tareas.

La reestructuración —con inequívoco propósito de venta— quedó perfeccionada con la transferencia al Estado nacional de "...la titularidad de las acciones que la Comisión Nacional de Energía Atómica posee en Empresa Nuclear Argentina de Centrales Nucleares Eléctricas S.A. (ENACE S.A.)..." (artículo 16), empresa esta que en 1996 entró en estado de liquidación por haber vencido el término establecido para la duración del contrato social y no haber sido objeto de prórroga por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Por otra parte —aspecto que no deja de sorprender, dado que la CNEA remanente habría de ser un ente estatal dedicado exclusivamente a la investigación científica— se previó que "la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar al Ente Nacional Regulador Nuclear en concepto de tasa regulatoria una suma equivalente a pesos un millón quinientos mil (\$ 1.500.000) por año" (artículo 17).

Ya el 20 de diciembre de 1994, los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ocuparon la sede del organismo en la Capital Federal en respuesta a la decisión oficial de cesar las actividades del 24

de diciembre al dos de febrero, dando vacaciones obligatorias a los empleados.

Una asamblea de trabajadores realizada en dicha fecha decidió la medida de fuerza, al considerar que las "vacaciones obligatorias" eran en realidad una consecuencia del "ahogo financiero" impuesto al organismo desde el dictado del mentado decreto 1.540/94.

Según un comunicado de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) porteña la situación generada por "el desguace de la CNEA y por ceder las centrales nucleares a Nucleoeléctrica Argentina S.A. no sólo ha tenido como repercusión el cierre de la CNEA, sino que se afectó también la seguridad de la central nuclear de Embalse", en la ciudad cordobesa de Río Tercero.

Según sostuvo ATE, en octubre debería haberse hecho la parada por mantenimiento preventivo de la central de Embalse; pero que la misma —aparentemente por cuestiones presupuestarias— fue postergada hasta el segundo semestre de 1995 (¿para ser realizada por el adjudicatario?).

Otro signo revelador de las verdaderas características y propósitos de la "privatización", estuvo constituido por el régimen de retiro voluntario establecido para el personal.

Al mismo, se le hizo saber la existencia de 50 millones de dólares para retiros voluntarios. Los jefes hicieron saber a todos los dependientes la posibilidad de hacer uso de tal "franquicia", incluyendo científicos.

A través del decreto 2.336/94, se estableció un "Sistema Transitorio de Retiro Voluntario para el Personal de la CNEA" cuya consecuencia fue el retiro de 415 agentes del Escalafón Profesional y Técnico, perteneciente mayoritariamente a las áreas de investigación y desarrollo y a las actividades productivas más importantes de la CNEA.

Asimismo, a través de la resolución 835/95 sobre sistema transitorio de retiro voluntario para el personal de las centrales nucleares de generación eléctrica reunidas en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

El resultado de estas medidas fue un preocupante estado de virtual desgerenciamiento en las centrales nucleares, como paso previo a la privatización.

No deja de ser paradójal que entre los considerandos del decreto 2.336/94 se declare "...Que... existe en dependencia del citado organismo personal... que, hasta la fecha, ha venido desempeñándose en funciones —materiales o de apoyo— de carácter crítico vinculadas a la especialización tecnológica de la referida dependencia, razón por la cual resulta equitativo establecer una compensación extraordinaria para dicho personal..."

Es decir, que poseyendo el Estado personal de destacables méritos, en lugar de conservarlo, decide abonarle más dinero para que se vaya.

Sabido es que el personal de todas las categorías y especialidades, aún las de más alta especialización técnica, fue estimulado a solicitar el retiro voluntario, ignorándose obviamente las elevadas inversiones realizadas por el Estado en su formación y la importancia de los servicios que podría prestar al Estado.

La implementación de medidas puestas en vigor por parte del Poder Ejecutivo nacional que no por habituales dejan de tener una significativa trascendencia, cual es el liso y llano desmantelamiento de la estructura cientí-

fico-técnica nacional, patrimonio de la Nación y no de un gobierno.

Las cifras del acogimiento del personal al plan de Retiro Voluntario revelan que de los 1.093 agentes que se presentaron, aproximadamente 48% (415 agentes) pertenecen al Escalafón Profesional de planta y contratado (20%, 225 agentes), y al Escalafón Técnico permanente y contratado (27,7%, 306 agentes), en otras palabras, se trató del personal más calificado de la CNEA.

Si analizamos las áreas que han sido privadas de este calificado personal, nos encontramos ante una situación doblemente alarmante, por cuanto:

25% (280 agentes) pertenecían al Ciclo de Combustibles, 18% (198 agentes) pertenecían a Investigación y Desarrollo, 10% (112 agentes) pertenecían a Radioisótopos y Radiaciones

es decir que el 53% de los que solicitaron el retiro voluntario, o sea 590 agentes, verdaderamente pertenecían a las áreas más importantes de producción y de Investigación y Desarrollo de la CNEA, donde el aporte combinado de conocimiento y experiencia es crítico.

Lamentablemente no quedan dudas de que éste ha sido un efecto buscado por cuanto el plan de las autoridades contemplaba obtener el retiro de 3.065 agentes pertenecientes en un 25% al Ciclo de Combustible, 27% a Investigación y Desarrollo, 9,6% a Radioisótopos y Radiaciones, y 10% al Centro Atómico Bariloche.

Queda, pues, a la vista que lejos del pretendido objetivo de recomponer la relación técnico-administrativa de la CNEA, caracterizada por una desmesurada dotación administrativa, el efecto ha sido reducir significativamente la dotación científico-técnica del organismo.

Nos encontramos ante una nueva instancia de lo que aparece como el verdadero programa de gobierno de nuestro país: las recomendaciones del Banco Mundial. En efecto, ello surge del trabajo "Argentina: from insolvency to growth" ("Argentina: de la insolvencia al crecimiento") edición 1993, publicado por el referido organismo internacional de crédito, que cito textualmente:

"... La CNEA debería ser estructurada en unidades de negocio e investigación. La generación de electricidad debería construir una de esas unidades de negocio bajo la Secretaría de Energía en el Ministerio de Economía. También la planta industrial de agua pesada después de completada podría constituir otra unidad de negocio bajo la misma secretaría. La posible privatización de tales unidades podría llevar a eventuales ahorros de 4.236 puestos de trabajo, que representan un costo anual para el sector público de ochocientos cincuenta millones de dólares..."

La Resolución 836/95 (B.O. 20-06-95), motivada en "la necesidad de efectuar los ajustes adecuados a las nuevas situaciones creadas con la reestructuración del área", viene a redondear el plano a través de la aplicación de un sistema equivalente al del decreto 2.336/94 de Retiro Voluntario para el personal de Nucleoeléctrica Argentina S.A., o sea, para el personal de las centrales nucleares de generación eléctrica. El personal del Escalafón Profesional y Técnico de las Centrales Nucleares ha recibido una formación específica en materia de operación de centrales nucleoelectricas tanto en nuestro país como en el exterior, es decir, que cuenta con un bagaje teórico y empírico especializado que ha costado muchos

años conseguir y ningún país se daría el lujo de perder, porque se trata de un patrimonio público.

Sin embargo mediante esta resolución no sólo se ofreció la desvinculación de este personal sino que además, según reza su artículo 12. "El personal al que se le otorguen los beneficios del Retiro Voluntario no podrá reingresar a ninguno de los órganos o entes comprendidos en el Artículo 1º de la ley 23.696 en funciones remuneradas hasta transcurridos cinco (5) años de la desvinculación".

Como vemos se trató de un acto administrativo del entonces ministro de Economía doctor Domingo Cavallo en virtud del cual el ciudadano que se acogiera al plan ofrecido por esta Resolución sería privado en los cinco años siguientes de ingresar a la "Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en el que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias".

Este personal, que de esta manera repudia y busca desvincular el Poder Ejecutivo nacional, no podrá ni siquiera transmitir su conocimiento y experiencia a otros, dedicándose a la docencia en universidades públicas.

Se fue delineando, así, lo que parece constituir uno de los objetivos fundamentales de esta "privatización": la destrucción de los avances tecnológicos obtenidos por la Argentina en materia nuclear, que constituyó constante objetivo de determinadas potencias extranjeras y que parece hoy hallarse al alcance de la mano.

Con posterioridad al dictado de estos decretos y materializados los actos administrativos de desmembramiento de la CNEA, el Poder Ejecutivo nacional elevó un proyecto de ley al Congreso cuyo espíritu podía adecuadamente resumirse en la enfática declaración contenida en su artículo 1º "... En materia nuclear, el Estado Nacional ejercerá exclusivamente las funciones de Investigación y Desarrollo, Regulación y Fiscalización a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear..." "Toda actividad nuclear de índole productiva o que pueda ser organizada comercialmente deberá ser desarrollada por el Sector Privado" (Artículo 1º).

Subsiguientes decretos y resoluciones fueron dictados en los últimos dos años con el propósito de profundizar la política de destrucción de la CNEA. Algunos de ellos son:

El Decreto 826/95 a través del cual se declararon sujetas a privatización las actividades referidas a la producción y comercialización de fuentes selladas de Cobalto-60 y a la operación de la Planta de Irradiación Multipropósitos del Centro Atómico Ezeiza dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Del contenido de este decreto, sólo puede destacarse que se pretendió proseguir con la metódica destrucción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y, en general, de la tecnología nacional, enajenándose actividades de fundamental importancia para la medicina nuclear, la industria y la ingeniería, así como el aprovechamiento de recursos natu-

rales, sin garantía concreta alguna relativa a la preservación de las mismas.

Las propuestas sociedades no habrían de constituirse para realizar actividades que no tenían lugar en nuestro país, ni para realizar significativos aportes de tecnología y, según todos los indicios efectuar importantes aportes de capital. Quedaba así en claro que nada significativo se construiría ni invertiría. Simplemente, se alquilarán en ambos casos las instalaciones existentes, a un valor simbólico muy probablemente uno de los supuestos de locación más económica para el locatario que puedan imaginarse, tomando en consideración las características de las instalaciones locadas.

Resulta ciertamente preocupante la asunción por parte del Estado nacional, ante tan imprecisas "ventajas" como las que hipotéticamente pudieran derivarse de las "privatizaciones" en cuestión, de riesgos de magnitud difícil de mensurar, como lo es el riesgo nuclear.

Cabe por todo lo expuesto conjeturar que nos encontramos ante un modelo frecuentemente reiterado en la actual política de "privatizaciones": la entrega de valiosos activos a operadores privados, que se hacen cargo de los mismos virtualmente sin aportes de capital, para explotarlos e invertir, en el mejor de los casos, parte de las utilidades que obtienen; y, en el peor, para no realizar inversión alguna e inclusive motivar serias dudas respecto de la continuación de la actividad o de la forma en que habrán de restituir los activos "privatizados".

Otros decretos y resoluciones han ido configurando ventajosas condiciones para tornar más apetecible este activo a eventuales compradores, citaremos por ejemplo los referidos a aumentos de tarifas para la nucleoelectricidad, (Resolución 464/94 S.E.) beneficios del que gozará el futuro adquirente privado, facilidades para la conclusión de Atucha II relativas a préstamos otorgados por bancos alemanes por un total de \$ 258.705.534 que se encuentran disponibles para ser utilizados por el futuro adquirente con lo que estaría en condiciones de financiar su conclusión sin adelantar fondos propios, los aspectos relativos a la valuación de las centrales, (que de acuerdo con la Resolución S.E. 283/94 fue realizada sobre la base de estimar la necesidad de las reparación de Embalse, a cargo del Estado, de un costo de \$127.500.000), y en definitiva el ahogo financiero de la CNEA, que justificarían la necesidad de desprenderse de estos activos.

Las ideas que han primado para disponer la "privatización" en cuestión, son simples: obtener una masa de títulos de la deuda externa argentina, para cancelar parte de los compromisos de nuestro país, satisfacer una suerte de "ideología privatista", probablemente tan nefasta como el irreflexivo estatismo que se profesara en las décadas del '40 y '50; ceder a las presiones que ejercen los integrantes del recientemente privatizado sector eléctrico —que no admite competidores que consideran subsidiados— y, finalmente, aceptar las recomendaciones del Banco Mundial, también presentes en este terreno, amén de otras presiones externas que no ven con simpatía la realización de actividades nucleares por la República Argentina, por más que las mismas hayan tenido invariablemente fines pacíficos.

Existen muchos elementos sumamente reveladores de las verdaderas razones de esta "privatización". El 21-2-1995, los legisladores y público presentes en la reunión

de la Comisión de Energía de la Honorable Cámara de Diputados tuvieron oportunidad de escuchar las inusualmente francas expresiones del señor secretario de Energía, licenciado Bastos, en el sentido de que la actividad en materia nucleoelectrica de la CNEA era incompatible con la característica de "sector de riesgo" que atribuyó al sector energético, sosteniendo que no era admisible la competencia de una entidad "subsidiada", con la actividad empresarial de riesgo propia del sector.

Afirmó además Bastos la necesidad de separar las actividades de investigación y desarrollo de las productivas, señalando que el Estado podía ocuparse únicamente de la actividad de investigación y desarrollo carente de aplicación empresarial, corriendo la restante por cuenta del sector privado.

Procuró justificar la "privatización" tanto en la concepción dogmática de que la actividad productiva no puede estar en manos del Estado, como en la imposibilidad de allegar fondos para concluir la Central Atucha II.

2. Oposición de la Unión Cívica Radical a la destrucción y liquidación de la CNEA por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Todas estas medidas, expresa o implícitamente han ido delineando principios y objetivos en el curso de los últimos dos años que reflejan las intenciones del Poder Ejecutivo nacional en materia de investigación y desarrollo y producción nuclear, los cuales constituyen la verdadera y profunda diferencia conceptual que en esta materia separa al gobierno de las convicciones de la Unión Cívica Radical. Estas diferencias se han puesto de manifiesto a través de expresas declaraciones públicas del Comité Nacional de la UCR de fecha 29 de junio de 1995 y del 17 de agosto de 1995 ambas con la firma de su entonces presidente doctor Raúl Alfonsín, que reproduzco a continuación:

"INTERVENCION DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA Y EVENTUAL PRIVATIZACION DE LAS CENTRALES NUCLEARES", Buenos Aires, 29-6-1995:

"El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.540/95 que dispuso la intervención a la Comisión Nacional de Energía Atómica y la creación de una empresa para la explotación de las centrales nucleares, hecho que denuncia una eventual privatización de las mismas, así como la reducción de las funciones de investigación o control por parte del Estado.

"El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical reclama al Poder Ejecutivo la suspensión del decreto 1.540/95 para evitar que se produzcan acciones que resulten finalmente irreversibles, las que producirán entre otras cuestiones, la pérdida de especialistas y técnicos de vasta formación, la suspensión de tareas de investigación, la disminución del control estatal para la seguridad y vida de las personas y la distorsión de las funciones de la CNEA y en los objetivos de la política nuclear.

"Desde hace más de 45 años la República Argentina desarrolla una política nuclear coordinada y ejecutada por la CNEA. Esta política se llevó a cabo bajo gobiernos de diferente signo, sin distinción de partidos, animados todos por la común convicción de que ella constituye un

componente insustituible del desarrollo independiente de la Nación y del crecimiento del país.

"Los logros en esta materia son patrimonio de todos y nadie puede unilateralmente tomar decisiones que afecten la continuidad de esta política. Sostenemos que corresponde al Parlamento como expresión de la voluntad plural de la República la adopción de las decisiones sobre esta tan importante cuestión, que afecta también al medio ambiente y cuyos efectos sobre el futuro son de gran significación.

"Es por esto que la Unión Cívica Radical invita a todos los ciudadanos a impulsar, en el marco de los nuevos derechos incorporados en la reforma de la Constitución Nacional, un proyecto de ley para ser considerado por el Congreso de la Nación, que impida el desmembramiento de la CNEA, garantice el ejercicio del control estatal sobre la política nuclear y sus objetivos. Todo otro camino no sólo ofrece riesgos por sus efectos, sino que además es peligroso".

(firmado) Raúl Alfonsín, presidente, UCR, 26-6-95.

"LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEOELECTRICAS", Buenos Aires, 17-8-1995.

"Desde hace un año la actividad nuclear —uno de los legítimos motivos de orgullo de los argentinos— está siendo sometida a vicisitudes que ponen en grave riesgo su continuidad.

"A fines de agosto de 1994, se desmembró la CNEA, institución que a lo largo de más de 40 años había puesto al país entre los pocos con capacidad de realización propia en la materia.

"La separación de las centrales nucleoelectricas y del ente de regulación nuclear de la institución madre —la CNEA— se hizo sin proveer los mecanismos que aseguran la relación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la producción de bienes y servicios, conjunción fundamental para la eficiente obtención de tecnologías relevantes.

"Esta falta de previsión parecía provocada por el afán de conseguir en poco tiempo lo que una administración vacilante no había sido capaz de hacer en los primeros cinco años de gobierno.

"Otra opción de análisis nos llevaría a concluir que lo que se buscaba era destruir el único ejemplo válido y exitoso de desarrollo tecnológico independiente, precisamente porque contrariaba la actual política exterior de sometimiento.

"En este contexto de incertidumbre sobre la continuidad de la actividad nuclear se implementó en la CNEA residual un retiro voluntario indiscriminado que ha diezmado sus cuadros científicos y técnicos. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo no proveyó los fondos adicionales que la CNEA necesitaba para hacer efectivos esos retiros, con lo que se han visto afectadas casi en su totalidad las escasas partidas imprescindibles para el funcionamiento normal de la institución.

"Mientras esta situación deteriorante continúa, el prometido tratamiento del tema por parte del Congreso, se ha ido postergando. Recientemente se ha vuelto a anunciar la pronta privatización de las centrales Atucha I y Embalse, y la finalización de Atucha II.

"La privatización de centrales nucleoelectricas originalmente en manos del Estado no tiene antecedentes en

el mundo. Por lo sensible del tema en cuanto implica la continuidad de una industria considerada estratégica en todo el mundo y por las cuestiones de seguridad involucradas estas privatizaciones no pueden hacerse con la misma ligereza y falta de previsión con que se hicieron las del resto de las empresas y servicios públicos.

"Exigimos, en consecuencia, el indispensable tratamiento parlamentario de todas las cuestiones inherentes a la actividad nuclear y advertimos que desconoceremos cualquier privatización en el área que no cuente con el correspondiente aval del Congreso de la Nación".

(firmado) Raúl Alfonsín, presidente, UCR, 17-8-1995

Por otra parte, varios proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados —entre ellos, de los diputados A. T. Berhongaray, V. Fayad, Carlos Becerra, y otros igualmente contrarios al proyecto del Poder Ejecutivo de otras corrientes opositoras—, dan cuenta todos ellos de la diferencia fundamental que separa a todo el arco opositor de la política que en esta materia impulsa el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem.

Esta diferencia básica es la que hoy anima el dictamen de minoría que sobre la base del proyecto del senador A. T. Berhongaray estamos fundamentando.

3. Privatización, ¿la única vía?

Ello, ciertamente, no es así.

Dicho rol varía desde el caso de la República Francesa, en el que la actividad de generación nucleoelectrica (juntamente con la restante generación de electricidad) es desarrollada por la empresa estatal Electricité de France.

Por su parte el "Commissariat de l'Energie Atomique" (CEA) tiene responsabilidad en materia de investigación y desarrollo de las aplicaciones de energía atómica, incluyendo la generación nuclear y su ciclo de combustible. La CEA tiene la propiedad exclusiva de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) que controla la totalidad de las actividades industriales del ciclo de combustible, con excepción de la administración y disposición de residuos, que está en la órbita de un organismo público independiente (ANDRA).

La ya referida Electricité de France tiene, como adelantáramos, la propiedad y operación de todas las centrales atómicas francesas y es uno de los accionistas de la empresa que diseña y fabrica las centrales nucleares francesas, Framatome, siendo el restante el mentado Commissariat de l'Energie Atomique.

¿La circunstancia de ser en Francia desempeñada por el Estado, torna ineficiente la actividad nuclear? No, ciertamente.

En la actualidad, Francia cuenta con 56 centrales nucleares en operación, con una capacidad instalada de unos 57 GW (e) y es el segundo productor mundial de generación nuclear con unos 330 TWh por año. La generación nuclear representa más de un tercio del abastecimiento energético primario del país, y más del 80% de su generación energética interna.

¿Es Francia el único caso de país desarrollado en el que el Estado continúa teniendo un rol relevante en la actividad productiva nuclear? Nuevamente no.

En el Reino Unido, tras un fallido intento de "privatización" realizado al calor del verdadero ideologismo privatizador de Margaret Thatcher, aún las centrales nucleares continúan siendo de propiedad estatal (Nuclear Electric). Existe en estudio una posible privatización; pero también se tiene clara conciencia de las dificultades y riesgos de esta medida.

En Canadá, la actividad de construcción de centrales nucleares ha tenido fundamental participación de una empresa del Estado nacional, AECL, así como de empresas de los estados locales (a cuyo cargo se encuentra el manejo de los recursos energéticos) y una empresa privada.

En Corea del Sur, una empresa estatal, la Korean Electric Power Corporation, es la propietaria y operadora del 85 por ciento de la capacidad instalada eléctrica, es la fundamental propietaria de centrales nucleares.

En Finlandia, la empresa estatal IVO es propietaria y operadora de parte de las centrales nucleares, mientras que TVO, una empresa privada, posee las restantes.

En otros países (Suecia, Estados Unidos de América, Suiza) el Estado y los particulares participan en diversas proporciones en la actividad. Otros países, como Alemania y Japón, presentan una actividad nucleoelectrica en manos privadas, aunque con distintos tipos de subsidios estatales. En algunos casos, se presenta la propiedad mixta de las centrales.

Con relación al combustible nuclear, cabe señalar que el mismo es controlado en forma centralizada en la gran mayoría de los países que utilizan energía nuclear, generalmente a cargo de empresas públicas o mixtas con control estatal.

Demostrada la inexistencia de razones tecnológicas o económicas que impongan la privatización como forma de gestión del sector nuclear, también considero necesario señalar la importancia que reviste la nucleoelectricidad, en un mundo progresivamente amenazado por el agotamiento de los hidrocarburos y, en todo caso, sujeto a las variaciones de precios que por razones políticas éstos pueden presentar. El recuerdo de las crisis energéticas desatadas a continuación de la guerra de Yom Kippur (1973) y del comienzo de la guerra Irán-Irak (1978-80) es aún demasiado reciente como para ser olvidado.

Es así que a la precedentemente mencionada nómina de países que se destacan por el amplio porcentaje de generación nucleoelectrica debe agregarse que otros grandes países industriales no considerados como líderes del sector poseen porcentajes aún significativos de generación de nucleoelectricidad con relación al total de energía eléctrica que producen. Tal es el caso de los Estados Unidos de América, con un 22%; Japón, 28%; el Reino Unido, con 23%, y Alemania, con cerca del 20%.

En América del Sur, en el mes de abril de 1996, Brasil tomó la decisión de apuntalar el plan nuclear tras ocho años de interrupción de los trabajos de la planta Angra II, para lo cual firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Alemania y la empresa Siemens, a fin de completar los trabajos para poner en servicio dicha planta, la cual comenzaría en 1998 o 1999 a suministrar el 30% de la energía eléctrica demandada por el estado de Río de Janeiro. En virtud de este acuerdo el gobierno brasileño aportará u\$s 800 M., mientras que el Estado

alemán asume las garantías de exportación por aproximadamente u\$s 2.400 M.

Probablemente la importancia de la nucleoelectricidad y de su gestión estatal deba ser considerada en forma especial en el caso de un país como el nuestro, que ha enajenado su empresa petrolera estatal, así como sus reservas hidrocarburíferas, perdiendo de ese modo decisivos instrumentos para una política energética.

Es por eso que lejos de poder válidamente ser considerada una fuente de producción de energía en decadencia —como ha sido sugerido desde el oficialismo—, la energía nuclear se mantiene plenamente vigente.

En nuestro país debe agregarse la significativa reducción del horizonte de reservas, que se ha producido en nuestro país en los últimos años, a results de una política de exportación de petróleo y gas.

Lejos parecen los 30 años de reservas de gas que se atribuían a la Argentina en 1989. En la actualidad, según las fuentes, de 19,4 años ("La Nación", del 5 de noviembre de 1994). Otras fuentes hacen estimaciones aun menores. En materia de petróleo contaríamos con entre 9,2 y 10,2 años. Si bien dicha situación es susceptible de mejorar a través de un intenso esfuerzo de prospección (que al presente no se advierte), parece indudable que las existencias de hidrocarburos no son infinitas y que es necesario tener presentes otras fuentes de generación de electricidad, como la hidroeléctrica y la nuclear.

Lo expuesto no implica afirmar que la actual estructura orgánico-funcional existente en materia nuclear en nuestro país no sea susceptible de mejoras.

En efecto, la antigua estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica —adecuada probablemente para el momento en que fue creada, cuando la actividad productiva de la aludida comisión era muy reducida, cuando existía un cómodo predominio de las funciones de investigación y desarrollo con relación a las restantes y cuando la función de regulación y control no parecía importante, ante la virtual inexistencia de interés en el sector privado para intervenir en la actividad nuclear— agrupa en un mismo organismo dos grupos de funciones evidentemente incompatibles: las de regulación y control, por una parte, y por otra las de investigación y desarrollo y productivas.

Parece evidente que así como no es posible ser simultáneamente juez y parte, tampoco pueden válidamente acumularse las funciones de controlador y controlado, de ente que debe velar por la seguridad nuclear, por el medio ambiente, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y convenios internacionales, por una parte, y de principal productor de los riesgos del tipo indicado por la otra.

La experiencia internacional evidencia que esta acumulación no se produce en las estructuras orgánico-funcionales de la actividad, vigentes en otros países. Así hemos ya advertido la distinción existente en la República Francesa entre el Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), que posee responsabilidad en materia de investigación y desarrollo de las aplicaciones de energía atómica, incluyendo la generación nuclear y su ciclo de combustibles, incluyendo la propiedad de la Cogéma, compañía que realiza la totalidad de las actividades industriales del ciclo de combustible, con excepción de la administración y disposición de residuos en manos de un

organismo público independiente (ANDRA), poseyendo Electricité de France la propiedad y operación de todas las centrales atómicas francesas, siendo uno de los accionistas de la empresa que diseña y fabrica las centrales nucleares francesas, Framatome, siendo el restante propietario el Commissariat. En materia de regulación y control se otorga un amplio rol a los municipios, a quienes se consulta respecto del emplazamiento de centrales nucleares, teniendo además un rol significativo en la materia la Asamblea Nacional.

Planteando en general la existencia y facultades de organismos de regulación y control de la energía nuclear en otros países, cabe poner de manifiesto que las tareas más significativas que requieren la actuación de la administración pública son la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas; la protección del personal profesionalmente expuesto y del público en general frente a los efectos de las radiaciones ionizantes; la protección del medio ambiente frente a los efectos causados por la construcción y operación de la central, tanto radiológicos como térmicos, ecológicos o socioeconómicos; la importación o exportación del material fósil o de elementos combustibles; el transporte de material nuclear; la gestión de residuos radiactivos, desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares; la protección de los ciudadanos en caso de emergencia y la investigación y desarrollo sobre los temas nucleares básicos.

Los organismos que regulan y controlan la seguridad de las instalaciones nucleares son entidades especializadas que gozan de una cierta autonomía. En general, existe incluso una distinción entre los organismos de regulación y control, por una parte, y las autoridades reguladoras, por la otra. Se considera así una verdadera excepción el caso estadounidense, en el que, la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos (NRC) es, además, autoridad reguladora; si bien, además, informa al Parlamento. En cambio, en España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español informa al Parlamento, mientras que la autoridad es el Ministerio de Industria.

Constituye en consecuencia una característica en la legislación comparada, que el organismo regulador y controlador —que generalmente, ni siquiera tiene el carácter de autoridad reguladora— no se confunde con quien tiene a su cargo la producción, sea este último estatal, privado o mixto.

Otro aspecto importante está representado por la gestión de los residuos de alta, media y baja actividad y desmantelamiento de instalaciones (servicios nucleares específicos). Este aspecto está confiado en algunos países a organismos públicos o mixtos (tales como los casos de Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Estados Unidos de América y Japón). En otros países, dicha tarea queda a cargo de empresas constituidas por las compañías eléctricas.

Teniendo en cuenta tales circunstancias, se ha optado por desvincular la función regulatoria y de control (a la que se ha agregado la gestión relativa a residuos nucleares y desmantelamiento de centrales) por una parte, y las actividades de investigación y desarrollo y producción, por otra.

Sin desconocer que en el derecho comparado se ha optado por diferenciar las funciones de investigación y desarrollo, por una parte, y la producción nucleoelectrónica, por la otra, se ha considerado preferible en el caso

argentino acumular ambas funciones, que a mi juicio no deben ser consideradas como incompatibles.

Por el contrario, teniendo en cuenta que la actividad nuclear en la Argentina no ha alcanzado aún el desarrollo que posee en los países industrializados, parece razonable complementar ambas actividades, tendiendo a evitar que la investigación y desarrollo no se pierda en especulaciones desvinculadas de las necesidades del país, y que las actividades productivas tengan el apoyo inmediato que para ellas significa la activa e intensa realización de tareas de investigación y desarrollo. Ello, con el correlativo estímulo que para los científicos debe significar la posibilidad de materializar sus descubrimientos en una industria nuclear vigente y en marcha.

Con relación a las formas jurídicas a adoptar, hemos preferido teniendo en cuenta su función, asignar al ente de regulación y control el carácter de ente autárquico, manteniendo a su personal en una relación de empleo público.

En cambio, consideramos que la actividad investigación y desarrollo-producción —especialmente teniendo en mira a esta última— requiere de una estructura más ágil. Por ello, hemos considerado adecuado el régimen propio de la Sociedad del Estado (ley 20.705), en cuanto aún a la flexibilización necesaria para el funcionamiento empresarial, la garantía de mantenimiento de las actividades que nos ocupan cumplidas por la ex CNEA, dentro de la órbita estatal.

En cuanto a la formación de recursos humanos para la actividad nuclear, dada su vinculación con la actividad empresarial, hemos considerado adecuado incluirla dentro de las facultades de la Sociedad del Estado.

Un importante aspecto que considero necesario puntualizar es el relativo a que a través de la presente ley proponemos concluir con el monopolio estatal de la actividad nuclear, que contenía su predecesora. Un paso importante en tal sentido es precisamente la separación de las funciones de regulación y control, de las de investigación y desarrollo, con miras a obtener que las primeras funciones sean cumplidas por un ente que con un criterio de igualdad, fiscalice las actividades realizadas por el sector público, y las que se hallan a cargo del sector privado. Queda establecido el libre acceso del sector privado a la actividad nuclear, sujeto a las regulaciones y controles a que tal actividad está sujeta en todos los países. Pero a diferencia del Poder Ejecutivo nacional, entendemos que la actividad que nos ocupa debe ser llevada a cabo por el sector privado a través de sus propios capitales e inversiones, y no empleando para fines individuales el capital formado por el esfuerzo del pueblo argentino a través de generaciones, el que, de prosperar el aludido proyecto, sería ciertamente enajenado por precios nada representativos del valor real de los activos vendidos, como ha sucedido en otras privatizaciones.

En definitiva, consideramos que el esquema que proponemos permitirá una continuación de la actividad nuclear estatal con mayor flexibilidad y criterio empresarial; un desempeño más adecuado y objetivo de la regulación y control, que alcance también a la actividad que realice el Estado nacional; la posibilidad abierta para el desarrollo de una auténtica actividad nuclear privada, no basada en consideraciones de inmediata ganancia sin inversión de capital ni riesgos —como podría derivarse de su

desarrollo con los criterios del Poder Ejecutivo nacional — sino de real inversión y aporte para el desarrollo del país; y, fundamentalmente, la continuación de una actividad que se ha revelado valiosa, prácticamente imprescindible, para el bienestar y el crecimiento de la Argentina.

El proyecto de ley en revisión no garantiza estos objetivos, por el contrario, consideramos que es altamente perjudicial para el patrimonio nacional, y constituye la destrucción lisa y llana del mayor capital científico y tecnológico que supo construir nuestro país a lo largo de décadas. Consideramos, pues, que su sanción es claramente inconveniente para el país.

*Juan I. Melgarejo. — Raúl A. Galván. —
Alcides H. López. — Mario A. Losada. —
José Genoud. — Conrado H. Storani.*

Sr. Presidente. — En consideración en general. Les recuerdo a los señores senadores que en la reunión de presidentes de bloque de ayer se acordó votar en general este proyecto a las 15 y 30.

Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Justicialista.

Sr. San Millán. — Señor presidente: antes de comenzar a fundar el despacho en mayoría quiero hacer una reseña breve de la historia de la actividad nuclear en nuestro país y de los órganos del Estado nacional que tuvieron esta responsabilidad.

En 1950 se crea por decreto nacional 10.936, del 31 de mayo, la Comisión Nacional de Energía Atómica —CONEA— la que, a través de casi medio siglo, ha desarrollado las más avanzadas tecnologías especialmente en materia nuclear, a la vez que ha formado científicos y tecnólogos del más alto nivel, cuyos logros han sido reconocidos en todo el mundo.

Quiero hacer un público reconocimiento en nombre de nuestro bloque a esa pléyade de científicos y tecnólogos que han pasado por la CONEA, y que han realizado importantes aportes al desarrollo de esta actividad tan relevante para el país, como es la nuclear.

La CONEA tiene entre sus funciones específicas la de coordinar, estimular y controlar las investigaciones atómicas oficiales o privadas que se realizan en el país; así como también la de asesorar al Poder Ejecutivo nacional en la adopción de medidas tendientes a asegurar el buen uso de la energía atómica en la medicina como en las actividades industriales entre otras.

En 1956 por decreto ley número 22.498 del 19 de diciembre, se reorganizó la Comisión Nacional de Energía Atómica como entidad autárquica con capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico,

industrial, comercial, administrativo y financiero. Pasaron a integrar su patrimonio los bienes que pertenecían a la Dirección Nacional de la Energía Atómica y a la Planta Nacional de Energía Atómica, organismos estos dos últimos que fueron creados por medio del decreto nacional 9.697 de 1951.

En 1958, devenida la institucionalización democrática, el Congreso Nacional sancionó la ley 14.467 por la que se declaró la vigencia del decreto-ley del gobierno de facto, que reorganizaba la CONEA, continuando así el desarrollo del sector con un avance científico tecnológico sostenido, cosa que paradójicamente ha ocurrido en forma totalmente ajena a los cambios institucionales operados en la República.

Tal como se ha expresado precedentemente, transcurre el tiempo hasta que llegamos a 1994 con una Comisión Nacional de Energía Atómica que ha construido las centrales nucleoelectricas Atucha I y Embalse y tiene en construcción Atucha II, creando en asociación con provincias o con la actividad privada empresas reconocidas mundialmente por su alta capacidad tecnológica.

Pero su funcionamiento desde el punto de vista administrativo, con el andar se fue tornando complejo, siendo necesario también una importante inversión de capital, que el Estado no se encuentra en condiciones de realizar. Por lo que entendemos que es tiempo de separar funciones de acuerdo con las nuevas pautas que tanto a nivel mundial como nacional se han estructurado según las tendencias de globalización e interdependencia científica y técnica.

En este sentido el Poder Ejecutivo nacional en agosto de 1994 dicta el decreto 1.540, por el que se reorganizan las actividades que estaban a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica —CONEA—, distribuyendo parte de estas actividades en dos nuevos organismos que se crean. Estos son el Ente Nacional Regulador Nuclear, como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, y que cumple funciones de fiscalización y regulación de la actividad nuclear y de la seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares; y la Sociedad Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, más conocida por su sigla NASA, la que tiene a su cargo la actividad de generación nucleoelectrica vinculada con las centrales Atucha I, Embalse de Río Tercero, y es la responsable de la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Atucha II.

El 7 de agosto de 1996 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó un proyecto de ley

de la actividad nuclear de autoría de los diputados Abasto y Miglioni, que tuvo como antecedente reconocido el proyecto y su correspondiente mensaje que remitiera el Poder Ejecutivo nacional en enero de 1995 a dicha Cámara.

El citado proyecto ya en el ámbito del Senado de la Nación fue sometido a la evaluación de organismos públicos y de organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema y en la preservación del medio ambiente, buscando con ello darle a dicha normativa la más amplia difusión y discusión.

En ese sentido se realizaron audiencias públicas al tiempo que se visitaron los distintos centros de investigación y las centrales nucleares con el objeto de lograr una acabada visión de la actividad nuclear en nuestro país.

Ahora bien, considerando concretamente al análisis del proyecto, establece en su artículo 1º que quien fijará la política nuclear y ejercerá la función de investigación y desarrollo, regulación y fiscalización en materia nuclear será el Estado nacional a través de la CONEA y de la autoridad regulatoria nuclear.

Al igual que lo establece el decreto 1.950 al que hice referencia precedentemente, la actividad nuclear de índole productiva y de investigación y desarrollo que pueda ser organizada comercialmente podrá ser llevada a cabo tanto por el Estado como por la actividad privada.

Asimismo, se ha ratificado la subordinación a todos los tratados internacionales que ha suscripto nuestro país sobre proscripción de armas nucleares, control de materiales nucleares y con el organismo internacional de energía atómica para la aplicación de salvaguardias.

De la misma manera se establecieron las condiciones en que la CONEA seguirá funcionando en jurisdicción de la Presidencia de la Nación como ente autárquico, asesorando al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear, a la vez que tendrá la responsabilidad de promover la formación de recursos humanos de alta especialización en ciencia y tecnología, así como también la realización de emprendimientos de innovación tecnológica. Podrá, asimismo, desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales ejerciendo la propiedad estatal exclusiva así como el manejo de los materiales fisionables especiales contenidos en los elementos combustibles irradiados, y la de los fisionables especiales que pudieran ser introducidos al país desde el exterior, por estar calificados como elementos de tecnologías sensitivas.

Por otra parte, la Comisión a que hacía referencia será la responsable de efectuar prospecciones de minerales de uso nuclear sin perjuicio de que estas actividades puedan ser desarrolladas también por el sector privado; podrá celebrar convenios con operadores de reactores nucleares de potencia para realizar trabajos de investigación, entre otras competencias que les asigna este artículo.

La CONEA estará sujeta al régimen de control público y su personal estará sujeto al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

En el artículo 4º se detallan las funciones del directorio. Y en el artículo 5º se establecen las atribuciones ejecutivas del presidente de la comisión.

En cuanto a sus recursos, se formarán con los aportes del Tesoro, el producido por su propia actividad, las donaciones, subsidios y legados y un canon que será destinado a financiar las funciones de investigación y desarrollo que realiza la CONEA, el que estará constituido por un porcentaje de la venta de energía eléctrica generada por centrales nucleares. Es decir que de ser privatizado por el sistema que se determine, será soportado por el operador privado.

La autoridad regulatoria nuclear, sucesora del actual ENREN —Ente Nacional Regulador de la Energía Nuclear, creado por decreto 1.540/94—, se ha perfilado siguiendo los principios contenidos en la Convención de Viena sobre Actividad Nuclear —recientemente aprobada por este Congreso—, que establece la necesidad de que la autoridad nuclear esté totalmente separada de todo otro organismo oficial o privado relacionado con las distintas fases del desarrollo del sector, es decir, de quienes supervisará.

La autoridad regulatoria nuclear actuará como ente autárquico dentro de la esfera de la Presidencia de la Nación, siendo ello necesario por sus funciones específicas de supervisión y control de otras entidades de derecho público de distinto rango.

Los artículos 14 y 25 del proyecto en consideración tratan sobre las atribuciones, funciones y obligaciones, así como del funcionamiento de dicho organismo regulatorio nuclear, que estará dirigido y administrado por un directorio cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo, siendo dos de sus integrantes elegidos a propuesta de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, respectivamente. Al respecto, cambia el criterio que tiene el actual Ente Nacional Regulador de la Energía Nuclear, que sería sustituido por el nuevo órgano, donde

todos los miembros del directorio son designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Los directores a que hacíamos referencia durarán seis años en sus cargos, debiendo contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia. El primer directorio será renovado por bienios y sus miembros sólo podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Aquí se ha seguido el criterio que este cuerpo ha sustentado y plasmado en las leyes por las cuales fue creado el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Si bien la temática de la gestión de los residuos nucleares es materia de otro proyecto de ley, cuyo tratamiento no encabeza la comisión que presido, la iniciativa en consideración incluye algunos principios generales que hemos tenido a bien considerar con especial esmero.

Dada la sensibilidad con que la sociedad aborda este tema, y por razones de especial prudencia, hemos requerido el asesoramiento de especialistas de primer nivel, y escuchado distintas opiniones al respecto, como la de los ex directores de la CONEA —entre ellos, el ingeniero Murmis—; asociaciones profesionales, como la que agrupa a los profesionales de la CONEA; y, también, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Asimismo, hemos escuchado las opiniones y las preocupaciones de intendentes y legisladores de la provincia de Córdoba, del departamento de Calamuchita, de diversas procedencias y orígenes políticos, a pedido del señor senador de la Sota.

En esa oportunidad —reitero— escuchamos las preocupaciones y las dudas que nos transmitieron los representantes de la provincia de Córdoba.

También escuchamos al departamento San Rafael, de la provincia de Mendoza, a través de sus representantes; a la organización Greenpeace; y a otras asociaciones y entidades que tienen el mismo objetivo de preservación del medio ambiente y fines ecológicos.

A esta altura de la consideración del tema, me siento en condiciones de asegurar que la cuestión tan controvertida sobre la posibilidad de construir un repositorio nuclear en la localidad de Gastre, en la provincia del Chubut, es de imposible realización sin una ley provincial que así lo establezca, por estar expresamente contempladas en el artículo 12 las condiciones necesarias para nuevos emplazamientos, los que deben contar con la aprobación de la autoridad regulatoria nuclear y, como ya lo expresé y lo repito,

de una ley provincial. Esto, en el caso que nos ocupa, es imposible, ya que la Constitución del Chubut expresamente lo prohíbe en su artículo 110.

El mismo régimen regula los posibles emplazamientos en el futuro de nuevas instalaciones nucleares relevantes.

Por otra parte, la CONEA, con fecha 14 de marzo del presente año, ha dictado la resolución 2/97, por la que se desactivan los estudios de prefactibilidad de un repositorio nuclear para residuos de alta actividad, realizados en la zona de Sierra del Medio, localidad de Gastre, provincia del Chubut.

Al respecto, debo destacar la especial intervención de los senadores por el Chubut Sala y Mac Karthy, y también la preocupación manifestada por el señor senador Sáez, de la Unión Cívica Radical, de que exista un instrumento que deje perfectamente aclarado que esta posibilidad, que contaba con un estudio de prefactibilidad, había sido desechada, ya que la norma legal establecía que los proyectos que se encontraban en ejecución, así como aquellos emplazamientos ya realizados, no necesitaban de la autorización de la autoridad de aplicación ni de una ley específica de las provincias.

El capítulo V, artículos 34 a 42, declara sujeta a privatización la actividad de generación nucleoelectrica que desarrolla Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima, más conocida como NASA, como una unidad productiva. Ello es así por cuanto el operador privado, en su caso, deberá asumir inexorablemente la responsabilidad del manejo de Atucha I y de Embalse y la terminación de Atucha II, ello en todos sus aspectos: terminación, puesta en marcha, operación, retiro, financiamiento, etcétera.

El Estado nacional, a través de la empresa NASA o la que la reemplace legalmente, mantendrá un 20 por ciento de capital, debiéndose aplicar de este porcentaje una suma proporcional a los trabajos en relación de dependencia dentro del Programa de Propiedad Participada, conforme a lo previsto en el capítulo III de la ley nacional 23.696.

Señor presidente, señores senadores: también hemos evaluado las consecuencias socioeconómicas que esta privatización implica; esencialmente, el enorme perjuicio que significa la paralización de la obra de Atucha II por la carencia de recursos estatales afectados necesarios para llevarla adelante hasta su conclusión.

Cabe destacar en este sentido que en los dos últimos presupuestos generales de la Nación que

este Congreso aprobara no se ha previsto un solo peso para terminar la obra de Atucha II.

En cuanto a este emprendimiento, debemos hacer notar que para la finalización de esta obra nos falta un 15 por ciento, lo que aproximadamente representa unos 650 millones de pesos. Reitero que el Estado no está en condiciones de afrontar este gasto. La obra está parada y se está deteriorando. Ha habido una inversión de 2.900 millones hasta el momento, suma que debe dividirse entre la etapa en que el Estado nacional ejecutaba a través de la CONEA, hasta 1994 —cerca de 2.600 millones—, y a partir de setiembre de 1994, en que se hace cargo NASA, en que la inversión ha sido del orden de los 350 millones.

Esta inversión que se ha realizado en los dos últimos años —como decíamos, no estuvo prevista en el presupuesto nacional— se llevó a cabo con fondos propios de la NASA, con préstamos y con aportes del Tesoro nacional.

Es verdaderamente patético ver cómo todo el esfuerzo que ha significado esta obra de tanta importancia para nuestro país no puede llegar a su fin. Hemos estado presentes en Atucha II y sentimos en carne propia la desesperación de quienes aún trabajan en esta central y están aguardando una solución. Dimensionamos lo que significa la paralización de esta obra, dada la inversión que hasta este momento ha realizado el Estado nacional —repito: 2.900 millones de pesos—, sin que en la actualidad pueda ser aprovechada en beneficio del país.

Hace unos momentos, antes de ingresar en el recinto, tuve contacto con directivos de NASA que me comentaban que lo que ayer era tecnología de punta —equipos que se adquirieron en su momento de acuerdo con las previsiones y la planificación realizadas— ..., no digo que sean hoy obsoletos, pero evidentemente han sido superados y que hay aproximadamente mil millones de pesos en piezas de repuestos para estos equipos que también fueron adquiridas, dado que no es fácil conseguirlas en el mercado industrial de la actividad nuclear. Estas piezas también sufren el deterioro y el paso del tiempo.

El desarrollo de esta actividad por manos privadas, una vez que Atucha II sea terminada va a significar una inversión de 650 millones de pesos para finalizar la obra y dará trabajo durante por lo menos cinco años —que es el plazo necesario para su terminación, dado el estado actual de obra, que estuvo paralizada— a alrededor de 5.000 personas, entre obreros, técnicos y profesionales.

Además de ello, ha sido también un factor preponderante en la decisión de aprobar este proyecto de ley en revisión el aporte que este emprendimiento significará para el desarrollo científico-tecnológico del país.

Al respecto, y para terminar, quiero citar al general Perón, que en su discurso del 1º de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa dijo: "En lo científico-tecnológico, se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado sin ningún costo para él. Hemos de luchar para conseguirlo; y tenemos para esta lucha que recordar las esencias: todo el conocimiento viene de Dios".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa de la Unión Cívica Radical.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: claramente queremos puntualizar nuestra disidencia total con el proyecto de ley que estamos considerando y dar los fundamentos de nuestra oposición, pero también proponer el dictamen alternativo que ofrece la Unión Cívica Radical en este tema. Porque estamos cansados de que, a través de reiteradas expresiones, se diga que la Unión Cívica Radical se opone y no propone. En este tema, como en tantos otros, la Unión Cívica Radical se opone con razones y, además, propone alternativas que creemos razonables y adecuadas al interés general del país.

Prácticamente estamos en la etapa final de un período de desmembramiento, de desguace y, yo diría, de liquidación de lo que fue un signo de orgullo para todos los argentinos, como la CONEA —Comisión Nacional de Energía Atómica—.

A partir de 1994 se sucedieron numerosos hechos que confirman lo que estamos afirmando.

Cuando se dicta el decreto 1.540 el 30 de noviembre de 1994 y se establece la transferencia de la CONEA —fundamentalmente, de las plantas de Atucha I, de Atucha II, y de Embalse— a la empresa denominada Nucleoeléctrica S.A., estábamos comenzando a visualizar los primeros pasos de lo que hoy se está consumando: la privatización de todo este complejo.

Lo dijimos entonces, lo reiteramos a lo largo de todo el proceso, y lo reafirmamos hoy.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Antonio Cafiero.

Sr. Berhongaray. — Una importantísima decisión de alta política nacional fue tomada por de-

creto —por este decreto 1.540/94—, violatoria de todos los principios constitucionales. Porque a nadie se le ocurre pensar que la ley de reforma del Estado —23.696— puede llegar a ser el elemento jurídico que avale la toma de una decisión política de primordial importancia, como lo es el cambio fundamental de toda nuestra política nuclear.

Aquí no estamos hablando solamente de privatizaciones. Estamos hablando fundamentalmente de un cambio, de un giro de 180 grados en nuestra política nuclear. Y esto no puede realizarse a través de un decreto, porque son claras y específicas funciones legislativas.

Decimos que este proceso de desmembramiento estaba provocando lo que hoy es una consumación: la aniquilación de los equipos de técnicos, de excelentes científicos que a través de muchísimos años había formado la CONEA y que fueron el orgullo de la Argentina, por la alta consideración internacional que tenían y por lo que nosotros mismos, los argentinos, estábamos visualizando.

Esta reestructuración que, como digo, comenzó en el 94, cuando claramente se separó la producción y generación núcleo-eléctrica de la investigación, estaba condenando de entrada a todos estos planteles de científicos, a la desaparición. Pero ésta no es una apreciación subjetiva. Este era un objetivo buscado, señalado y, en todo caso, impulsado por el Banco Mundial. Ya en 1993 el Banco Mundial, a través del informe anual que presentó, denominado "Argentina, de la insolvencia al crecimiento" —lo tenemos en su edición de 1993 y está a disposición de todo aquel que lo quiera consultar—, decía: "La CONEA debería ser reestructurada en unidades de negocio e investigación. La generación de electricidad debería constituir una de esas unidades de negocio bajo la Secretaría de Energía, en el Ministerio de Economía". Sigue diciendo: "También la planta industrial de agua pesada después de completada podría constituir otra unidad de negocio bajo la misma Secretaría". Y avanza el Banco Mundial en sus recomendaciones, que casualmente siempre terminan en hechos concretos asumidos por el actual gobierno y realizados por el mismo. Y dice: "La posible privatización de tales unidades podría llevar a eventuales ahorros de 4.236 puestos de trabajo, que representan un costo anual para el sector público de 850 millones de dólares".

Hasta aquí las recomendaciones del Banco Mundial. ¿Qué hizo el gobierno a quien esto se recomienda? Dictó el decreto 2.336, de 1994, estableciendo un sistema transitorio de retiros

voluntarios para el personal de la CONEA, cuya consecuencia fue, en una primera etapa, el retiro de 415 agentes del escalafón profesional, que después veremos cómo se aumentó a 590. De ellos, 280 agentes pertenecían al ciclo de combustibles; 198 agentes a investigación y desarrollo y 112 agentes a radioisótopos y radiación. Fue el retiro de 590 integrantes del mayor nivel científico lo que logró, buscó e indujo el decreto 2.336/94, en consonancia con las recomendaciones que el año anterior había realizado el Banco Mundial.

Pero este desgerenciamiento de las centrales nucleares, como paso previo a la privatización, crea situaciones que aparecen como paradójales.

Fíjense que en el decreto 836/95 se establece que por encontrarse personal que ha venido desempeñándose en funciones materiales o de apoyo de carácter crítico, vinculadas o la especialización tecnológica de la referida dependencia se refiere a la CONEA, razón por la cual resulta equitativo establecer una compensación extraordinaria para dicho personal... Es decir que poseyendo el Estado personal de destacables méritos, en lugar de conservarlo paga más para que se vayan. Y ésta es la paradoja que quiero señalar: decide abonar más dinero para que se vayan los científicos más calificados, estableciéndose en dicho decreto que existe una razón de justicia para pagar más ya que se trata de científicos altamente calificados.

Pero esto no se agota acá sino que el régimen de retiro voluntario de este personal altamente calificado tiene una limitación que establece que por cinco años no pueden reingresar a ningún organismo del Estado nacional, empresas descentralizadas autárquicas, y ni siquiera ejercer la docencia. Realmente no encuentro precedentes de una norma como la que estamos considerando.

Los argentinos hemos hecho —seguramente con los errores propios de todos los emprendimientos realizados en las últimas décadas— un gran esfuerzo para tratar de tener tecnología de punta en esta área. Hemos logrado resultados señalados en el mundo como altamente meritorios. Hemos formado un plantel de científicos y técnicos de altísimos nivel y de reconocido mérito internacional. Y en contraposición hemos establecido premios adicionales para que se vayan del Estado, y además les prohibimos, incluso, el ejercicio de la docencia universitaria por cinco años.

¿Cómo denominados esto? Y estamos en la etapa final. La resolución que establece la prohi-

bición a la docencia es la 836/95. Realmente quisiera que alguien nos explicara a qué se debe esta medida.

Escuchaba recién al señor miembro informante por la mayoría mencionar las inversiones realizadas en la inconclusa Atucha II. Hablaba de 2.950 millones — 2.600 antes y 350 en los últimos años — y de que quedaban todavía por invertir cifras estimadas en el orden de los 600 millones. De acuerdo con los números nuestros, son algunos menos, pero de todos modos se trata de cifras sumamente importantes.

Yo recuerdo que cuando era miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones se invitó al secretario de Energía, ingeniero Bastos, para que nos informara acerca de la estimación del precio de los complejos Atucha I, II, y embalse, que se estaban transfiriendo de la CONEA a la NASA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima).

Recién se estaba hablando de 2.950 millones para una de las centrales, la cual requeriría inversiones de aproximadamente 500 millones. Y yo recuerdo que el ingeniero Bastos nos decía que el valor de tasación — de acuerdo con los elementos que ellos tenían en cuenta, que constituyen el flujo de caja, es decir, lo que determina la tasa de retorno de todo el complejo cuya privatización estamos tratando — va a estar en el orden de los 260 millones de dólares.

Algunos tratarán de decir — como un funcionario le comentó recién al señor miembro informante — que hay equipos que no sirven o que están obsoletos. Ya estamos cansados de esos cuentos.

Sr. San Millán. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Berhongaray. — Si se la concede el señor presidente...

Sr. Presidente (Cafiero). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: cuando hablamos de privatización, no hablamos de venta sino de concesión, es decir que los bienes, el patrimonio, siguen siendo del Estado nacional.

Sr. Berhongaray. — Claramente; lo que quede, terminada la vida útil de esta planta, seguirá siendo del Estado nacional. Y de él será la obligación de hacerse cargo del desmantelamiento de la planta nuclear, que es lo más caro de todo.

En efecto, Atucha I ya está cerca del final de su vida útil, y será el Estado nacional quien tendrá que aportar los cuantiosos recursos que

requiere el desguace de la planta, de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional de Viena y las normas de seguridad internacional.

En definitiva, el costo del desmantelamiento será de tal magnitud que nos hubiera convenido vender la planta, quedando esta obligación a cargo del comprador. Por lo tanto, al concesionar estamos creando ese mecanismo tramposo que deja en manos del Estado la responsabilidad del desmantelamiento de las plantas y que implicará — reitero — un costo mayor que el que provendrá de estas privatizaciones.

Si hablamos de valores, debo hacer referencia a un crédito de 258 millones de dólares, ya otorgado y disponible, y que utilizarán los adquirentes privados, que bancos alemanes concedieron para la terminación de Atucha II. Entonces, veo esta cifra — y recuerdo cuando en la Comisión Bicameral el ingeniero Bastos nos decía que 260 millones de dólares era el monto que se estimaba obtener de estas plantas, en base al mecanismo de tasa de retorno o flujo descontado — y digo que realmente no sé de qué estamos hablando, cuál es el capital de riesgo a invertir.

Asimismo, a la responsabilidad que asumirá el Estado de realizar el desmantelamiento de la central nuclear cuando se agote su vida útil, hay que agregarle la obligación de efectuar el desguace de toda la planta de personal científico altamente calificado.

Reitero lo que dije al comienzo de mi exposición: hace rato que sobre este tema la Unión Cívica Radical viene planteando preocupaciones similares a las que hoy estamos planteando y presentando proyectos de ley alternativos.

En este sentido, hace ya varios años, cuando estaba en la Cámara de Diputados, presenté un proyecto de ley que, precisamente, seguía un criterio contrario y diametralmente opuesto al que hoy propone el oficialismo.

Por otro lado, cabe señalar que nosotros no creemos que la privatización sea la única vía para llevar adelante esta operación. Y tampoco lo cree Francia, ya que el ciento por ciento de la generación eléctrica de ese país está en manos del Estado.

Asimismo, por su parte, en algún momento la señora Thatcher creyó que era conveniente la privatización de las centrales nucleares, pero no llegó a concretarla, y es así que en Inglaterra estos establecimientos hoy no están en manos privadas.

Todos sabemos que en la fabricación y desarrollo de las centrales nucleares tiene una clara participación el Estado, y así ocurre en Corea y Finlandia, y otros países como Suecia y Suiza tienen un sistema mixto.

Con esto quiero decir que no necesariamente el sistema japonés o alemán son los únicos que deben ser seguidos, como si fueran los más exitosos del mundo, porque no es así.

El caso de Francia —insisto— es típico y fundamental, porque es un país que no cuenta con petróleo y que en las 56 plantas nucleares tiene una de sus principales fuentes de abastecimiento eléctrico.

Por eso es que la Unión Cívica Radical, consciente de que la Argentina debe mantener en este menú de generación eléctrica un porcentaje de nucleoelectricidad similar al que tiene, vino planteando desde siempre la necesidad de conservar las actuales empresas en manos del Estado, pero no en la situación en que hoy se encuentran sino bajo la forma de una sociedad del Estado, con sistemas más ágiles de funcionamiento.

Por supuesto que abrimos la posibilidad de que el capital privado invierta y construya otras plantas. Pero no queríamos que se consumara lo que hoy está ocurriendo, donde, a través de estas liquidaciones o privatizaciones a precio vil, se tiene como consecuencia necesaria el desmantelamiento del personal científico, como ya lamentablemente ha ocurrido.

El proyecto de la Unión Cívica Radical, cuyo dictamen en minoría hemos presentado, apoyado por todos los miembros de nuestro bloque, está desarrollado a través de siete títulos, que contienen treinta y cinco artículos. Además de elementos comunes que hacen a la nomenclatura y a algunos objetivos generales que compartimos con el proyecto de la mayoría, como separar la regulación de la producción, tenemos una especial disidencia con respecto al resto, particularmente el tema de repositorios y tratamiento de residuos radiactivos en nuestro proyecto establecemos, fundamentalmente, tres ejes centrales. El primero se refiere a la creación de un ente autárquico, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que tenga por objetivo todo lo relativo a la fiscalización, control, otorgamiento de licencias, establecimiento de sanciones y multas, planificación y asesoramiento al Poder Ejecutivo. Este ente autárquico estará integrado por cinco miembros, que durarán cuatro años en su mandato y que tendrán a su cargo, reitero, todo lo vinculado al control, planificación y regulación en materia nuclear.

En segundo lugar, proponemos la creación de una sociedad del Estado, a la cual denominamos "CONEA Sociedad del Estado", organismo que tendrá a su cargo todo lo vinculado a la investigación, desarrollo y producción nuclear. A través de esta sociedad del Estado pretendemos establecer que la investigación, el desarrollo y la producción nuclear deben estar dentro de un mismo organismo. Porque separar la producción de la investigación significa condenar a muerte a esta última. Este es el principio central que informa nuestro proyecto.

Por supuesto, nos estamos refiriendo a las actuales centrales y a toda la actividad productiva nuclear y no a las que pueda llegar a construir en el futuro la actividad privada, las que, por supuesto, van a estar licenciadas y fiscalizadas por este ente de control, el que a su vez estará controlado por la SIGEN y por la Auditoría General de la Nación.

Por otra parte, nosotros vamos a posibilitar la inversión de riesgo real y la radicación de capitales auténticos, y no la apropiación de los bienes que hoy se pretenden privatizar bajo esta forma de concesión.

En tercer lugar, en el título V, creamos una comisión bicameral de política nuclear que tendrá por objeto, precisamente, la supervisión y control de las actividades desarrolladas por el Estado nacional y por los sectores privados en materia nuclear. Dicha comisión estará integrada por diez miembros de ambas Cámaras, y tendrá funciones similares a las de otras comisiones bicamerales de control.

Señalamos también en nuestro proyecto la necesidad de crear fondos permanentes para el retiro de servicio de las centrales y para la creación de los repositorios de residuos nucleares. Sabemos que uno de los grandes temas del ámbito de la generación nucleoelectrónica es qué se hace, cómo se hace y cuánto cuestan el desmantelamiento de las plantas cuya vida útil se agota y los repositorios de residuos nucleares. Este es un tema vigente y que se va a plantear en la realidad dentro de muy poco tiempo cuando Atucha I deba ser retirada de servicio. ¿Cómo y con qué dinero vamos a hacer, adoptando todas las medidas de seguridad del caso, el desmantelamiento de esas plantas? Este es un tema que nos preocupa.

Por ello, en nuestro proyecto proponemos la creación de un fondo al que deberán aportar todas las empresas vinculadas a la generación nucleoelectrónica, tanto la sociedad del Estado CONEA como los particulares que se incorporen a esta actividad, para que en forma antici-

pada dispongamos de recursos, que serán muy altos, lo que quedará demostrado cuando dentro de poco tiempo comencemos a precisarlos.

En el título VII, al hablar de los elementos y minerales nucleares, señalamos que los yacimientos y depósitos de todo tipo que contengan minerales nucleares constituyen bienes privados de las provincias. En el artículo 30, afirmamos con toda claridad que la prospección de minerales nucleares es libre y que la explotación podrá ser objeto de concesión en las condiciones previstas por el Código de Minería y leyes complementarias. Los referidos minerales — es decir, los minerales nucleares — dados en concesión no podrán ser retirados del país y sólo podrán ser vendidos o transferidos a la CONEA Sociedad del Estado, quien pagará por ellos el precio que determine el ente de regulación y control en materia nuclear.

Seguramente, otros señores senadores van a completar el informe que estamos realizando y que, como ya dije, constituye una permanente preocupación de nuestro bloque y de la Unión Cívica Radical.

En los fundamentos de nuestro proyecto marcamos la oposición de la Unión Cívica Radical a la destrucción y liquidación de la CONEA por parte del Poder Ejecutivo nacional. Reforzamos esta postura con las declaraciones públicas realizadas por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical el 26 de junio y el 17 de agosto de 1995 y que llevan la firma del presidente de dicho órgano por aquel entonces, doctor Raúl Alfonsín. Concretamente, se reclamó al Poder Ejecutivo nacional la suspensión del decreto 1.540 de 1994, que, como dijimos, marcó el comienzo del desmembramiento y desguace de la CONEA.

En ese sentido, cabe señalar que el documento del 26 de junio de 1995 afirma que “la privatización de las centrales nucleares, al separar la relación entre investigación, desarrollo y producción, constituye una etapa absolutamente negativa que va a terminar con la entrega de las mismas en condiciones seguramente sin antecedentes en el mundo”. Esto fue lo que sostuvo en 1995 el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y lo que vinimos planteando a través de distintos proyectos presentados en aquel momento en la Cámara de Diputados, cuyos autores fueron, entre otros, los diputados Fayad, Berra y quien habla. También se presentaron proyectos en esta Cámara con la misma preocupación.

Queremos que cuando mañana todos los *lobbies* empresariales vinculados a este desguace y a esta sospechosa privatización utilicen cuan-

tiosos recursos económicos para tratar de vilipendiarla, quede en claro esta firme convicción de la Unión Cívica Radical, que oportunamente alertamos.

En su momento señalamos otros casos en los que el Banco Mundial era el que trazaba las políticas en la Argentina. Y entre seguir el reclamo del interés nacional y las sugerencias o recomendaciones del Banco Mundial, nuevamente el gobierno se alineó claramente en lo dispuesto por el Banco Mundial. Y no es que porque lo diga el Banco Mundial, por lo tanto es malo; sino porque ya estamos viendo que aquellas alertas, aquellas luces coloradas que prendimos en su momento, hoy se han confirmado.

Y mañana, cuando estas operaciones dejen al Estado el precio del desmantelamiento de las plantas y la responsabilidad ante los organismos internacionales — porque estamos concesionando y no privatizando —; cuando todo esto ocurra, y a precio vil, como Bastos quería, a 260 millones de dólares, seguramente alguien dirá: “¿Cómo se anticiparon los radicales?”. Y nosotros no nos anticipamos, simplemente escuchamos lo que otros decían hace ya mucho tiempo que iban a hacer. Para que eso no ocurra, hemos presentado nuestro proyecto y vamos a votar en disidencia total el proyecto de la mayoría.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: si bien voy a señalar mi posición en disidencia con este tema de tanta trascendencia, debo aceptar que esto responde a un modelo de política socioeconómica, un modelo — a lo mejor es muy fuerte el término que utilizo — de entrega, de concesión, de privatización de algo estratégico para la vida del país, como del mismo modo lo son las comunicaciones, el correo y todas las expresiones que hacen a la posibilidad de una auténtica liberación nacional y de una auténtica integración que la República necesita para la inversión, para el trabajo, para el desarrollo, para la ciencia, para la técnica y para tantas cosas importantes que debe tener una Nación a efectos de tener vuelo propio y posibilitar objetivos de grandeza e históricas posibilidades.

Esta iniciativa responde a un plan de privatizaciones, y no nos podemos extrañar. Que sea un regalo o no, lo dirán la historia y las consecuencias futuras que ocasione un tema de tanta trascendencia como la energía nuclear, que estaba valuada en muchos millones y que, indudablemente, ha visto disminuido su valor, teniendo en cuenta lo que se quiere entregar y privatizar.

Se dijo también que hay una pléyade de científicos e investigadores que trabajaron en la CONEA. Desgraciadamente, vamos a frustrarlos y a impedirles que sigan trabajando por la grandeza y la liberación del país, y por todo lo que significa el desarrollo técnico, científico y de investigación en las áreas estratégicas.

Voy a tratar de ser lo más claro posible respecto de este tema. Como el texto completo de mi discrepancia con el dictamen de la mayoría sobre este proyecto figura incluido en el orden del día que estamos considerando, me voy a limitar a resumir mi posición a través de las principales ideas que motivan esta actividad, contenidas en dicho documento.

En mi opinión, señor presidente, el problema central de aprobar el proyecto de referencia reside en convalidar a través del artículo 34 y conexos una serie de interrogantes sobre irregularidades en la privatización de las centrales nucleares y que no han sido aclarados todavía por parte del Poder Ejecutivo nacional. Todo esto es muy lamentable. Me refiero, concretamente, a los siguientes puntos inherentes a la cuestión de la valuación de dichas centrales.

Quiero hacer una exposición didáctica para que podamos entender y no confundir todo el pensamiento que quiero lograr con respecto a esta disertación. Hay una falta de respuesta al pedido de informes sobre valuación de las centrales nucleares. En abril de 1995 fue aprobado por este Honorable Senado un proyecto de comunicación de mi autoría, 1.200/94 del 18-10-94, por el que se pedía informes al gobierno nacional sobre la valuación de las centrales nucleares, que fue enviado al Poder Ejecutivo a principios de abril de 1995 pero que no ha tenido respuesta hasta la fecha. Prácticamente han pasado dos años.

La contestación a este pedido de informes fue reclamada reiteradamente a través de otros cuatro proyectos, complementarios o no del primero, relacionados todos con el tema nuclear. Ninguna de éstas reclamaciones ha permitido obtener la contestación del gobierno nacional respecto del 1.200/94.

La ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo a todos estos reclamos evidencia una seria falta de voluntad para contestar. Esta es otra cuestión de mucha gravedad cuando se trata de temas tan trascendentes.

En segundo lugar, existe una investigación judicial en curso sobre este tema. Actualmente, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del doctor Jorge Ballesteros, se sustancia

la causa número 17.266, caratulada "Soñes, Raúl Eduardo s/denuncia", por la cual se investigan irregularidades en la valuación de las centrales nucleares. Tales irregularidades son básicamente las mismas que las planteadas en los proyectos citados de mi autoría. No parece conveniente que este Congreso Nacional, que debe ser transparente en todas sus expresiones, avance en la aprobación de una ley sobre actividades nucleares que convalide lo actuado por el Poder Ejecutivo en esta materia de valuación sin que se haya concluido el citado expediente o que se tenga al menos un claro panorama del estado del mismo.

Tercer punto: no intervención de la Auditoría General de la Nación. En conocimiento de que la Auditoría General de la Nación ha sido informada también sobre este problema de presuntas irregularidades en el proceso de valuación de las centrales nucleares, quien habla hizo llegar a este organismo copia de las principales iniciativas presentadas, así como las respuestas parciales obtenidas del Poder Ejecutivo, entendiendo que las mismas pueden resultar de utilidad en caso de que esa Auditoría realice una investigación al respecto. Se considera que este organismo, ente dependiente del Congreso de la Nación, constituye en estas circunstancias el ámbito técnico adecuado para tomar intervención en este asunto.

Cuarto punto: nulidad del decreto 1.540/94 y de la resolución 283/94. El proyecto de ley sobre la actividad nuclear que hoy se debate convalidaría el avance unilateral e ilegal realizado por el Poder Ejecutivo en materia de reestructuración y privatización de las centrales atómicas a través del decreto del Poder Ejecutivo 1.540/94 y de la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía, los que contienen irregularidades de procedimiento y de valuación.

Señor presidente: en mi opinión el Congreso Nacional debe derogar el decreto 1.540 y consiguientemente la resolución 283.

Esta posición con respecto a la nulidad del decreto 1.540 ya fue sostenida por mí desde el inicio en el proyecto de ley contenido en el expediente S. 909/94 presentado el 6 de noviembre de 1994, el cual no tuvo tratamiento en este Honorable Senado.

La aprobación del proyecto de ley de la actividad nuclear conlleva el peligro de que se convaliden tales documentos, dejando abierto el camino para que el gobierno nacional siga adelante con el proceso de venta de la NASA, a pesar de las irregularidades señaladas.

Quinto punto: pedido de investigación pendiente sobre las irregularidades denunciadas por parte del Congreso.

Una de mis iniciativas, el proyecto de resolución contenido en el expediente 1.754/95 del 12 de diciembre de 1995, en que se solicitaba respuesta al expediente S.-1.200/94, pide también una investigación de todo lo actuado con relación a la valuación de las centrales nucleares.

La idea es que —como consta en la iniciativa— se comunique y/o dé participación de estas actuaciones a los organismos de contralor del Estado. Es muy importante que esos organismos controlen lo que hace el Estado, fundamentalmente la Sindicatura General de Empresas Públicas y la Auditoría General de la Nación, así como —en lo que correspondiere— el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Este control es muy importante para darle transparencia, solidez y, por sobre todas las cosas, corrección a todo lo que se pretenda.

Si se avanza en la aprobación del proyecto de ley nuclear sin que se haya despejado esta cuestión pertinente a la valuación de la NASA, se dejaría un grave punto oscuro en la aclaración oportuna de responsabilidades a nivel de gobierno.

Sexto punto: información no oficial e insuficiente del Poder Ejecutivo a través de la NASA.

Conforme con lo expresado en el primer punto de la presente exposición, el gobierno nacional no ha dado respuesta hasta la fecha al pedido de este Honorable Senado (proyecto de comunicación S.-1.200/94 y nota D.R.-192/95).

Recientemente, el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de este cuerpo, el senador San Millán, remitió una nota al actual secretario de Energía, ingeniero Alfredo Mirkin, por la que solicitó información referida a la tasación y valuación de las centrales nucleares antes del tratamiento de este proyecto de ley sobre actividad nuclear. Indudablemente, el presidente de la comisión actuó con una gran responsabilidad.

Por comunicación de la citada comisión a quien habla del 10 del corriente, tomo conocimiento de un memorándum con la firma del presidente de la NASA, doctor Martínez Ceballos, y del titular de la asesoría jurídica de dicha empresa, doctor Antonini, referente a la causa 17.266 (y no al proyecto contenido en el expediente S.-1.200/94 y siguientes) y que habría sido transmitida como posición de la Secretaría

de Energía en respuesta de la nota del doctor San Millán.

Tal respuesta —repito que no es la contestación oficial requerida insistentemente al Poder Ejecutivo— tampoco explica el problema de la subvaluación de las centrales —según lo señalo en mi dictamen en minoría—, ya que en esa nota se reconoce la gran diferencia entre el valor de los activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica —517 millones de pesos— y el capital social transferido a la NASA —261 millones—, pero se omite entrar en la cuestión de la justificación de tal diferencia, que es de 256 millones de dólares.

Igualmente, la nota informal de la NASA no hace referencia a dos hechos que son conocidos. El primero, la omisión de ocho rubros del activo de la CONEA, por 148 millones de pesos, que no fueron tenidos en cuenta en la valuación de las centrales.

No se trata de un revalúo negativo, sino de una omisión de importes que deberían haber sido considerados dentro del método elegido por las autoridades.

Además, por lo que sabemos, aún no se encontraría debidamente aclarado un monto de 128 millones, que aparece descontado de los activos de la central nuclear Embalse, y que corresponde a un problema de arrastre de larga data vinculado con la falta de la recepción definitiva de dicha central.

Ambos ítem, que suman 276 millones de pesos —148 millones, por un lado, y 128 millones, por el otro— no serían producto de una errónea asimilación de registros de activos con criterio de valuación según el método de flujo de fondos netos descontados —como dice ahora la nota de la NASA— sino de una omisión de rubros dentro de la aplicación del propio método. Dicho en otros términos, la nota de la presidencia de la NASA, aparte de no constituir una respuesta oficial del Poder Ejecutivo al Senado, no explicaría el problema de la subvaluación de las centrales nucleares, lo que viene así a corroborar la existencia de interrogantes de base que son motivo de mi cuestionamiento.

Señor presidente: este tema, tanto por su complejidad técnica como por las irregularidades en su manejo político-administrativo por parte del gobierno nacional, requiere —sin duda alguna— esperar a que se tengan las informaciones pertinentes y se lleven a cabo las investigaciones que correspondan, algunas de las cuales ya están en curso porque nosotros, como legisladores, en éste como en cualquier otro

tema, no podemos tomar decisiones importantes sin la debida información del Poder Ejecutivo.

En conclusión, aprobar el presente proyecto de ley nacional de la actividad nuclear significa convalidar serias irregularidades que comprometen los intereses y el patrimonio del Estado nacional en una materia en que el Poder Ejecutivo ha avanzado unilateralmente a través del decreto 1.540/94 y de la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía, a despecho de la oportuna competencia del Congreso sobre el tema y sin suministrar la debida información relativa a la valuación de las centrales nucleares.

Dicha valuación está fundadamente sospechada de haberse producido fijando una tasación baja de la NASA, sin un debido respaldo técnico y económico, sin que el gobierno nacional haya brindado las aclaraciones del caso y sin que hayan intervenido o concluido su labor otros organismos de investigación del Estado que son muy importantes.

Por eso, en mi opinión, esta Honorable Cámara no debe aceptar lo actuado por el gobierno nacional en este problema, no sólo porque ello implica la ratificación de un comportamiento cuestionable seguido por las autoridades de la administración central sino, además, porque una confirmación de este tipo afecta la transparencia en las decisiones del gobierno, y hasta la misma garantía de seguridad jurídica del proceso de privatización a que el Poder Ejecutivo quiere arribar. Ya la política de privatizaciones de la Argentina en su conjunto está puesta en tela de juicio como apéndice de una fórmula de pago con activos del servicio de la deuda externa. Sería más grave todavía que a ello se sume, en este caso de las centrales nucleares, la existencia de una subvaluación de ellas.

Señor presidente: quiero resumir mi posición sobre el proyecto aquí planteado en tres conclusiones principales. Primero, aprobar la ley nuclear en las actuales condiciones supone otorgar al Poder Ejecutivo un cheque en blanco para malvender las centrales nucleares y convalidar una serie de irregularidades que se habrían producido al amparo del decreto 1.540/94 y de la resolución 283 de la Secretaría de Energía.

Segundo, el gobierno nacional no ha querido suministrar información sobre la valuación de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, pese a que fue insistentemente requerida.

Tercero, el procedimiento que se está siguiendo para llevar adelante este nuevo proceso de privatización es cuestionable, carece de la debida transparencia informativa y debe ser some-

tido a investigación por parte de los organismos de contralor competentes del Estado.

Además de los pedidos de informes no contestados, sobre el mismo problema, existe una causa legal que se está tramitando en el fuero federal, un principio de investigación por parte de la Auditoría General de la Nación, expedientes internos en los que se denuncian irregularidades ante la misma Secretaría de Energía de la Nación, y antecedentes que obran en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Se trata de una cuestión elemental, de procedimiento lógico y administrativo que este Honorable Senado no se expida favorablemente con respecto al presente proyecto de ley sin que antes se hayan aclarado todos los graves interrogantes pendientes, sin que el Poder Ejecutivo haya brindado las informaciones correspondientes y sin que se hayan definido aún las causas administrativas y judiciales que inhiben seguir adelante con la privatización de las centrales nucleares.

Por las razones expuestas, me opongo terminantemente a esta privatización. Sé también que el ex secretario de Energía valuó en 600 millones de dólares el precio a pagar por las centrales eléctricas. Sin embargo, ahora se las valúa en 261 millones de dólares, aunque creemos que se las pretende entregar en 200 millones.

Según los cálculos de presupuesto para el corriente año, el gobierno espera efectuar la venta, prácticamente, como dije y ratifico en 200 millones. Pero frente a este bajísimo nivel de venta, el Estado absorbe los pasivos de la NASA, que se estima pasan los 2 mil millones de pesos. Esto significa que se privatizan empresas libres de deudas para el comprador, y el Estado se queda con un pasivo veinte veces superior al precio de la venta. También hay que tener en cuenta que la CONEA factura 250 millones de pesos por año.

Todo esto le hace mucho daño al país, a la Nación Argentina, a nuestra Nación. No sé qué nos pasa a los argentinos, que no le tenemos confianza al hombre argentino ni a las instituciones de la República. Ya no existe la confianza. Queremos regalar todo.

Pareciera que los de afuera son mejores que nosotros, tienen mayor capacidad técnica, científica y de investigación. Corremos a nuestros hombres, sepultamos la inteligencia del país, destruimos a esta generación y las futuras. No sé qué nos está pasando, señor presidente, que no logramos que el país entre en el camino del gran desarrollo.

Estoy seguro de que si vivieran Perón, Frondizi o Yrigoyen estarían en contra de esta privatización.

Todos estamos orgullosos de la CONEA; todos nos sentimos orgullosos porque ha brindado la fuerza y los elementos necesarios de la inteligencia, del trabajo, de la creatividad, de la investigación y del desarrollo.

De lo que se trata es de afrontar las alternativas. Debemos proporcionar el apoyo económico necesario para que surja la CONEA, para que pueda brindar lo que nosotros necesitamos: la inversión, el trabajo, la energía barata con años de gracia, la posibilidad de la industria que debemos tener. Y la industria se moviliza con energía, con trabajo, con creatividad y con la integración que el país necesita.

Por ello, estoy en contra de que se regale lo que tenemos, lo que nos ha costado lágrimas, sudor y sacrificio, los que nos permite multiplicar las reservas económicas del país.

Seremos colonia de los poderes centrales si no somos capaces de realizar la integración propia que el país necesita.

¡Ya vamos a regalar el Correo; hicimos lo propio con las comunicaciones, con YPF, y ahora regalaremos la energía nuclear!

¡Basta ya de regalar, señores! ¡Pongámonos firmes, como auténticos argentinos que creemos en el hombre argentino y en la fuerza telúrica de todos los que hemos nacido en esta tierra!

Mientras yo viva seguiré defendiendo la fuerza productiva y el trabajo de todos los argentinos.

Si alguna institución no funciona bien, debemos corregirla. Por eso, hay que tener confianza en nuestras instituciones.

Señor presidente: me opongo terminantemente a este tipo de privatizaciones, a fin de que así el país alguna vez se levante, se proyecte y nuestros muertos puedan agradecer la valentía y el coraje de todos los argentinos.

—El señor senador Maglietti aplaude al orador.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: el orden del día que estamos considerando —el N° 59— nos plantea la discusión acerca de un tema de trascendental importancia, complicado y difícil, un tema que radica en las consecuencias que de este tratamiento

pueden derivarse para el futuro de nuestra Nación y de la humanidad.

Seguramente alguien podrá tildar de exagerada esta expresión, ya que afirmar lo antes expuesto puede sonar como un sobredimensionamiento del tema en cuestión. Al fin de cuentas, podría decirse que aquí sólo se trata de decidir el pase a manos privadas del ciclo de combustible necesario para la generación nucleoelectrónica y de las centrales nucleares Atucha I, Embalse y Atucha II.

Pero basta con aproximarse a la complejidad y vastedad del tema nuclear para comprender antes que nada que esta actividad, que entre sus múltiples y benéficas aplicaciones cuenta con la posibilidad de ser utilizada como una importante herramienta en el combate de las enfermedades más afligentes, asimismo es capaz de provocar a la humanidad daños inmensamente grandes y duraderos.

Resulta a mi juicio innecesario detallar aquí las consecuencias posibles de los accidentes nucleares, enumerar todas y cada una de las ocasiones en que éstos pueden ocurrir y referirme a todas las instalaciones de cualquier índole en las que se utilice material radiactivo para advertir que el riesgo de que ocurran accidentes comprende a todo el territorio de la Nación.

Seguramente acudirá a nuestra memoria el accidente acaecido en Chernobyl, a raíz del cual resultaron afectadas 9 millones de personas en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

No es mi intención desatar ni alentar la alarma y el terror ante la actividad nuclear ni esbozar aquí un discurso antinuclear. Sólo intento reflexionar acerca de la gravedad del tema en cuestión. Lo hago porque éste es uno de los puntos en que he centrado mi atención al analizar el proyecto que hoy debatimos.

En el texto de la norma propuesta encontramos que el artículo 10 establece en su inciso c) que toda persona física o jurídica, para desarrollar una actividad nuclear, deberá asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear determina la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, por la suma de 80 millones de dólares estadounidenses por accidente nuclear en cada instalación nuclear.

La siguiente pregunta deviene lógica a la luz del ejemplo antes citado: ¿podemos afirmar que con esta previsión legal deberíamos considerar suficientemente garantizada una reparación justa para las supuestas víctimas de un eventual

accidente? La respuesta podrá ser afirmativa, en muchos casos, pero podrá también ser negativa en otros tantos.

Ahora bien, en la hipótesis de resultar insuficiente la cobertura propuesta, ¿quién se hará cargo del monto que demanden las reparaciones de daños y perjuicios no alcanzadas por las previsiones del artículo 10? ¿Será el Estado nacional? En este caso, ¿contra quién repetirá los gastos realizados? ¿Mediante qué procedimientos?

Para no agotar a los señores senadores podría decir que estas pocas preguntas bastan para sostener que no podemos considerar que aprobando este proyecto de ley estemos tomando todas las previsiones necesarias para garantizar a nuestros conciudadanos una adecuada reparación en caso de producirse un accidente nuclear.

En los artículos 12 a 14 encontramos regulado lo referente a la localización de instalaciones nucleares relevantes y repositorios de alta, media y baja actividad, disposiciones estas que significan un virtual congelamiento de la actividad nuclear.

Ello es así habida cuenta de que para efectuar emplazamientos de instalaciones nucleares relevantes se deberá contar con la aprobación del Estado provincial donde se proyecte dicha instalación; y para definir la ubicación de repositorios de alta, media y baja actividad, será necesaria una ley de las provincias en las que hayan de concretarse esas instalaciones.

Estas previsiones son prudentes. Pero debemos ser realistas y advertir, señor presidente, que el nivel de aceptación popular ante la instalación de un repositorio de residuos radiactivos o el emplazamiento de nuevas instalaciones nucleares — sean éstas relevantes o no — es considerablemente bajo, y que existen expresas prohibiciones en las constituciones locales y también en algunas cartas orgánicas municipales.

También el derecho público provincial prohíbe la introducción, el transporte y el depósito de residuos de origen extraprovincial. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a su vez, define a la ciudad como territorio no nuclear y prohíbe el ingreso, transporte y tenencia de sustancias y residuos radiactivos.

En forma inversa, el artículo 14 del proyecto que estamos considerando dispone que los lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios que estén en funciones, así como sus ampliaciones, para continuar en operación o para viabilizar el retiro de los residuos, no requieren autorización especial

legislativa ni de las municipalidades o las provincias en cuyo territorio esté ubicado.

De esta forma, es para mí hipotético el caso de que exista desarrollo de la energía nuclear en nuestro país después de la sanción de este proyecto. Existirá una gran concentración de instalaciones y repositorios en pocas y determinadas zonas de nuestro país que, a su vez, están densamente pobladas.

Esta concentración, que es inevitable a tenor del proyecto que consideramos, tendrá repercusiones negativas en lo que se refiere a la seguridad de algunas zonas del país y también disvaliosas desde el punto de vista de un desarrollo armónico de todas las regiones.

En resumen, señor presidente, y para ser lo más breve posible, diré que las disposiciones de este proyecto avanzan mucho más allá de constituir un instrumento para la regulación y privatización de parte de la actividad nuclear, y significarán un serio obstáculo para nuestro futuro desarrollo en el área.

Brinda una solución desacertada e insuficiente al problema de la responsabilidad civil por daños nucleares y estimula una concentración de instalaciones y repositorios en determinadas zonas densamente pobladas de nuestro país.

En consecuencia, señor presidente, voy a votar por el rechazo en general y en particular, de esta iniciativa en nombre de mi partido, el Partido Autonomista.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: algunos de los conceptos que voy a afirmar ya han sido adelantados por representantes de otras bancadas.

El Frepaso cree que en la Argentina no existe un proyecto amplio y coherente de producción y utilización de energías provenientes de distintas fuentes y, por lo tanto, correspondiendo a esta falta de proyecto general, no tenemos una iniciativa sobre la energía nuclear que se introduzca adecuadamente en ese marco.

Nosotros creemos que se está actuando improvisadamente y que, más allá del respeto que me merece la opinión de los señores senadores y diputados que se han abocado a la tarea de elaborar este proyecto de ley, por estar fuera de un marco más completo, las propuestas aparecen como iniciativas aisladas.

Hay — nadie puede negarlo — un creciente y progresivo deterioro de las centrales nucleares existentes porque tienen un mantenimiento demorado e ineficiente.

Esto, como ya lo sabemos, dio lugar a distintos episodios. Por ejemplo, cuando se rompieron las instalaciones de Embalse después del último mantenimiento en 1995, en que se habían realizado reparaciones. Otro tanto ocurre con Atucha donde, a nuestro criterio y el de los técnicos que hemos consultado, los daños impiden que esa central vuelva a funcionar dentro de los límites de seguridad deseados. Hay una muy débil presencia de las entidades que deberían ejecutar y controlar la actividad nuclear y esta debilidad, a nuestro criterio, se profundizará si se aprueba este proyecto.

Existe en la Argentina una particular carrera privatizadora —ha sido descrita acá y no voy a redundar en ella—, que en el caso de Yacretá, por ejemplo, nos obligaría a vender sus instalaciones en situación desventajosa. Y esta carrera se impone como prioritaria en el orden de los temas que involucran a la producción y a la administración de los servicios.

Pareciera que nada importa más que privatizar, y este afán privatizador está hecho a costa de la utilidad del proyecto, y aun a costa de la seguridad de las personas. Acá yo marcaría una contradicción, con otras áreas de la producción energética por ejemplo, la petrolera, donde empresas con fuertes capitales argentinos, que trabajan en el área petroquímica, cubren por iniciativa propia las normas que exige ISO acerca de la seguridad y la protección del medio ambiente. Esta ley avanzaría, como desarrollaré más adelante, en el sentido contrario.

La energía nuclear, que en otros tiempos se proyectaba como una de las opciones más fuertes para la producción energética mundial, hoy aparece debilitada, especialmente desde que descendió el precio internacional del petróleo. Esto es tanto por la existencia de otras fuentes de energía, de igual o más eficiencia —y hasta económicas—, como por los riesgos que comporta la actividad nuclear.

En el mundo hay sólo un antecedente de privatizaciones. Es el caso de Gran Bretaña, que es reciente, donde en un principio, cuando se ofreció a la venta, no hubo oferentes, porque el gobierno exigía que la empresa privada se ocupara, entre otras cosas, del tratamiento de los residuos radiactivos. Finalmente Gran Bretaña tuvo que asumir el grueso de los costos del procesamiento de los residuos y, así, se privatizaron sólo las centrales más eficientes y las menos eficientes quedaron en poder del Estado.

Este proceso es tan reciente que todavía no sabemos cuáles son sus efectos. No lo podemos

tomar como un caso como para hacer de él escuela.

Ustedes saben que en general, en todo el mundo, las instalaciones privadas lo son desde su construcción.

Acerca de la seguridad es interesante leer las prescripciones elaboradas por un comité gubernamental canadiense para el estudio de la privatización de las centrales en ese país. Fue difundido en junio de 1996 y sostiene que los altos costos que surgen de la administración, tanto de los desechos radiactivos como del desguace de las centrales que llegan al fin de su vida útil hacen que el sector privado no tenga interés por este negocio. Sumado a la preocupación que genera en el público lo referido a seguridad y protección, este comité canadiense concluye que las instalaciones nucleares deben seguir en propiedad del Estado. Es decir, para que los ciudadanos se sientan seguros, el comité canadiense exige al Estado que dé seguridad a sus ciudadanos.

En cuanto al mismo tema, la organización canadiense PWU expresó: "Debe resultar difícil inducir a una compañía privada, la cual ha sido establecida con el propósito específico de obtener beneficios económicos, a que asigne a la seguridad una mayor prioridad que a éste".

En pocas palabras, se supone que el interés de la ganancia puede poner en riesgo la seguridad de la sociedad.

En lo referido a este punto, el proyecto en discusión determina en el artículo 16 —que ya se ha marcado aquí—, inciso II), que para realizar mejoras en la seguridad, derivadas del establecimiento de nuevas normas regulatorias, éstas se deberán fundamentar en un criterio de evaluación basado en la relación costo-beneficio.

¿Una empresa privada va a sentir como costo la seguridad de la sociedad? Esto es casi seguro si el Estado no lo regula muy activamente. Según el mismo artículo, para la incorporación de estas normas ellas sólo serán sugeridas a los privados en lugar de ser impuestas.

Además, se establece en el artículo 9º, inciso c), que quien desarrolle una actividad nuclear deberá asumir la responsabilidad civil por daños nucleares por una suma de hasta ochenta millones de dólares.

Yo no sé si las centrales argentinas tienen la misma capacidad de daño, pero me pregunto cuánto habrá costado Chernobyl.

En síntesis, existen pocas exigencias referidas a normas de seguridad y un monto bajo por responsabilidad civil. Ochenta millones de pesos

pueden devenir en poca responsabilidad de los privados con respecto a las necesidades y derechos de la sociedad.

Existen otras dos cuestiones relevantes en este proyecto de ley. En primer lugar, para que se desarrolle una actividad nuclear de gran magnitud es necesario el tratamiento de los desechos radiactivos. Esto significa construir repositorios nucleares. El proyecto establece en el artículo 12 que los organismos regulatorios propondrán un lugar de emplazamiento para un repositorio, previa aprobación por ley del estado provincial donde se haya propuesto la localización.

Todo eso está bien, pero en el artículo 13 se determina que esta aprobación no es exigible en el caso de repositorios existentes y sus vías de acceso, quedando así abierta la puerta para la ampliación sin límites de los repositorios actuales y para el tránsito de material radiactivo por dichas vías.

En el artículo 10 la actividad nuclear queda sometida a la jurisdicción nacional, quitándole el poder de regulación y fiscalización a las provincias sobre las instalaciones nucleares ubicadas en su territorio. Paradojalmente, prácticamente todas las provincias que renovaron su Constitución —y son muchas— tienen un punto que incluye la prohibición del tránsito y estacionamiento de material radiactivo que ponga en peligro al medio ambiente.

Quiero en este punto recordar que el almirante Castro Madero, quien diseñara toda la política en esta materia durante el proceso militar, proyectaba la construcción de un repositorio no limitado a la producción local. Es decir que soñaba con un gran depósito de basura nuclear importada. No existe ningún párrafo en este proyecto que prohíba expresamente la importación de residuos radiactivos. Si bien la Constitución Nacional prohíbe dicha importación, la caracterización del residuo es compleja e imprecisa y da lugar a diferentes interpretaciones.

Siendo éste uno de los temas más complejos por el costo que implica, no queda en claro qué ocurriría con las centrales privatizadas que concluyan su vida útil o terminen con la explotación por los motivos que fueran. No se expresa claramente si serán los privados los encargados de sostener la totalidad de los costos del procesamiento de los residuos radiactivos y no se establecen aportes para crear un fondo destinado al desmantelamiento de las centrales y repositorios fuera de servicio.

El proyecto entonces, señor presidente, presenta a nuestro criterio innumerables puntos os-

curos y, en síntesis, podríamos decir que en su lugar habría que establecer una propuesta ampliamente debatida sobre una política de energía que incluya también a la energía nuclear.

En materia nuclear habrá que proyectar una legislación respetuosa de los intereses de la Nación y de las provincias para establecer el marco preciso de la actividad, inscripto en esta política, incluyendo el diseño de los organismos de ejecución y control.

Recién allí, y a la luz de experiencias internacionales sobre el tema, podría plantearse el destino de las centrales nucleares existentes en el país.

Por todo lo expuesto, adelanto el rechazo del Frepaso a la aprobación de este proyecto.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: he leído con mucha atención este proyecto y sus disidencias y quiero dejar aclarado que no me asusta la participación del capital privado en las centrales nucleares, ya que en el mundo hay más de cuatrocientas centrales atómicas y la mitad de ellas son privadas, aunque hay que destacar que ellas fueron construidas por capitales privados, es decir, que no fueron posteriormente privatizadas, salvo un caso en Inglaterra y quizás algún otro aislado.

Asimismo, creo que el proceso de privatización es complejo y que hay fundadas dudas en cuanto a los valores de las centrales.

Aclarado este concepto, quisiera también dejar sentadas algunas otras reflexiones. En primer lugar, quiero reivindicar la importancia y el prestigio que tuvo nuestro país por contar con un organismo como la Comisión Nacional de Energía Atómica, que continúa en vigencia en este proyecto de ley.

De todas maneras, nos preocupa la política instrumentada a su respecto porque este organismo ha sido privado de muchos recursos humanos y financieros, fruto quizás de angustias económicas. Y esto lo señalo con una justa preocupación.

Con relación al proyecto en sí, sobre el cual se trabajó mucho, debo decir que lamentablemente llega, diría yo, como atado a este recinto; con la decisión política de aceptarlo como está, dado el tiempo transcurrido y las urgencias del oficialismo que requieren de la ley.

La ley 24.498, que sancionó este Congreso, se refiere a la actualización minera. Esta norma es muy importante, y si bien yo no era senador en ese entonces, la recibí con mucha satisfacción

porque permitió el desarrollo de nuestra minería, que se encontraba atada por regulaciones, trabas e intereses que a lo mejor no eran claros.

Entonces esta ley 24.498 fue la que modificó el Código de Minería y, entre otras cosas, ella establece que las provincias son las que conceden los permisos de explotación minera de los minerales radiactivos, concretamente, el uranio. Sin embargo, dado que se olvidaron de esta ley —y lamento que no se encuentre presente el señor miembro informante—, se ha establecido, por ejemplo, que la concesión de explotación minera y concentración de uranio la otorgará el órgano regulador, cuando en realidad ésta es una facultad que les corresponde a las provincias.

La ley 24.498 derogó el apéndice del Código de Minería, establecido por el decreto ley 22.477 de diciembre de 1956. Y digo que no se trata sólo de un error material, sino de un error de fondo no fácil de solucionar, salvo por la vía del veto, porque fijese, señor presidente, que en el artículo 33 del proyecto se establece lo siguiente: "Deróganse el artículo 2º, el artículo 5º, el artículo 9º, el artículo 11, el artículo 16 y el artículo 17 del decreto ley 22.498 del 19 de diciembre de 1956". Resulta, señor presidente, que esos artículos fueron ya derogados por la ley 24.498, que reemplazó el apéndice del Código de Minería y que establece toda la reglamentación relativa a la explotación de los minerales nucleares.

Por otra parte, mediante el inciso c) del artículo 16, se le atribuye a la autoridad regulatoria nuclear la función de otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y concentración de uranio, facultad que este Congreso —con mucha sabiduría e inspirado en una política incentivada por el Poder Ejecutivo— otorgó a las provincias. Y aquí se la viene a modificar.

No sé entonces qué solución puede buscarse si lo que se pretende es aprobar el proyecto tal como está.

Pasando ahora a otras cuestiones, debo decir que el artículo 9º, inciso c), establece un techo de ochenta millones de dólares para la responsabilidad civil de los titulares de centrales nucleares. Si bien esto se inspira —tal como se lo dice en la misma norma— en la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, la realidad es que si los daños superan ese techo del resto se hará cargo el Estado, tal como se lo expresa también en el artículo. Así; simplemente. En caso de un accidente nuclear, el Estado deberá hacerse cargo del resto.

Considero entonces que en un emprendimiento que implica una inversión de muchos millones de dólares la responsabilidad de los titulares de plantas nucleares debe ser superior a los ochenta millones, independientemente del techo que se establezca en la citada convención de Viena, sobre todo desconociendo los intereses que jugaron para llegar a ese pronunciamiento.

En efecto, el párrafo del citado inciso termina diciendo: "...asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente". No podemos terminar la central de Atucha II porque nos faltan quinientos millones de pesos desde hace años, pero resulta que ahora entregamos las centrales y seguimos siendo responsables por los eventuales daños que superen los ochenta millones, cuando esa cifra representa una mínima parte del daño que puede ocasionar un accidente nuclear.

Al respecto, señalo que he leído los dictámenes de comisión, incluso un dictamen firmado por usted, señor presidente, donde se pone el acento en el medio ambiente. En el dictamen en mayoría se habla de la seguridad física y radiológica, pero el tema de la contaminación ambiental —que en los tiempos que corren es la gran inquietud de una humanidad que cada vez más se va dando cuenta de que está usando mal nuestro hogar que es la Tierra— ha quedado un poco relegado y es tratado como al pasar. Realmente, ésta es una preocupación que quiero dejar sentada.

Con respecto al artículo 26, hay otro aspecto interesante: la redacción no es en absoluto clara y fácilmente se podrá evitar abonar lo que sería justo pagar como canon para la autoridad regulatoria. Fíjense que dice: "Para el caso de centrales de generación nucleoelectrónica esta tasa regulatoria anual no podrá ser superior al valor equivalente al precio promedio anual de cien megavatios hora (100 MW/h) en el Mercado Eléctrico...". ¿Saben cuánto es el costo de cien megavatios? Sólo dos mil ochocientos veinticinco pesos. Y más adelante se agrega: "Dicha suma deberá abonarse por megavatio de potencia nominal...", y no queda claro si el párrafo siguiente se refiere a la limitación o acotación en el tiempo. De cualquier manera, la suma no es muy importante: para mil megavatios, que será la potencia instalada de todas las centrales, el canon anual será de 2.800.000 pesos, teniendo en cuenta que según el párrafo anterior la suma se abonará por cada megavatio de potencia nominal instalada. Realmente, si tomamos en

cuenta los valores en juego, esa suma es muy pequeña para mantener la autoridad regulatoria.

Además, no se especifica cuánto será el porcentaje que deberá destinarse a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay un decreto, que lleva el número 1.540, que establece que será del orden de los 30 millones anuales; el resto figura en el presupuesto nacional. O sea, son algo así como 170 millones, y 30 son aportados por las centrales nucleares. Es una suma pequeña. De cualquier manera, el decreto habla de 30 millones y aquí no se dice otra cosa más que ello quedará librado al Poder Ejecutivo.

Ahora bien, ¿por qué se ha establecido este aspecto? Por una sencilla razón: cuando se privatizan las centrales, ese porcentaje no podrá ser modificado en absoluto porque ello representaría modificar las condiciones económicas en que fue pactada la privatización. De manera que este punto debe ser cuidadosamente analizado.

Ya he señalado mi preocupación con respecto al artículo 33 que no se condice con una buena técnica jurídica y que realmente me parece que no debería ser aprobado tal como está redactado. A mí entender, esto no se soluciona diciendo "hay un error material". Habría que analizar el tema de la intervención de la autoridad regulatoria en las concesiones mineras.

Voy a pasar a analizar a continuación el artículo 40, por el que se restablece o establece el "Compre Nacional". Realmente, esto será inaplicable; y voy a decir por qué. La Comisión Nacional de Energía Atómica produce material radiactivo para las centrales. ¿A qué costo? Hasta hace poco, lo estaba produciendo a 118 pesos o dólares el kilo y ahora lo está produciendo a 96, mientras que en el mercado nacional se conseguía a 25 y creo que ahora ha aumentado a 35 dólares el kilo. En una disidencia al dictamen —que creo es firmada por usted, señor presidente— se indica que esto será siempre que cumpla los valores de calidad y precio internacionales. Aquí no se dice nada. Sólo se indica que las centrales deberán utilizar los productos producidos en el país. Fíjense que en la actualidad, tal vez por medio de una medida que es correcta, lo que hacen es utilizar un 30 por ciento de material nacional y un 70 por ciento de material importado para compensar un poco los costos y, por otro lado, para subsidiar de alguna manera la producción nacional. No estoy en desacuerdo con que se trate de utilizar la producción nacional; eso está bien. Lo que no creo es que sea viable, tal como dice el artículo 40, que las centrales nucleoelectricas utilicen el ciento por ciento de combustible nuclear procedente o

elaborado de minerales radiactivos de yacimientos ubicados en el país. Y esto hoy no se hace por los precios porque cuesta 100 pesos lo nacional y 35 pesos lo importado. Entonces se buscó una solución de compromiso: un 30 por ciento nacional y un 70 por ciento importado, con lo cual más o menos se ayuda a mantener los yacimientos de Mendoza y de La Rioja, que son los que actualmente están en explotación, ya que los de Salta fueron cerrados por el alto costo, dado que había que llegar a profundidades muy grandes y con mucha inundación. Creo que este artículo también ofrece dificultades de aplicación práctica.

He oído por ahí que un proyecto de decreto reglamentario le agrega ese párrafo, "siempre y cuando estén acordes a los precios y calidades internacionales". Pero sabemos que esto es absolutamente imposible por vía de un decreto simple.

Pese a coincidir con la filosofía que inspira a esta iniciativa, vinculada con la conveniencia de que haya capital privado en la actividad nucleoelectrica, y haciendo la especial salvedad de la importancia de que la Comisión Nacional de Energía Atómica cuente con los recursos para seguir siendo lo que ha sido, no una empresa, sino un ente de investigación, de tecnología y de formación de gente, me va a resultar imposible apoyar este proyecto tal como está, a menos que estas cosas se modifiquen, para lo cual deberíamos devolverlo a comisión. Y en rigor de verdad no propongo esto ahora porque obligaría a votar, y no es mi intención que nos quedemos sin quórum. Creo que lo más conveniente es que el tema vuelva a comisión a efectos de que sean corregidos estos errores materiales y de técnica jurídica, y no de filosofía y de decisión política.

Estas son las razones que van a fundamentar mi voto.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: estamos sometiendo a consideración del Senado este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados vinculado con la actividad nuclear.

Esta iniciativa tiene dos partes bien diferenciadas. La primera referida a las funciones del Estado en materia nuclear, los criterios de regulación y jurisdicción, entre otros aspectos de gran importancia. La segunda parte contiene la declaración de sujeto a privatización de las actividades que realiza Nucleoelectrica Argentina S.A., la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Nu-

cleares, y toda la actividad vinculada con el ciclo de combustible nuclear.

El tema nuclear es de por sí un asunto conflictivo; principalmente este intento privatizador, que ha suscitado variadas oposiciones que van desde aspectos de soberanía nacional e industrial hasta criterios ecológicos y de preservación del medio ambiente, por ejemplo, los repositorios de desechos nucleares. Tampoco puede obviarse el problema presupuestario que sin duda alguna podría generarle a la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales ciertas disposiciones emanadas del proyecto de ley en análisis.

Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 36 que declara sujeta a privatización a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la CONEA. Esta disposición traería como efecto directo que la citada comisión perdería un conjunto de recursos provenientes de estas actividades productivas, algo que podría afectar su normal desenvolvimiento, especialmente en áreas de investigación y desarrollo.

A esto se agregaría la eliminación de lo dispuesto en el artículo 14 inciso c) del decreto 1.540/94 por el cual Nucleoeléctrica Argentina S.A. debería abonar a la Comisión Nacional de Energía Atómica el 8 por ciento de los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica generada por centrales nucleares, suma que no podría ser inferior a los 30 millones de dólares.

De la lectura del artículo 6º inciso d) del proyecto en consideración se deduce que el canon referido no está especificado, por lo cual aparecen dudas respecto de su valor, ya que el mismo podría ser inferior al citado anteriormente, no garantizándose el piso mínimo actualmente vigente.

Es por ello que me causa cierta inquietud el futuro presupuestario de la CONEA, que como todos conocen, ha sido y es uno de los pilares de la investigación en la Argentina y Sudamérica, abarcando diversas áreas que van desde el análisis de estudio de materiales, pasando por aplicaciones médicas y de desarrollo de nuevas técnicas en el área nuclear.

A esta altura de mi exposición deseo realizar un breve "racconto" de la actividad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde 1950, año de su creación, ha sido pionera en el desarrollo de esta actividad en Latinoamérica, exportando conocimientos y tecnología a distintas naciones hermanas.

Durante las décadas del 70 y 80, el plan nuclear argentino era muy ambicioso, ya que proyectaba la construcción de seis centrales nu-

cleares hasta el año 2000, además de la construcción de la planta de agua pesada, y otros emprendimientos de gran significado científico y técnico.

Legiones de técnicos salieron de los distintos centros de capacitación y estudio, de los cuales no podemos dejar de mencionar el famoso Instituto Balseiro.

En este sentido, debemos hacer justicia a nuestra capacidad de desarrollo tecnológico en materia nuclear, recordando que desde noviembre del año 1983 la República Argentina pudo anunciar oficialmente al mundo que era por entonces uno de los ocho países que habían alcanzado a dominar la tecnología del uranio enriquecido, elemento decisivo para la provisión soberana de nuestros emprendimientos nucleares.

En esa época era canciller. Recuerdo que en el mes de noviembre de 1983 anuncié oficialmente al cuerpo diplomático este emprendimiento que causó sensación. Y me tocó también, luego de haber dado esa información oficialmente a las principales potencias nucleares del mundo en la persona de sus representantes, como en el caso de los Estados Unidos y Rusia y de países vinculados especialmente con nosotros, como Brasil y Chile, reunir en un almuerzo al cuerpo diplomático latinoamericano y expresarles que la Argentina, que hacía poco había recibido pruebas de la fraternidad de nuestros hermanos de América latina, ponía este nuevo conocimiento a disposición de ellos para que juntos avanzáramos en nuestro desarrollo y progreso.

Creo que este antecedente justifica la preocupación que nos embarga en esta materia tan sensible a nuestros intereses y sentimientos.

Pasando ahora a analizar la primera parte del proyecto, me referiré a algunos aspectos fundamentales, como la función de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La actividad nuclear, tanto en el ámbito de la generación eléctrica, de la investigación, etcétera, conlleva grandes riesgos que, por lo tanto, requieren un alto grado de seguridad, pero si este se cumple, la actividad no ofrece mayores inconvenientes. No debemos olvidar, además, el problema de los desechos nucleares cuyo almacenamiento, debido a su alto grado de radiactividad que se preserva a través del tiempo, origina innumerables inconvenientes.

Estas preocupaciones se hallan claramente latentes en nuestra sociedad; por lo tanto no son resguardos infundados, ya que requieren una

eficiente y responsable tarea por parte del organismo regulador.

Nuestra experiencia en entes reguladores no ha sido buena. Creo que ha sido el punto más débil de la estrategia privatizadora llevada a cabo por este gobierno. Por ello es que me preocupa seriamente este aspecto.

Hago votos para que la selección de los miembros de la Autoridad Regulatoria Nuclear se haga de la forma más transparente posible, integrando a dicho organismo a los profesionales más destacados del área, sin injerencias políticas que puedan desvirtuar su labor futura.

Otro aspecto de importancia es el referido al Fondo para Retiro de Centrales Nucleares. Este fondo, que será aportado por el que explote una o más centrales nucleares de generación, se destinará a las tareas de desmantelamiento y retiro de servicio de instalaciones nucleares relevantes. Dicho aporte por parte del licenciatario debería ser proporcional a la cantidad de años que haya operado la instalación, condición que no se especifica en el proyecto de ley en análisis.

Entramos ahora a uno de los puntos más conflictivos, como lo es el relativo a los denominados repositorios nucleares contemplados en el artículo 12.

Mucho es lo que se ha debatido sobre este aspecto: cuál sería el lugar más conveniente, con qué tecnología, o si el repositorio sólo debe albergar residuos producidos por centrales nucleares nacionales o de otro origen.

En este contexto, la sanción de la Cámara de Diputados ha mejorado el proyecto original, al poner como condición fundamental para la instalación de un repositorio nuclear que la legislatura provincial sancione una ley que autorice la referida instalación. De no cumplirse con este requisito, sería imposible llevar a cabo cualquiera iniciativa de este tipo.

Queda pendiente la expresa prohibición a depositar en estos repositorios nucleares desechos radiactivos provenientes de otras naciones. A tales efectos, propongo que se agregue dicha prohibición en el artículo 12.

Otro tema de vital importancia es el relacionado con el daño nuclear. Al respecto, quiero citar la opinión de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El punto fundamental pasa por el artículo 9º, inciso c), a cuyos efectos la aludida asociación expresa textualmente lo siguiente: "En el inciso c) no se dice si el daño es potencial, actual o futuro. ¿Quién demuestra si los daños hereditarios o cancerígenos producidos son ocasionados por la

actividad nuclear desarrollada? Esto podría generar ciertos inconvenientes, ya que el marco regulatorio no prevé los casos citados, algo que originaría que las personas afectadas por daños nucleares que se manifestaran al cabo de un tiempo, no estarían cubiertas por el límite de responsabilidad civil previsto en el inciso c) del artículo 9º".

También resulta importante que me refiera a lo estipulado en el inciso ii) del artículo 9º, donde se expresa que se encuentran comprendidos en el concepto de "daño nuclear" los perjuicios que se causaren a los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica que se encontraren desarrollando tareas referentes a la aplicación de salvaguardias previstas en los acuerdos internacionales suscriptos por nuestro país.

Resulta curioso que se haya excluido de este concepto a los funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear y a los de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Vale destacar que estos funcionarios pueden prestar servicios en las centrales nucleares conforme lo disponen el artículo 2º, inciso f), y el artículo 16, inciso d), de este proyecto. Ello implica que los posibles perjuicios que pudieran sufrir los mismos por causa de sus tareas en el interior de las referidas centrales deberían estar comprendidos dentro del concepto de "daño nuclear".

Finalmente, quiero volver a expresar que este proyecto me genera variadas preocupaciones. Una de ellas es el tema de la valuación de las centrales nucleares, aspecto que ha suscitado importantes controversias respecto del precio por considerárselo reducido. Hago votos para que esto no sea así y que el valor presupuestado sea el más conveniente, de manera tal que no afecte los intereses nacionales.

Como expresé anteriormente, no queda claro si los recursos asignados a la CNEA son los suficientes para no afectar sus tareas de investigación y desarrollo.

También existen serios interrogantes sobre el posible éxito de la venta de las centrales nucleares. No hay mayores antecedentes en el mundo de privatización de dichas centrales que se hallaban en poder de los respectivos gobiernos. Como un aislado antecedente se registra el intento fallido de privatizar el sector nucleopelétrico por parte del Reino Unido. Posteriormente, en un nuevo intento, Gran Bretaña pudo privatizar algunas centrales nucleares, las más rentables, quedando el resto en manos

del Estado británico. Es sólo un caso aislado puesto que, en general, las centrales que son propiedad del Estado siguen en sus manos.

Por su parte, en Canadá la comisión designada para estudiar la privatización de las centrales nucleares evidentemente tampoco llevó a buen puerto este asunto.

Aunque lo dicho no inhabilita futuros intentos, sí obliga a analizar cuidadosamente bajo qué condiciones deberá llevarse a cabo la venta de las centrales nucleares.

Factores tales como el riesgo económico que asume el titular de la licencia de explotación de las centrales nucleoelectricas, la responsabilidad sobre los recursos radioactivos, el posible desmantelamiento de instalaciones nucleares, la repotenciación de Atucha I, la terminación de Atucha II y el riesgo humano, entre otros aspectos, son puntos que obligan a un detallado análisis, tanto por parte del Estado como de los futuros licenciarios.

No estoy convencido de que todos estos aspectos estén adecuadamente considerados en el proyecto y, por lo tanto, resulta inconveniente su aprobación hoy, participando de lo que acaba de expresar el señor senador por Salta respecto de que sería aconsejable volver el proyecto a comisión para que se puedan dilucidar algunas de las muchas dudas que se han explicitado en el curso de este debate.

Cabe, finalmente, una reflexión. Más de cuarenta años han pasado desde que la República Argentina iniciara su ambicioso plan nuclear. Diferentes gobiernos, de muy distinto signo político, a lo largo de estos años, impulsaron el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, soportando en reiteradas oportunidades importantes presiones internacionales, ya que el poder nuclear es de por sí un bien estratégico, y quien domina la técnica de la fisión nuclear tiene acceso al arma más mortífera creada por el hombre.

Pero nuestro país ha sido, y es, una nación de paz. La investigación y el desarrollo nuclear siempre han sido considerados como elementos potencializadores de un mejor nivel de vida, nunca persiguiendo un fin destructivo.

Hoy podemos estar orgullosos de nuestro plan nuclear. Ha sido exitoso más allá de los inconvenientes presupuestarios del presente.

Dominamos el ciclo del combustible nuclear, la producción de agua pesada y otras actividades tanto técnicas como científicas, lo que nos ha colocado a la vanguardia en Sudamérica.

Este intento privatizador, escaso en el mundo, me lleva a pensar si no estamos arriesgando el esfuerzo de muchos argentinos, sean científicos, técnicos o simples ciudadanos que con sus impuestos contribuyeron a financiar esta actividad.

Temo que esto sea sólo una cuestión económica para obtener recursos monetarios que ya están considerados en el presupuesto nacional para el año en curso.

Resultaría inconcebible vender las centrales nucleares con el solo objeto de cumplir estas metas presupuestarias. Tal como están las cosas, mi voto, por lo tanto, será negativo.

Quiero dejar en claro que mi pronunciamiento no expresa una oposición terminante a la idea de privatizar las centrales atómicas con el objeto de obtener inversiones para finalizar Atucha II y repotenciar Atucha I, tareas que no pueden seguir siendo postergadas. Mi voto expresa, en cambio, todas las objeciones técnicas y políticas a las que me he referido en el curso de esta exposición.

Estos objetivos seguramente impulsaron la aprobación dada en la Honorable Cámara de Diputados por diversos representantes provinciales. No obstante todo ello, las dudas que he consignado precedentemente justifican mi voto negativo en general al proyecto que consideramos.

Sr. Solana. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Cafiero). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: en la reunión de presidentes de bloque de ayer y en el plan de labor aprobado para esta sesión, quedó establecido que a las 15 y 30 se iba a producir la votación del asunto en consideración. Como ha transcurrido ese término, solicito al señor presidente tenga la amabilidad de informar si procederá a llamar para votar, sin más trámite, o si se agotará la lista de oradores, en cuyo caso, pido me informe cuántos legisladores están inscriptos.

Sr. Presidente (Cafiero). — Señor senador: creo que más allá del compromiso asumido en la reunión de presidentes de bloque, existe una cuestión formal imposible de eludir. No se podrá someter a votación este proyecto de ley si antes no hacen uso de la palabra todos los señores senadores que están inscriptos en la lista, que son los siguientes —los enuncio para el conocimiento del señor senador por el Neuquén y del resto de la Cámara—: Maglietti, el senador que está en ejercicio de la Presidencia, Meneghini,

Sala, Storani, Fernández de Kirchner, de la Sota y Alasino.

Es decir que falta que hagan uso de la palabra ocho oradores más. Evidentemente, esto llevará a la sesión a una duración distinta de la prevista.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

Sr. Presidente. — El señor senador por el Neuquén había planteado una cuestión...

Sr. Solana. — Señor presidente: simplemente, había pedido una aclaración. El señor senador Cafiero, que estaba en ejercicio de la Presidencia, me informó que se va a agotar la lista de oradores antes de votar, lo que importa no cumplir con lo establecido en la reunión de presidentes de bloque y con el plan de labor aprobado.

Sr. Presidente. — Efectivamente, señor senador. Ocurre que no puedo quitar el derecho al uso de la palabra —como tampoco lo hiciera el señor senador Cafiero— a ninguno de los oradores. Sí podemos solicitarles que sus exposiciones sean lo más breve que sea posible, de manera de votar cuanto antes.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: llegué hace unos minutos de mi provincia. No estoy en la lista de oradores que se leyerá anteriormente. No sé si voy a hablar, pero quisiera quedar anotado.

Sr. Presidente. — Por supuesto, señor senador. Con mucho gusto voy a anotar lo.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: creo que estamos ante hechos gravísimos, perfectamente aclarados y denunciados por los señores senadores Avelín, Berhongaray, Fernández Meijide, Ulloa, Romero Feris y otros que me han precedido en el uso de la palabra.

Este proyecto de privatización atenta contra los intereses del país y contra la historia que desde 1946 el pueblo argentino ha venido acompañando en un tremendo esfuerzo.

La Argentina ha logrado una posición destacada en el mundo gracias a ese esfuerzo en materia nuclear. Voy a hacer una pequeña reseña histórica para ubicarnos en el problema.

Contamos con el Instituto Balseiro, de prestigio mundial. La Comisión Nacional de Energía Atómica, creada en 1950, hizo posible todos los

logros que hoy tenemos en materia nuclear. En 1958 se creó el Centro Atómico Constituyentes, donde funcionó el primer reactor construido en el país. La CNEA encaró la construcción de centrales nucleares. En 1974 inauguró Atucha I, primera central de uranio natural y agua pesada con una potencia de 335 megavatios; en 1977 esta cifra se amplió a 375 megavatios. En 1984 inauguró la Central Embalse Río Tercero, con una potencia de 648 megavatios.

La CNEA fue creada por el decreto 10.936. En 1956 se dictó el decreto ley 22.498, ratificado por ley 14.467, en virtud del cual se da una organización a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En 1980 se sancionó la ley 22.179, por la que se declara de interés nacional la construcción de la Central Atucha II.

Para terminar con esta pequeña reseña histórica, debo decir que hoy el país cuenta con dos centrales en funcionamiento —Atucha I y Embalse—, totalmente amortizadas, no deficitarias, con un ingreso de aproximadamente 300 millones de dólares anuales y un beneficio calculado entre 60 a 70 millones de dólares anuales.

En cuanto a la central Atucha II, según lo manifestado por el miembro informante de la bancada oficialista, el Estado lleva invertido más de 2.900 millones de dólares.

Por decreto 1.574, Alemania otorgó a la CNEA préstamos para la adquisición de materiales para Atucha II: dos créditos de 850 millones de marcos y dos de 184 millones de marcos, que hacen un total de 1.490 millones de dólares.

Significaba el 85 por ciento de toda la compra en Alemania para materiales y equipos de Atucha II. No se contemplan allí las inversiones argentinas ya que se construyó el ciento por ciento de las obras civiles de la empresa Atucha II.

Por decreto 252/90 se aprueban tres préstamos más de 50, 50 y 100 millones de marcos, por un importe equivalente a 130 millones de dólares.

La Argentina se obligó a aportar otros 200 millones de dólares para pagar la deuda anterior, contraída por decreto 1.574/80.

Por decreto 1.697/94 se aprueban dos contratos de préstamos por 240 millones de marcos —lo que hace un importe total de 320 millones de dólares— para aplazar el comienzo del reembolso de los créditos anteriores.

Esa, señor presidente, es la historia resumida de lo que ha sucedido en el país.

Luego debemos referirnos al proceso que estamos viviendo actualmente; es decir, a que el país, por la construcción total de Atucha II, adeuda a la República de Alemania 1.940 millones de dólares.

Señor presidente: en el mundo se han dado muchos ejemplos de lo que sucede con las centrales atómicas y con las políticas nucleares de los distintos países. Lo cierto es que el mundo sigue avanzando en este sentido, y tenemos que en distintos países se utiliza la energía atómica porque consideran que su producción es necesaria para los intereses nacionales, con fines tecnológicos y, de desarrollo industrial.

Podemos aportar los siguientes datos: Bélgica utiliza energía nuclear en un 60 por ciento, Suecia en un 52 por ciento, Suiza en un 40 por ciento, España en un 36 por ciento, Alemania en un 27 por ciento, Japón en un 24 por ciento, Gran Bretaña en un 22 por ciento, EE.UU. en un 20 por ciento. Nosotros, señor presidente, a través de las dos usinas que están funcionando —Atucha I y Embalse—, en este momento producimos alrededor del 15 por ciento de toda la energía que consume el país.

Hay países como Francia, bien se dijo, donde la explotación corre exclusivamente por cuenta del Estado, y otros donde existen inversiones privadas. Pero en ningún país del mundo, señor presidente, la privatización se ha llevado a cabo en la forma que se quiere realizar aquí.

En general, en todos los países del mundo los capitales privados han construido las usinas nucleares, pero la explotación y los intereses relativos a la seguridad son resguardados a través de normas expresas dictadas por el Estado.

Este es el único país donde se pretende entregar centrales construidas, semiterminadas, al capital privado por precios irrisorios, como también es el único país que entregó sus mejores rutas y caminos en perfecto estado, construidos con dinero del Estado, de la Nación —es decir, con dinero del pueblo— para que los exploten los capitales privados mediante peaje. Es el único ejemplo de este tipo de negocios que tanto daño le han ocasionado al país.

Y bien, señor presidente, ¿qué va a significar la privatización? Ya lo dijo claramente el señor senador Avelín: significará el abandono de la política nuclear, la finalización de la investigación de la formación de científicos y técnicos y nuevamente tendremos de beneficiarios a las corporaciones, que ya son dueñas de un sector importante del país y que ahora van a sumar las centrales nucleares.

Estos monopolios pretenden quedarse, con la anuencia del actual gobierno y de los funcionarios responsables, con el 15 por ciento de la energía que producen las dos centrales eléctricas. Pero allí no termina el plan de estos monopolios internacionales, sino que continúa a través de los planes avalados por este gobierno, por los cuales también se privatizará la energía de Yacyretá, donde tendremos una producción aproximada del 40 por ciento del consumo, y con eso se va a cerrar totalmente el ciclo de la producción de energía. Entonces, las corporaciones manejarán a su gusto el precio de la energía que consume el pueblo argentino, como hoy manejan a su gusto el precio de las tarifas telefónicas, con la anuencia del señor presidente de la República, que lo avala, e incluso ha dictado un decreto inconstitucional para aumentarlas en forma indebida.

También tenemos el caso de YPF, cuyo patrimonio se dilapidó totalmente, siendo la empresa más importante del país —donde hoy el Estado tiene solamente el 20 por ciento—, a la que transformó en una empresa extranjera que, en consecuencia, podemos sumar a las corporaciones petroleras del mundo, y no a los intereses del país ni a la defensa de los intereses nacionales.

Este panorama tétrico organizado por este gobierno para beneficiar a los monopolios internacionales hará que solamente en este rubro de centrales nucleares el país pierda más de 9 mil millones, invertidos desde que comenzó la política energética en materia nuclear.

Es indudable que a este gobierno no le interesan en absoluto los miles de millones que pierda el Estado ni el esfuerzo que han hecho generaciones en el país durante cincuenta años.

Aquí me causó gracia cuando el miembro informante de la bancada mayoritaria invocó a Perón. Ello es así, porque soy un crítico del gobierno de Perón y he considerado a ese gobierno como autoritario y no democrático. Pero también debo reconocer que ha tenido sus aciertos. En ese sentido, debo señalar que en materia de energía nuclear ha tenido un gran acierto y que se comenzó todo el plan en esta materia, como todos saben, durante el gobierno de ese señor. Y aquí se lo invoca con un caradurismo tremendo —diría yo—, porque casualmente se está por destruir todo lo que se construyó durante el gobierno justicialista, y se lo hará mediante la privatización, cuestionada desde todo punto de vista. No se pueden traer palabras dichas por el presidente de aquel entonces, porque tengo un libro con todo lo manifestado por él, donde rati-

fica el plan de energía nuclear, la defensa de los intereses nacionales, de la energía, etcétera. Hoy este gobierno está haciendo todo lo contrario; les está vendiendo a los intereses internacionales; está entregando las centrales nucleares, como entregó YPF, como va a entregar Yacüretá, Correos, todo el patrimonio del país, a través de una política desaprensiva que defiende solamente los intereses de los grandes monopolios. Como consecuencia, los argentinos tenemos que soportar las tarifas más caras en materia de petróleo, de teléfonos, y en todas las materias que vendrán en el futuro, como el Correo, próximo a privatizarse por decreto, también violando la Constitución, porque casi todas las privatizaciones se hicieron al margen de la ley, de la Constitución, mediante un procedimiento autoritario, lo que demuestra que no estamos viviendo dentro del marco de la Constitución ni del respeto por las instituciones del país.

Si yo tuviera que mostrarle al señor diputado miembro informante las propuestas energéticas justicialistas...

Sr. Presidente. — En primer lugar, el señor miembro informante es senador, y no diputado, como dijo usted. Y, en segundo término, le solicito que se dirija a la Presidencia.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: hay una página completa dedicada a los fundamentos políticos y doctrinarios relacionados con la energía nuclear. Son hermosos.

Quiero felicitar a los justicialistas de aquel entonces —los que han escrito todo esto—, que decían que ésas eran las bases del justicialismo. Coincidió enteramente con ellas.

Desgraciadamente, quiero saber ahora en presencia de qué clase de justicialistas estamos, que niegan y reniegan de todo lo que han sostenido. Reniegan de la historia y reniegan de las enseñanzas del propio presidente Perón.

No pienso renegar nunca de lo que me enseñaron Yrigoyen, Balbín o Illia, porque considero que son legados históricos que debemos respetar, ya que fueron hombres que realmente no estuvieron equivocados. Creo que de igual manera tendría que actuar el justicialismo en este momento. Desgraciadamente, está ocurriendo lo contrario.

Aquí estamos en la noche triste de un plan realmente gravísimo, que va a llevar al país a una de sus peores situaciones en esta área.

Y la historia comienza en 1994 con el decreto 1.540, modificatorio de la ley 22.498, lo cual es sumamente grave porque se viola la Constitución. Yo he estudiado abogacía al igual que

usted, señor presidente, y en la facultad nos enseñaron que una ley no se puede modificar por decreto, porque sería una barbaridad o una monstruosidad jurídica. Sin embargo, este Poder Ejecutivo estila modificar leyes mediante decreto, violando así en forma arbitraria la Constitución.

Como consecuencia de ello, estamos asistiendo a este hecho que implica el desmantelamiento total de la CNEA. Y se lo hizo mediante un decreto, lo cual es antidemocrático y creó las condiciones para su privatización.

Se inició el camino en 1994 y abarcó además otra resolución, la 464/94, en virtud de la cual se aumentó de 34 a 39 milésimos de dólar el precio del kilovatio por seis años, que es precisamente lo que va a tardar la terminación de Atucha II.

Se otorgó un subsidio de cinco milésimos de dólar por kilovatio-hora. Lógicamente que todo esto estaba planificado. Se organiza la privatización y se da un subsidio de cinco milésimos. En consecuencia, señor presidente, los que van a adquirir las usinas nucleares de entrada tendrán un beneficio de 70 millones anuales, producto de la renta de las dos centrales en funcionamiento, más 40 millones del subsidio, lo que equivale a que en dos años y medio tendrán un ingreso de 260 millones para pagar esta inaudita privatización. Y en seis años tendrán los millones necesarios —por lo que los compradores no pondrán nada— para terminar de construir Atucha II. ¡Qué regalo, señor presidente!

Si yo tuviera una casa construida en un noventa por ciento y además poseyera otras dos, y supongamos que las tres me costaron 9 mil millones de dólares y las quisiera regalar por 260, y encima les doy la renta necesaria para que las paguen en poquito tiempo, realmente, señor presidente esto sería un regalo.

Sr. Branda. — ¿Con la suegra?

Sr. Maglietti. — Sería un regalo, tal como lo dijo el señor senador Avelín.

¿Qué es lo que considera tan jocoso el señor senador Branda? Y lo lamento, señor presidente, porque a mí no me causa ninguna gracia enajenar de esta manera el patrimonio del país y el esfuerzo de una generación de argentinos. Creo que el señor senador tendría que tomar con mayor seriedad y responsabilidad esta cuestión porque se trata de un tema demasiado serio y por el que todos los senadores, de todas las bancadas, debemos sentirnos gravemente afectados, porque esto concierne a los treinta y tres millones de argentinos y a todos aquellos que creyeron que nuestro país desarrollaría su energía

nuclear para su propio bien y para el beneficio de los argentinos. Y parece que hay senadores a quienes esto les causa gracia y se ríen en sus bancas.

Lamento tener que señalar esto, señor presidente, pero me veo en la necesidad de hacerlo. Debemos tratar este tema con seriedad y responsabilidad. No estamos vendiendo aquí una docena de bolitas; estamos vendiendo —o regalando— tres centrales nucleares, lo cual es gravísimo, señor presidente.

Sr. Branda. — Cambie el ejemplo y no nos vamos a reír.

Sr. Presidente. — Les quiero aclarar a los señores senadores que no voy a conceder extensiones del tiempo asignado para hacer uso de la palabra.

Le solicita una interrupción el señor senador por Salta.

Sr. Maglietti. — Se la concedo, pero le pido que sea sumamente breve.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: voy a ser muy breve y no voy a contestar ninguno de los calificativos expresados con respecto a los señores senadores.

El señor senador se ha referido a la venta, a la entrega. Y aquí no se está vendiendo nada. El proyecto sólo declara a las centrales sujetas a privatización y establece el marco regulatorio por vía legal, que es algo que permanentemente el Congreso ha reivindicado como facultad propia.

El sistema de privatización será la concesión; no se vende ni se entrega; se otorga una concesión. Y en cuanto al precio que se ha mencionado, no sé de dónde ha sacado esa información, porque aún no están aprobados el proyecto ni los pliegos. Por lo tanto, son todas aseveraciones y afirmaciones que carecen de un sustento legal.

Sr. Branda. — Que dan risa.

Sr. San Millán. — No sé si dan risa, pero evidentemente no tienen un sustento real.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: el hecho de sancionar una ley por mayoría no significa que esa norma no sea violatoria de la Constitución. El proyecto que aquí se va a aprobar es inconstitucional porque viola principios establecidos por la Constitución Nacional.

Y voy a continuar contestándole al señor miembro informante de la mayoría con sus propias palabras. Sostuvo el señor miembro infor-

mante que en el presupuesto nacional no se destinó un solo centavo para concluir Atucha II. Lógicamente, señor presidente, porque el plan estaba totalmente preparado. No se destinaron los 650 millones porque la intención del gobierno era privatizar la obra y, en consecuencia, no existían los recursos necesarios. No se trata de una suma astronómica; se dilapidan muchos millones en otros rubros, como por ejemplo en gastos reservados, en ese fondo negro de subsidios sociales por tres mil quinientos millones de dólares, o los setecientos millones de dólares destinados al Fondo del Conurbano.

Es decir, señor presidente, que existe una infinidad de puntos en los cuales el presupuesto podría haber sido modificado, permitiendo de esa manera concluir la central de Atucha II.

Però lo grave no es sólo eso, señor presidente...

Sr. Presidente. — Le piden una interrupción, señor senador.

Sr. Maglietti. — Si me concede una prórroga en el término para hacer uso de la palabra, la concedo con mucho gusto, señor presidente.

Sr. Presidente. — No, de ninguna manera.

Sr. Maglietti. — Entonces, no la concedo, señor presidente.

El problema es que el Estado no destinó esos 650 millones de pesos con la intención de privatizar. Porque solamente los intereses de la deuda externa de una semana importan esa suma. De manera tal que el gobierno oficialista, el gobierno justicialista, no tuvo voluntad ni interés en terminar la central; su propósito era privatizarla por el procedimiento que ahora estamos considerando en esta Cámara.

No es exacto que el Estado no cuente con los recursos para concluir la obra. Al Estado no le interesa ni quiere terminar la construcción de esa central; la quiere privatizar porque ya ha hecho sus acuerdos con las corporaciones eléctricas, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional.

Dijo el propio senador que es patético no terminar la obra. ¡Claro que es patético!

Dice el señor senador que el Estado invirtió 2.900 millones de dólares y otros mil millones en repuestos adquiridos que se están deteriorando. Entonces, si se están deteriorando, ello demuestra una tremenda irresponsabilidad, porque esas piezas se pueden conservar durante muchísimos años, y quien lo hace está cometiendo un gravísimo delito, puesto que está atentando contra los intereses del Estado.

Dice también el señor senador que en cinco años, trabajando cinco mil personas, se terminaría la obra. Eso es exacto. Si la obra se concluye en cinco o seis años, las empresas que adquieran la usina podrán costear su terminación con la renta de las dos que quedan funcionando, que son 70 millones de pesos anuales, más el subsidio de cinco milésimos de centavo por kilowatt hora que asciende a 40 millones de pesos anuales.

Señor presidente: si se suman las cifras, se podrá apreciar que con la renta de seis años se paga totalmente la terminación de Atucha II sin poner un solo centavo. Creo que con estas palabras le he respondido claramente al señor senador, de manera que continuaré con mi exposición.

Con esta privatización en seis años el Estado pierde, en concepto de renta y subsidios, la suma de 660 millones de pesos. Además, pierde 1.940 millones de pesos, porque se hace cargo de los créditos tomados a Alemania.

A su vez, a estas cifras hay que sumarles el costo del desarme de las usinas cuando finalice su vida útil, porque no lo harán las empresas privadas que adquieren la planta sino que lo llevará a cabo el Estado, y tal desarme está en el orden de los 350 millones de pesos cada una. Es decir que la pérdida sería de 1.050 millones de pesos.

Por lo tanto, si a todo esto le sumamos las inversiones que realizó el Estado, llegamos a una pérdida que supera los 10 mil millones de dólares, que se estarían cambiando por la irrisoria suma de 260 millones de dólares.

Señor presidente: honestamente dan ganas de llorar. Pero lo más grave es que quien tasó las usinas fue la propia Secretaría de Energía, que de una u otra manera ha demostrado estar interesada en el negocio, y no el Tribunal de Tasación de la Nación, que es el máximo órgano técnico que debería haber participado, porque es quien valúa los bienes del Estado.

Ahora bien, ¿por qué no se le dio participación al Tribunal de Tasación de la Nación? ¿Por qué motivo se hacen tasaciones irrisorias y no se efectúa la valuación a través de este serio organismo, que podría haber efectuado una tasación justa, lógica y razonable, y no esta que realizó la Secretaría de Energía, que nadie cree que sea la que corresponda, porque ningún señor senador la consintió?

Evidentemente, enajenar estas tres usinas por 263 millones —o por 200 millones como dijo el senador Avelín, que es lo que figura en el presupuesto—, sabiendo que se trata de una tasación

inferior a la real y que implica una tremenda disminución del precio, crea la presunción, que está instalada en todo el país, de que estamos en presencia de un nuevo y gravísimo caso de corrupción.

En este sentido, en un editorial del diario "Clarín", del 12 de enero de 1997, se dice que la corrupción argentina está en la mira internacional. Esta nota dice en su parte pertinente...

Sr. Presidente. — Señor senador: le quedan tres minutos. Se lo digo por si después quiere insertar cosas que tiene escritas.

Sr. Maglietti. — Leeré sólo los títulos. En su editorial el "Clarín" se refiere a la corrupción, a la delincuencia mundial organizada y a la corrupción en el Estado. Y en este sentido dice que la corrupción figura entre los principales delitos de carácter transnacional y organizado de la Argentina y será motivo de estudio en la Sexta Sesión de la Comisión de Prevención del Delito.

Por otro lado, en el "Clarín" del 12 de marzo hay una nota que habla acerca de una imprevista advertencia de la Iglesia sobre el poder. Y en este sentido dice que la Iglesia advirtió ayer sobre el riesgo de que el país caiga en la oligocracia, entendida como el peligro de que unos pocos se adueñen del gobierno movidos por ideas políticas o económicas y se desvirtúe la esencia del sistema democrático. Tengo otros artículos periodísticos en mi poder que no voy a leer en este momento.

Como me quedan sólo tres minutos para terminar mi exposición, voy a hacer una enunciaci3n general de todas las disposiciones del C3digo Penal que, probablemente, se estarían violando.

En primer lugar, el artículo 248 sobre abuso de autoridad y violaci3n de los deberes de los funcionarios p3blicos al dictarse resoluciones u3rdenes contrarias a la Constituci3n.

Tambi3n se estaría violando el artículo 20 bis de dicho C3digo, que pena con inhabilitaci3n de seis meses a diez a3os, cuando haya incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo p3blico.

El artículo 265, sobre negociaciones incompatibles con la funci3n p3blica, se refiere a todo funcionario p3blico que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operaci3n en que intervenga en raz3n de su cargo. En este caso est3n encuadrados todos los miembros de la Secretarí3 de Energí3, adem3s de otros funcionarios.

El artículo 227, que deriva del 29 de la Constitución Nacional, también estaría siendo violado porque se están otorgando facultades extraordinarias, sumisión o supremacía prohibida por la Constitución y gravemente penada.

Además, vender o intentar vender a precio vil bienes del Estado es entregar en provecho de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Esto está penado por el artículo 261 del Código Penal, que reprime este delito con prisión de dos a diez años. Y en este caso todos los señores senadores que han hablado en este recinto han asentido que acá se está queriendo vender a precio vil y en provecho de un tercero —es decir, de las corporaciones— trabajos y servicios pagados por la administración pública. Es decir que, evidentemente, es clara la presunción de que se ha violado ese artículo del Código Penal.

Además, con respecto a la delegación de facultades del Poder Ejecutivo...

Sr. Presidente. — Señor senador: ha concluido el tiempo de que disponía para realizar su discurso.

Sr. Maglietti. — Voy a terminar mi exposición tratando de redondear los conceptos vertidos.

Desgraciadamente, estamos en presencia de la presunta —utilizo este término porque esto se debe investigar— violación...

Sr. Branda. — Hay que hacer la denuncia.

Sr. Maglietti. — ...de una serie de normas del Código Penal. Ya llegará el gobierno democrático, con un Poder Judicial independiente, que va a juzgar a todos los responsables de estos hechos gravísimos que implican haber dispuesto del patrimonio nacional en forma desaprensiva, que han perjudicado a una generación de argentinos, que van a destruir el esfuerzo y van a dilapidar miles de millones invertidos por el país. Esto no se lo perdonará nadie y tendrá que hacerse justicia. Espero, como argentino, y no porque tenga espíritu rencoroso ni mucho menos, que lleguemos pronto a ese momento para que esa justicia independiente...

Sr. Branda. — Como en la época del proceso.

Sr. Maglietti. — ...pueda colocar en su lugar a los responsables. Y que no pase como hoy, que existen más de cien funcionarios procesados, ninguno condenado, todos en libertad, pese a los hechos gravísimos de corrupción que hoy vive el país.

Y éste es un hecho tan grave que se lo quiere disfrazar mediante una ley que es inconstitucional porque, como dije, viola la Constitución, atenta contra los intereses del país y enajena por

precio vil e irrisorio todo el patrimonio nuclear de la Nación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Sala. — Señor presidente: en primer lugar debo decir que estoy tratando de hacer un gran esfuerzo para no caer en la tentación de responder a un conjunto de inexactitudes que han sido expresadas recientemente en este recinto.

Por una cuestión de respeto a los demás oradores, simplemente quiero hacer un reconocimiento a la calidad de este proceso de transformación que va a comenzar a partir de la sanción de esta ley, perfectible en todos sus términos y alcances, por parte de quienes a partir de ahora quieran seguir incorporando proyectos que contribuyan a su mejoramiento y enriquecimiento.

Es de destacar que a través de esta iniciativa se establece la base para un proceso de progreso que, de alguna forma, va a ser indiscutido, como ha ocurrido con la mayoría de los servicios públicos en nuestro país. Para ello basta con ver que no cae la presión cuando aumenta el consumo de gas en el invierno, y que no tenemos las limitaciones en el consumo eléctrico que supimos tener por el mantenimiento de un sistema que ya no tenía capacidad de respuesta para los usuarios, para la gente de progreso y para la gente común que habita en cada una de nuestras ciudades.

En esta intervención pretendo destacar simplemente el grado de progreso que ha habido en la federalización de las decisiones, situación cada vez más aceptada por parte de las comunidades de cada una de las provincias argentinas.

Agradezco la voluntad puesta de manifiesto por gente que, tras muchos años de estar trabajando en este tema con un conocimiento profundo, serio y destacado, ha aceptado de los ciudadanos comunes, sencillos e ignorantes en esta materia, nuestro derecho a tomar decisiones sobre el modo de vida que elegimos para nuestras comunidades y para nuestros hijos.

Por lo expuesto, en nombre de la comunidad de la provincia del Chubut y de la Patagonia, que tanto hincapié hizo en el tema de la actividad nuclear, destaco el avance que ha habido en este proyecto en los artículos 11, 12 y 13 respecto, fundamentalmente, del emplazamiento de instalaciones de esta naturaleza en nuestro país.

Finalmente, y para dar seguridad a una serie de temores que han sido planteados por algunos oradores, quiero recordar que la cuestión contenida en el artículo 29, vinculada con el proceso

de privatización que tanto preocupa y alarma a algunos distinguidos señores senadores, vuelve a este Congreso para su tratamiento bajo el amparo de la ley 23.696, que regula todo el proceso de privatización del Estado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: dada la hora y el compromiso asumido en la reunión de labor parlamentaria voy a tratar de ser breve. Desde ya señalo que me parece que ese compromiso nos deja mal parados a todos los señores senadores porque —coincido con el señor senador Maglietti— no estamos ante una privatización común, sino ante una especie de símbolo.

Estamos hablando de privatizar la energía nuclear. Si bien es cierto que ella se encuentra en un estado de paralización por los efectos ecológicos que tiene, también es cierto que sirve para muchos fines pacíficos de la humanidad, que la Argentina voluntariamente ha venido abandonando en estos años de gobierno del Partido Justicialista, accediendo a una presión intolerable, concretamente de los Estados Unidos, que no quiere que esta tecnología sensible se encuentre en manos de nuestro país.

Por eso creo que las limitaciones de tiempo las vamos a poner en práctica en orden a que aquí hay una serie de pensamiento y de argumentos expuestos que son plenamente coincidentes con mi criterio.

A efectos de no ser reiterativo voy a expresar que estoy plenamente de acuerdo con ellos y agregar uno o dos puntos de vista que no puedo omitir.

Creo que los inconvenientes para llevar adelante esta privatización son muchos y diversos. Algunos se reducen a una situación técnica que creo necesario puntualizar. La central Atucha I está cercana al fin de su vida útil y requeriría importantes y costosos trabajos para prolongar diez o quince años más su utilidad. También se necesitan cuantiosas inversiones para reducir el actual nivel de radiactividad interna que pone en grave peligro no solamente a sus trabajadores, sino también a la población cercana.

Las reparaciones a las cuales hacemos referencia no solamente implican costos millonarios sino también largos períodos de inactividad que nos hacen pensar en el lucro cesante que va a tener el inversor.

La resolución 283/94 de la Secretaría de Energía ha estimado el costo de estas reparaciones en alrededor de cien millones en siete meses de trabajo. De estas resoluciones no

queda claro quiénes son los que van a tener que abonar estos importes.

La central de Embalse también requiere una importante reparación debido a los efectos de un error de diseño detectado en las centrales canadienses que curiosamente constituyen uno de los principales oferentes o postores en las próximas concesiones. Aún más, hay solamente una empresa de origen canadiense que tiene la tecnología adecuada para esa reparación.

La Secretaría de Energía previó la necesidad de detener esta central para efectuar dichas reparaciones durante un período de seis meses y con un costo estimado de cuarenta y cinco millones.

La central de Atucha II, que se encuentra en construcción, tiene un proceso constructivo mal manejado, similar al de Yacyretá.

Los costos han crecido por encima de lo previsto y se ha llegado a la situación de una obra en la que la parte civil está prácticamente terminada. Pero para la puesta en marcha se necesitan entre 700 y mil millones para completarla. Sin embargo la tasación que la Secretaría de Energía ha efectuado para la venta del conjunto de las tres centrales, sólo alcanza a 261 millones por el 99 por ciento de las acciones. Esto crea un grave interrogante.

Por otro lado, en el proyecto no se deja establecido quién se hará cargo del costo del decomiso, una vez que las centrales nucleares cumplan su ciclo de vida útil.

El artículo 9º dice al final que todo explotador de una central de generación nucleoelectrica deberá aportar a un fondo para retiro de servicio de centrales nucleares. La forma de constitución, administración y contralor de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo nacional. La redacción es muy vaga, y a esto se suma el corto período de vida remanente de la central Atucha I, de aproximadamente diez años. El costo que se estima en una operación de este tipo, acerca del cual prácticamente no hay antecedentes, es de aproximadamente 350 millones de dólares por cada central. A esto se suman las amplias atribuciones que se otorgan al Poder Ejecutivo, lo que hace suponer que el grueso de este costo de decomiso tendrá que afrontarlo el Estado nacional.

A estas consideraciones, que son de orden técnico, sumamos una crítica porque no sabemos cómo va a continuar el proceso de desarrollo científico que, es cierto, a partir del año 50 en que gobernaba el general Perón en este país, dio a la Nación Argentina un ímpetu de privilegio dentro del contexto internacional que hoy

—creo— vamos a perder porque va a ser muy difícil poder continuar la tarea de los científicos y de los investigadores dentro de estas centrales privatizadas.

Voy a respetar los acuerdos pero dejo bien en claro mi oposición total y absoluta a este proceso de privatización, de concesión. En una palabra, me opongo a que las centrales nucleares, y lo que implican en cuanto al desarrollo investigativo, salgan de la esfera del Estado público y pasen a la esfera privada.

Solicito la inserción en el Diario de Sesiones de algunas otras consideraciones con relación a este proyecto, que oportunamente haré llegar a Secretaría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Storani. — Señor presidente: no sé si comenzar mi discurso manifestando mi consternación o mi indignación, porque es una mezcla de ambas sensaciones emocionales la que me tiene sujeto a esta banca.

He tenido la suerte histórica de haber sido actor por más de cincuenta años de la política argentina. Como la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene cuarenta y siete años de existencia, a partir de que el general Perón dispuso su creación por un decreto en 1950, he seguido muy de cerca su evolución. Este organismo ha manejado en forma fructífera e inteligente y con gran idoneidad, contando con una solvencia internacional indiscutible y reconocida en todo el mundo, el negocio de la generación eléctrica, pero fundamentalmente la investigación y el desarrollo de la actividad nuclear en la Argentina, que le dio tanto brillo. Tanto es así que es el único país de América del Sur que logró fabricar reactores nucleares a través de sus propias investigaciones y ponerlos al servicio de otros países hermanos de América, como fue el caso del Perú. En efecto, en ese país fue emplazado un reactor nuclear experimental argentino por la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina.

Fue una gestión muy importante. Recuerdo —viene al caso que lo refiera— que cuando yo era secretario de Energía y Combustibles del gobierno del presidente Arturo Illia, el general Charles de Gaulle, entonces presidente de la República de Francia, visitó la Argentina en 1964. En esa ocasión fui convocado por el presidente Illia para hablar con el general De Gaulle y su ministro de Industria sobre la posibilidad de que Francia financiara e instalara en la Repú-

blica Argentina la primera planta atómica generadora de energía eléctrica. El presidente francés le ordenó a su ministro que la República Argentina contase con un reactor generador de energía eléctrica.

Pero, ¿qué ocurrió? Desgraciadamente, las interrupciones fácticas en la Argentina dieron por tierra con el gobierno de Arturo Illia en 1966. Entonces, el jefe de las fuerzas armadas, dueño del gobierno de facto en aquel momento, Onganía, cambió esos planes y pactó con Alemania Federal la construcción de un prototipo de reactor nuclear generador de energía eléctrica. Es la actual planta de Atucha I.

Es decir, pasamos abruptamente de la posibilidad de utilizar uranio natural para generar energía eléctrica a la utilización obligada de uranio enriquecido. ¿Por qué en el gobierno de Illia se había optado por esa posibilidad? Una experiencia francesa dolorosa era la que aconsejaba que las plantas generadoras de energía eléctrica de origen nuclear utilizaran uranio natural. De esta manera se independizaba del yugo monopolístico de los Estados Unidos, que eran los únicos productores de uranio enriquecido en el mundo. Tanto es así que la flota de submarinos nucleares de Francia permaneció inactiva durante seis meses en el puerto de Toulouse porque los Estados Unidos no le proveían combustible para su funcionamiento.

Nosotros en su momento elegimos el uranio natural. Nuestro país cuenta con yacimientos de ese mineral —el más importante está en el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza— para que nuestras plantas nucleares utilizaran uranio natural y no dependiésemos de la provisión de uranio enriquecido.

Posteriormente, la inteligencia, la diligencia y la eficiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica hizo que en la República Argentina se llegase a la producción de uranio enriquecido, así como también a la de agua pesada en la planta de Arroyito, en el sur argentino.

Esta historia viene al caso porque fueron muchos los esfuerzos realizados y los gobiernos que se sucedieron. El primer partido gobernante que hizo esfuerzos fue el del justicialismo —repite—, cuando Perón en 1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Recuerdo haber conocido muy bien a los directores de la Comisión en distintos períodos. Por ejemplo, a quien ejerció ese cargo en el período del presidente Illia e incluso desde un poco tiempo antes, el almirante Quihillalt —quiero destacar que la Marina argentina pro-

veyó cerebros importantes para el manejo de la energía nuclear—. También puedo mencionar al capitán de navío Iraola Goytía, que fue designado por el presidente Perón al frente de la Comisión. Y, por último, a Castro Madero, que ocupó dicho cargo durante el último gobierno de facto, y que de cualquier manera era una autoridad mundial en la materia. Lo mismo ocurre con el almirante Quihillalt, que desde la época del gobierno de Arturo Illia, es reconocido como una de las máximas autoridades en la cuestión nuclear. Así lo han puesto de relieve reiteradamente en Viena en la Comisión de Energía Nuclear.

Hay un hecho muy importante que caracteriza la trayectoria de la República Argentina. En América del Sur solamente Brasil siguió un derrotero aproximado al de nuestro país en lo que se refiere a energía nuclear. Digo aproximado porque no alcanzó el grado de desarrollo que tenía la Comisión Nacional de Energía Atómica y todas las entidades que de ella se derivaron a partir del esfuerzo de cincuenta años de trabajo, fehacientemente comprobado en la República Argentina y demostrado al mundo. Digo esto porque cuando vino la hora de las salvaguardas sobre energía nuclear que debían imponer los Estados Unidos de América al resto de los países que estaban vinculados con el tema de la energía nuclear, la Argentina se resistió, no sometándose al Tratado Internacional de Energía Nuclear, al igual que lo hizo Brasil durante mucho tiempo hasta que por último sucumbió. Y finalmente, la Argentina también ha firmado dicho Tratado de no Proliferación Nuclear.

Quiero señalar que en la consideración del dictamen de mayoría, por el que se propone un texto de ley que avanza en la privatización de las centrales nucleares Atucha I, Embalse de Río Tercero y Atucha II, nadie ha mencionado un hecho importante que yo voy a dar a conocer, que surge de una respuesta que me dio el señor jefe de Gabinete del gobierno del presidente Menem, ingeniero Rodríguez, después de las reuniones que hemos tenido sucesivamente con motivo del rendimiento de sus informes bimestrales al Senado, respuesta que satisfizo una curiosidad mía en el sentido de si la central nuclear de Embalse Río Tercero, sita en el departamento Calamuchita de mi provincia, junto con la central hidroeléctrica de Río Grande, ubicada sobre el río del mismo nombre en Córdoba, iban a ser privatizadas simultánea y conjuntamente. La respuesta fue afirmativa. ¿Por qué? Porque según lo dicho por el jefe de Gabinete de Ministros las dos centrales se interrelacionan desde el

punto de la producción de energía eléctrica y se asisten mutuamente. Es decir que cuando la central hidroeléctrica por bombeo de Río Grande se queda sin suficiente energía eléctrica, la recibe de la central nuclear de Embalse, que está a cincuenta kilómetros de distancia.

Es un argumento atendible, pero nadie ha tomado en cuenta que esa central hidroeléctrica por bombeo —que es la única en América del Sur con esas características— ha costado al Estado nacional mil millones de dólares.

Recién se han barajado aquí cifras sobre el valor de Atucha II. El señor miembro informante habló de 2.900 millones de dólares invertidos y de 600 millones de dólares faltantes para concluir la construcción. Nosotros, sobre la misma cuestión manejamos una cifra un poquito menor, aunque aproximada al monto que se dio, lo que significa hablar de un patrimonio realmente importante.

Sin embargo, nadie incluyó la información —como lo hago yo en este momento ante la Cámara— de que hay una central hidroeléctrica de mil millones de dólares que va atada al cuello de la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero en el proceso de privatización, lo que significa una enajenación del patrimonio mucho mayor todavía.

Digo que estoy indignado, porque se trata de cincuenta años de esfuerzo de la Nación argentina, del pueblo argentino, que construyó ladrillo sobre ladrillo ese monumento importante: la Comisión Nacional de Energía Atómica, que respetaron todos los gobiernos. Nadie osó atropellarla. Hubo alguna discriminación en algún momento del gobierno militar de facto; hubo persecución ideológica, como correspondía a los fascistas que gobernaban en ese momento en nombre del Ejército argentino.

Aparte de eso, todos los argentinos de todos los signos políticos que han pasado por la República Argentina desde 1950 hasta la fecha, respetaron religiosamente la integridad, la filosofía y la doctrina de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Creo que sería interesante que los señores senadores pudieran leer el libro de Jean Marie Quehenó politólogo francés, que habla del fin del Estado-nación y concluye refiriéndose al fin de la democracia. ¿Por qué? Porque cuando desaparece el Estado-nación los pueblos quedan sin rumbo, como ha ocurrido en algunos sectores de Europa después de la disgregación fundamental de la Unión Soviética, donde vemos ahora cómo florecen las guerras entre hermanos

en países que se disuelven enfrentándose brutalmente.

La República Argentina está en un proceso de retrogradación de su progreso, que le costó durante muchísimo tiempo conseguir. Y en nombre de la ley 23.696, de reforma del Estado, se ha realizado una gigantesca operación, no de modernización del Estado sino de desguace del Estado nacional.

Hemos visto con tristeza pasar por aquí —y los hombres de la Unión Cívica Radical nos hemos opuesto invariablemente— la privatización de todo el sector energético argentino.

Yo participé en todos esos debates y no me olvidé de que traje a la sesión en que se trató la privatización de Gas del Estado un documento del Banco Mundial, así como anteriormente los señores senadores Berhongaray, en primer término, y luego, Maglietti se referían al documento del Banco Mundial que aconseja la privatización de las centrales nucleares.

El documento que traje al recinto en aquella oportunidad tenía el texto en inglés y estuvo sobre el escritorio del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien hoy se rasga las vestiduras olvidando que fue el autor intelectual de toda la decadencia de la República Argentina.

Creo que los señores senadores debieran tener más cuidado en el tratamiento de este asunto, porque la historia no nos va a perdonar. El juicio histórico será inexorable con nosotros; y los testimonios que ahora estamos dando serán lamentablemente leves quejas que habremos dejado algunos de nosotros en este recinto al ver cómo se despedaza a la República Argentina y cómo se desguaza todo el patrimonio nacional. Prácticamente, no queda nada, señor presidente.

La privatización de las centrales nucleares implicará que este negocio —como dice el Banco Mundial— pase a manos privadas, y serán los generadores de energía eléctrica quienes obtendrán del Estado nacional pingües ganancias, como ocurre ahora con las empresas telefónicas, que están cuestionadas ante la justicia, incluso, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su momento, cuando se privatizó ENTEL, advertimos al entonces ministro Dromi que esto iba a ocurrir: que las tarifas crecerían bárbaramente, que el pueblo argentino usuario sería el perjudicado fundamental de este proceso de privatización que iniciaba en ese momento el gobierno del presidente Menem.

Pero no se detuvieron. El Senado de la Nación vio pasar cada una de estas leyes y la ma-

yoría suficiente dio el voto necesario para que fueran sancionadas las leyes por las que se establecían las privatizaciones.

Hoy asistimos a este proceso que cambia la filosofía de un país que estaba creciendo, a mi juicio, correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque en otras latitudes hay ejemplos sobrados que muestran al Estado nacional al frente de la actividad de la generación de energía eléctrica.

Por ejemplo, Francia tiene 86 centrales nucleares que generan energía eléctrica, con una potencia instalada de 57 millones de kilovatios. El Estado nacional es lo suficientemente inteligente y diligente para defender el progreso inequívoco de este país.

Hace un momento se recordó que el propio Reino Unido intentó la privatización de las centrales nucleares, cosa que abandonó dado que hoy siguen siendo estatales. También lo son en su mayoría en Canadá.

No lo son en los Estados Unidos. Pero bien se dijo aquí —y lo repito— que nunca se han privatizado centrales nucleares estatales para transferirlas al sector privado, sino que siempre se han otorgado licencias para que entidades privadas construyeran las centrales nucleares.

No tengo conocimiento —salvo en Estados Unidos y Japón, que son los dos países con mayor cantidad de centrales nucleares en manos privadas— de que las demás naciones hayan resignado una sola central en manos privadas habiendo sido manejadas por el Estado. Ni Brasil, que es nuestro competidor en muchos aspectos dentro del Mercosur, ha resignado una sola de sus centrales nucleares —destaquemos que ya tiene algunas en funcionamiento—.

Estamos avanzando sobre una circunstancia sumamente delicada, que ya fue calificada harto inteligentemente aquí por los señores senadores de mi partido que me precedieron en el uso de la palabra. Como señalara el señor senador Berhongaray —miembro informante del despacho en minoría, que también lleva mi firma—, es verdad que no nos quedamos en una simple oposición sino que hacemos una propuesta alternativa, totalmente diferente a la del despacho en mayoría, dado que este último va directamente a la privatización de las centrales nucleares.

Nosotros nos oponemos a esto categóricamente. Reflotamos el concepto nacional y nacionalista del valor del cuerpo técnico y científico de desarrollo e investigación de la CNEA, que fuera tenazmente perseguido en los últimos dos años, luego del decreto de este gobierno por el que se ordenó la división de la Comisión Na-

cional de Energía Atómica en, por una parte, la NASA y, por la otra, la Comisión Nacional de Energía Atómica remanente.

Deploro que esto haya ocurrido en la Argentina porque creo que el país ha perdido un lugar de privilegio en el mundo. También los argentinos han perdido un ejemplo notable respecto de cómo se puede, a través del sacrificio, del esfuerzo y de la inteligencia, obtener premios Nobel no solamente en medicina sino también contar con científicos de primer nivel en el campo nuclear, que enaltecen la jerarquía de nuestro país dentro de los foros mundiales vinculados con este tema.

Los científicos han sufrido las consecuencias de este retiro voluntario, que llevó a más de 500 científicos y técnicos argentinos a dejar sus lugares de trabajo con relación a la investigación y desarrollo dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Creo que este es un daño irreparable.

Incluso, como ya se mencionara aquí, por medio de un decreto se llegó a la prohibición de que pudieran ejercer la cátedra universitaria después de haberse acogido al retiro voluntario. Es decir, esta discriminación perversa es inconcebible en nuestro país en estos tiempos modernos. Repito que se hizo durante este gobierno.

Deploro —reitero nuevamente— que esto haya ocurrido y llamo la atención de los señores senadores que con su voto van a consagrar esta tarde uno de los crímenes más importantes contra el patrimonio nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: antes de definir mi voto en esta discusión, como interpreto que si se sanciona esta norma tal como la estamos debatiendo significará el fin de la Comisión Nacional de Energía Atómica tal como fue concebida en sus fundamentos originales —tendrá otra función, pero dejará de explotar esta fuente de energía tal como lo ha venido haciendo hasta ahora—, debo decir que soy un poco amigo de las exequias fúnebres. Entonces, quisiera dar el último testimonio a la CONEA, que realmente prestó servicios muy importantes para la vida del país; lo dicho, más allá de si su eficiencia fue toda la que debió ser o no, y más allá de si los tiempos en que actuó como organismo estatal están históricamente superados. No voy a entrar en ese debate.

Cito a Juan Perón: "El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica en la isla

Huemul, de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala térmica".

En esta breve frase está condensado el impacto y la significación que tuvo para su tiempo que en la Argentina se hubiera obtenido virtualmente la respuesta definitiva al problema universal de la producción de energía mediante fuentes renovables.

Perón no anunció ni una explosión ni una bomba atómica, como después se intentó decir. Simplemente manifestó esto y repito: "Se han producido en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala térmica".

Después la historia fue muy discutida, muy disputada. ¿Cuántas veces la oposición de aquel entonces —no con el lenguaje veterano y maduro de los opositores de hoy— nos reclamaba o nos hablaba de la poca seriedad científica de Ronald Richter, el austríaco que dirigió las investigaciones de la isla Huemul? ¿No es así, señores senadores? ¿Cuántas veces nos hablaban de que se estaban invirtiendo ingentes millones de dólares que no teníamos en investigaciones que no iban a terminar en nada?

El tiempo ha colocado las cosas en su lugar.

Yo quiero recordar solamente una anécdota. Estando en Bariloche —de esto no hace tanto tiempo; no desde los años 50— en una plática sumamente cordial y amistosa con Sábato; no con Ernesto Sabato sino con Mario Sábato...

Varios señores senadores. — Jorge Sábato.

Sr. Cafiero. — Jorge Sábato, ahora estamos. Jorge Sábato, el tecnólogo radical de fama mundial. En una sobremesa íntima nos dijo: "¿Ustedes saben que Richter fue un gran sabio, que todavía vive, y que los sistemas que él intentó aplicar en aquel momento en la isla Huemul hoy todavía son seguidos y recomendados por los investigadores más importantes del fenómeno de la energía atómica en el mundo?"

Esa expresión de Sábato, sinceramente, además de agradarme porque estaba dentro de la línea de lo que nosotros suponíamos que eran las investigaciones atómicas en la República Argentina, me confirmó este hecho: pocos procesos en nuestro país han tenido este carácter multipartidario, multigobierno, y han sido seguidos por todos sin hesitaciones. Y cuántos hombres ilustres de la investigación científica y tecnológica argentina pasaron por la Comisión Nacional de Energía Atómica y dejaron sus enseñanzas.

Voy a votar favorablemente en general este proyecto de ley, señor presidente. Lo haré con

cierto cargo de conciencia pero lo voy a votar igual. Porque a lo largo de este debate mis dudas sobre las bondades de este proyecto de ley se han acrecentado más que disminuido. Tengo serias disidencias con respecto al tratamiento del problema del medio ambiente —en la ley está omitido— en momentos en los que de alguna manera está caracterizado el proceso de producción de energía atómica. Precisamente después de Chernobyl se debería contemplar con más razón aún la relación entre la producción de energía atómica y el medio ambiente.

No voy a distraer a este cuerpo con las disidencias que me merece el proyecto que se está debatiendo y por eso simplemente voy a pedir su inserción a esta altura de mi exposición.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

DISIDENCIAS RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR

1. Consideraciones generales

El proyecto de ley nacional de la actividad nuclear prevé entregar en concesión al sector privado la operación de las centrales nucleares, manteniendo en manos del Estado funciones como las de regulación, fiscalización, y la responsabilidad por la gestión de los residuos nucleares.

Desde el punto de vista ambiental el proyecto omite aspectos esenciales tales como el transporte y manipulación de materiales nucleares; el manejo de los residuos generados por la actividad; la necesidad de desarrollar estudios que mejoren los eventuales riesgos ambientales; la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental y la convocatoria a una audiencia pública para el pronunciamiento de los distintos sectores de la comunidad —conforme a las nuevas reglas constitucionales— para la radicación de un repositorio nuclear o para la ampliación de instalaciones ya existentes; la obligación de brindar información; la obligación de contar con planes para eventuales contingencias; la consideración del daño al ambiente y, entre otras cosas, la omisión, entre las funciones de la Autoridad Regulatoria nuclear, de la protección ambiental.

Asimismo, y debido a los elevados costos que implica el cierre de las operaciones y al hecho indefectible de que tal situación se plantea en todas las plantas nucleares, es fundamental que se determine de un modo más severo la necesidad de constituir un fondo o contar con una garantía suficiente para afrontar los mencionados costos, considerando asimismo que toda financiación para la construcción y operación de las plantas nucleares debe contemplar los costos del cierre de operaciones. Todo lo anterior no hace sino prever la situación de que el operador de la planta se encuentre insolvente al momento del cierre y que el Estado y la sociedad, deban hacerse cargo de los mismos.

Sería importante que los licenciarios y operadores que resulten beneficiados por la privatización contri-

buyan a través del canon a financiar una parte de la gestión de los residuos que genere su actividad, y no sólo las funciones de investigación y desarrollo como prevé el artículo 6º inciso d) del proyecto. De esta forma se evitaría que sea sólo la sociedad la que se haga cargo de los residuos que genera una actividad productiva.

Finalmente, por las gravísimas consecuencias ambientales que la actividad puede ocasionar, creemos que es fundamental elevar el número de miembros que conforman el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear para que se encuentren representadas la Autoridad Ambiental Nacional (SRNAH), las provincias donde se desarrolla una actividad nuclear y la comunidad científica.

2. Autoridad regulatoria nuclear

Para una representación más equitativa, debería contemplarse que dos miembros sean designados por el Poder Ejecutivo, otros dos a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados, uno en representación de cada una de las provincias con actividad nuclear en su territorio, otro en representación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y el restante en representación de la comunidad científico-técnológica independiente.

3. Daños al ambiente

Creemos que resulta esencial que se incluya en el concepto de daño nuclear el daño ocasionado al ambiente, lo cual es un presupuesto mínimo en cualquier legislación de la actualidad así como los gastos ocasionados como consecuencia de la amenaza de un daño ambiental inminente.

4. Nuevas plantas o ampliación de las existentes

Resulta razonable que no se requiera aprobación alguna para las instalaciones existentes y en funcionamiento (artículo 13). Pero no es así, en cambio para las ampliaciones de los repositorios temporarios o definitivos, sus vías de acceso, y la manipulación y transporte de los residuos. En este caso, correspondería que bajo los mismos términos expresados anteriormente para otras instalaciones nucleares, se requiera un mecanismo de aprobación que contemple la evaluación de impacto ambiental y la celebración de audiencias públicas.

5. Deber de información

Debería incorporarse como parte de las obligaciones de este organismo la de proveer información a los trabajadores y a la comunidad, tanto sobre la situación de las centrales y la actividad nuclear en general como sobre los riesgos que entrañan las prevenciones y los programas de emergencia.

Del mismo modo, debería incorporarse la obligación de los licenciarios y operadores de notificar en forma inmediata a la autoridad regulatoria nuclear sobre cualquier accidente o falla de operación que se produzca como parte del desarrollo de las actividades nucleares.

6. Planes de contingencia

Sobre este último punto debe incluirse expresamente la obligación del organismo regulatorio de elaborar

planes de contingencia para accidentes, programas de evacuación ante emergencias y de entrenamiento para trabajadores y vecinos.

7. Modificaciones propuestas

Además de las observaciones efectuadas hasta aquí, que requieren cambios fundamentales, en algunos artículos se aconsejan las siguientes modificaciones:

Artículo 2º: Funciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Agregar un inciso que establezca:

Promover estudios para la protección del ambiente

Artículo 7º: Funciones de la autoridad regulatoria nuclear.

El artículo omite referirse al transporte y manipulación de materiales nucleares, uno de los rubros que entraña riesgos objetivos para la población en su conjunto.

Art. 8º — Finalidades de la actividad de regulación y control.

Debiera modificarse el inciso a) del siguiente modo:

Proteger a las personas y al ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

Art. 9º — Toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear deberá:

Debiera agregarse como inciso d):

Asumir la responsabilidad por los costos que ocasiona el cierre o interrupción de actividades nucleares.

Debiera agregarse como inciso e):

Para el cumplimiento de los incisos c) y d) deberá contratarse un seguro o constituirse una garantía financiera o incluso constituirse un fondo en el caso del último inciso mencionado, a satisfacción del Poder Ejecutivo nacional o de quien éste designe, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente.

Debiera modificarse el párrafo siguiente:

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ajustar la suma establecida como límite de responsabilidad en el párrafo anterior en el caso de que se revisaran los términos de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daño Nuclear, una vez que la modificación sea ratificada por ley o cuando se ratificara cualquier otro documento internacional que así lo hiciera necesario.

El último párrafo del artículo se hace innecesario.

Artículo 12: Para definir la ubicación de un repositorio para residuos de alta, media y baja actividad, la Comisión Nacional de Energía Atómica propondrá un lugar de emplazamiento. Este deberá contar con la aprobación de la autoridad regulatoria nuclear en lo referente a seguridad radiológica y nuclear, la aprobación por ley del Estado provincial donde se ha propuesto la localización. Tales requisitos son previos y esenciales a cualquier trámite.

Se debiera agregar:

Previo a toda aprobación deberá convocarse a una audiencia pública y llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental del repositorio, la que deberá ser puesta a disposición del público en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

La realización de la audiencia mencionada deberá ser convocada con una anticipación no menor a diez (10) días hábiles, en un medio de difusión de circulación local, brindándose la información adecuada vinculada al emprendimiento.

Art. 16. — Al inciso a) debiera modificárselo del siguiente modo:

a) Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección física y ambiental.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: es para adelantar el voto negativo, en general y en particular, al proyecto en consideración.

Creo que hay que abordar el tema desde la especial caracterización que tiene la actividad nuclear. Lo tratare de hacer sin adjetivaciones. Y digo especial tratamiento porque no estamos frente a la desregulación de algunos servicios, como pueden ser correos, aeropuertos o algunas otras actividades como la petrolera. Estamos frente a una actividad que por sus características especiales tiene dos valores a tutelar fundamentalmente. Primero, el que hace a la seguridad y el otro, al desarrollo estratégico que significa la actividad nuclear en la vida de un país soberano. No quiero ingresar en el debate de si debe ser estatal o privado, porque es una discusión de plano teórico. Lo cierto es que nuestro Estado no se ha mostrado históricamente todo lo eficiente como empresario y como gestor de este tipo de políticas.

Cuando este tema vino en revisión a esta Cámara, mi principal preocupación fue dotar a esta actividad de un marco regulatorio donde se protegieran especialmente estos dos valores: la seguridad y el desarrollo estratégico, o sea, poder seguir participando en el diseño de una política nuclear para el país.

Como todos saben, señor presidente, ha sido una decisión mayoritaria de mi bloque, que no comparto, que el proyecto venido de la Cámara de Diputados no tuviera modificación alguna. Por eso mi voto es negativo.

La seguridad no era una cuestión menor. Nosotros habíamos discutido en la comisión la posibilidad de la creación de un fondo de carácter permanente a cargo de quienes tuvieran la explotación de las centrales nucleares, en lo que hace al desmantelamiento, con un concepto no sólo referido a los residuos sino más amplio, es decir, todo lo que fuera emergente de la actividad nuclear, como los sucesos que han sido mencionados por los senadores preopinantes, por ejemplo Chernobyl, que eximen de mayores comentarios en cuanto a la necesidad de un marco adecuado en esta materia.

También creíamos que era necesario revalorizar la CNEA, dotándola de un presupuesto y de una amplitud que fuera a tutelar el segundo valor del cual hablaba, que es el desarrollo estratégico que significa una política nuclear.

Por último, se encuentra el valor del negocio en sí. Creemos que el negocio como tal, el concepto legislativo que se pone en el artículo, que obliga a hacer un proceso con una sola unidad de negocio, va a resultar negativo porque encorseta legislativamente al Poder Ejecutivo porque no lo preveíamos como una obligación sino como una facultad de dicho Poder de dividir en una o más unidades de negocios. Considerábamos que esta actitud podía incluso mejorar las ofertas y colocar al Estado en un mejor posicionamiento frente a los futuros oferentes.

Desgraciadamente no se ha podido efectuar ninguna de estas dos modificaciones y el proyecto va a ser sancionado exactamente como vino de Diputados.

Creemos que estos valores no han sido debidamente custodiados y en esto radica nuestro voto negativo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. De la Sota. — Señor presidente: hace cinco años, en abril de 1992, y por iniciativa de legisladores del Partido Justicialista se sancionó en Córdoba la ley 8.157 referida a la aplicación pacífica de la energía nuclear en el ámbito de nuestra provincia. Fue una ley pionera en su tipo que nos ubicó como la primera provincia argentina que entendió que era de imperiosa necesidad contar con un marco regulatorio referido a las actividades científicas, técnicas, tecnológicas e industriales y a todos aquellos aspectos vinculados directa o indirectamente con la aplicación pacífica de la energía nuclear.

Y esta propuesta que llevaron adelante los hombres de mi partido en una provincia gobernada por el radicalismo no fue una iniciativa de casualidad sino de causalidad.

En Córdoba, en una de la más bellas regiones de mi provincia —el Valle de Calamuchita— y a orillas de uno de nuestros lagos más bonitos —el de Embalse— poseemos una de las dos centrales nucleares que funcionan en la Argentina. La otra está en la provincia de Buenos Aires.

Este solo hecho justifica el por qué los cordobeses entendimos, hace ya más de un lustro, que la actividad nuclear debía ser motivo de una regulación legal precisa.

Si bien comprendemos que la Nación debe legislar en el marco de una política diseñada y ejecutada en aras del bienestar, en materia del uso pacífico de la energía nuclear los cordobeses pensamos que la provincia y los municipios del país deben ser actores insoslayables en la definición y decisión acerca de esta cuestión, principalmente en lo que hace a la instalación de las mismas y a dónde se entierran sus desechos, sobre lo cual nos consideramos con legítimo derecho a tener una opinión especial.

Hoy estamos considerando el proyecto que sancionó la Cámara de Diputados. Puedo decir que he tenido la posibilidad de escuchar en mi provincia a todos los sectores interesados, desde los técnicos y profesionales que trabajan en las plantas hasta los funcionarios, empresarios y ciudadanos comunes preocupados por la producción de energía nuclear.

Y no podemos dejar de señalar que en Embalse existe una sensibilidad especial luego de los trágicos sucesos de las explosiones ocurridas en la fábrica militar de Río Tercero —muy cerca de la central—, lo cual ha tornado todavía más sensible la situación de los habitantes del Valle de Calamuchita.

Debo decir, señor presidente, que todos los cordobeses interesados en el tema han sido muy bien recibidos en esta casa, y por eso debo expresar mi agradecimiento a los señores presidentes de las distintas comisiones, senadores San Millán, Cafiero y Sapag. Junto con el señor senador Storani hemos acompañado a los políticos de mi provincia y a los trabajadores, científicos y técnicos que concurrieron a las comisiones del Senado a exponer sus ideas, las cuales fueron respetadas y escuchadas.

Adelanto entonces mi voto negativo en general y en particular a este proyecto en tratamiento, cumpliendo con un mandato que los cordobeses nos han dado a quienes los representamos en esta Cámara, un mandato que es la resultante del debate, de la discusión de todos los sectores de la vida pública de nuestra provincia.

Y debo destacar también, al mismo tiempo, la generosidad de mi bancada que, respetando el

pluralismo que debe existir en un tema tan sensible como este y sabiendo que voy a votar de esta manera, no se ha opuesto a que así lo haga, expresando públicamente los fundamentos que los cordobeses hemos tenido en cuenta al adoptar tal determinación.

Las principales críticas al proyecto pueden sintetizarse en cinco puntos. En primer término, sostenemos que las usinas nucleares por sus características, riesgos, costos de mantenimiento y cierre deben continuar dentro de la órbita estatal.

En segundo lugar, una política de repositorios de alta peligrosidad para el medio ambiente de las provincias, como la contemplada en este proyecto, en las que ya tenemos instaladas plantas nucleares, resulta violatoria de nuestras autonomías provinciales y municipales, aunque pueda ser respetuosa de las autonomías provinciales y municipales de aquellas provincias que en este momento no tienen desechos nucleares.

En tercer término, pensamos que en este esquema de concesión no existen acabadas garantías de seguridad en la etapa de cierre de las usinas nucleares.

En cuarto lugar, existe una falta de compensación a las poblaciones en donde se encuentran las centrales nucleares por externalidades negativas producto de la instalación de estas plantas que, indudablemente, perjudican su desarrollo y su crecimiento general.

Finalmente —y esto ya es un planteo que hago específicamente como representante de los cordobeses— consideramos que mediante este proyecto se enajena parte del patrimonio máspreciado de la provincia a la que represento.

Paso ahora a considerar sintéticamente el primer punto, y debo decir que no se trata aquí de volver a dicotomías obsoletas entre privatismo versus estatismo. Tampoco voy a desarrollar una remanida argumentación utilizada durante tantos años por la cual, so pretexto de que se trataba de temas estratégicos, se terminaba exigiendo toda clase de privilegios y protecciones estatales para actividades no rentables. Precisamente esos viejos argumentos son los que impidieron durante décadas, por ejemplo, el desarrollo de la minería en la Argentina. Gracias a Dios hoy esta actividad tiene un importante impulso, luego de la desregulación que hemos llevado adelante nosotros.

No estoy queriendo exhumar entonces formas prejuiciosas de razonamiento. Mi voto se funda en el concepto que tengo acerca de los nuevos roles y funciones que debe asumir el Estado moderno en el marco de las sociedades modernas

que se encuentran en pleno proceso de transformación.

Por todo lo que he podido estudiar y por los informes a los cuales he podido tener acceso, considero que está claro que las tecnologías de control de seguridad de las usinas nucleares todavía no se encuentran suficientemente desarrolladas en el mundo.

Los diarios del día 12 del mes pasado informan sobre un grave accidente en una usina nuclear en el Japón. Tenemos conocimiento de pocos accidentes nucleares. Me pregunto cuántos habrán sido ocultados o atenuados en sus efectos.

Mi oposición a la entrega en concesión de las usinas a manos privadas se fundamenta en el concepto de que, por sus características y por sus riesgos, estas plantas deben estar dentro del marco de la responsabilidad del Estado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. De la Sota. — Sostengo que el riesgo nuclear sólo puede ser tolerado por el Estado.

No podemos dejar de considerar los eventuales daños de un accidente nuclear. El más probable resultado de un accidente de este tipo sería que el gobierno terminaría haciéndose responsable del mismo, asumiéndolo y aceptando su responsabilidad. Entonces, pienso que la seguridad debe tener mayor prioridad que el beneficio económico, y del proyecto en consideración no surgen, para los cordobeses, acabadas pruebas de que para quienes van a operar privadamente la usina nuclear que se encuentra en esa provincia el concepto seguridad sea más importante que el concepto rentabilidad.

¿Qué hubiera pasado en Córdoba si la fábrica militar de Río Tercero hubiera estado en manos de una empresa privada al momento de ocurrir el lamentable suceso que conmocionó a toda la Argentina? Tendríamos miles de juicios y media ciudad destruida, con un operador privado discutiendo en los tribunales si corresponde o no pagar las consecuencias de un desastre como el que vivimos los cordobeses hace poco tiempo. En lugar de eso, el Estado aprobó en forma inmediata la compensación por daños ocasionados en vidas y viviendas de los vecinos de esa ciudad.

Subsidiariamente, los cordobeses pensamos que tampoco están dadas las razones económicas para la concesión. En efecto, el 17 por ciento de la energía que produce la Argentina es de origen nuclear. La central nuclear de Atucha produce

el 6 por ciento y la de Embalse aproximadamente el 11 por ciento. En conjunto, los ingresos por año rondan los 300 millones de dólares; en consecuencia, nos parece curioso un precio de apenas 261 millones, que puede llegar hasta mil millones.

En cuanto al segundo punto, sobre la política de repositorios de alta peligrosidad, queremos decir que el controvertido artículo 13 del dictamen que hoy cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, y que se ha convertido en el artículo 14 del dictamen de nuestras comisiones, establece que para instalar los depósitos de residuos o desechos nucleares, así como para continuar en operación o para viabilizar el acceso o retiro de los residuos de los repositorios de tal índole, no se requerirá autorización especial legislativa ni autorización de las municipalidades o provincias en cuyo territorio se encuentre localizado el repositorio o sus vías de acceso.

Pensamos que esto viola la Constitución Nacional, que atribuye claras autonomías a las provincias, y también la Carta Magna de mi provincia, con sus consiguientes leyes, decretos y ordenanzas municipales.

Por este artículo, al quedar habilitadas nuevas ampliaciones de los depósitos de residuos radiactivos existentes o de sus vías de acceso o procedimientos de retiro de residuos, sin requerimiento previo de conformidad por parte de nuestras provincias o municipios, los repositorios que tenemos actualmente se podrían constituir definitivamente en depósito de desechos que vengan de otro lugar, frente a nuevas inversiones en materia nuclear, por adquisiciones o convenios que pudiera haber con el exterior.

Yo comprendo la salvedad impulsada por mis compañeros de bancada de la provincia del Chubut, porque ellos han tenido la espada de Damocles latente, ya que era factible que existiera un repositorio en el ámbito de su provincia. Pero estoy seguro de que ellos también deben comprender la posición de los cordobeses en el sentido de que no nos gusta que se consagre indefinidamente nuestra calidad de ser los únicos que tenemos repositorios de desechos nucleares.

Pensamos que la privatización, tal cual está diseñada, no ofrece garantías de seguridad en la etapa de cierre y desmantelamiento de las usinas.

Todos conocemos la vida útil limitada de las centrales nucleares, y que luego de su etapa de funcionamiento deben ser acondicionadas de manera definitiva, para pasar de una situación de actividad a su cese total.

Pero ésta no es una tarea sencilla, ya que se requieren especiales cuidados, elementos y procedimientos de suma complejidad, que conllevan un alto costo en términos de dinero y de tiempo. El artículo 34 habla escuetamente de este punto.

Por lo tanto, los cordobeses pensamos que todo esto no ha sido previsto acabadamente en el proyecto de ley que se encuentra en tratamiento.

Por otra parte, y yendo a nuestra cuarta objeción, pensamos que no hay una compensación a las poblaciones en donde se encuentran radicadas las centrales nucleares.

La ciencia moderna distingue entre externalidades positivas y negativas. Las primeras son aquellas que apoyan y alientan el crecimiento de actividades colaterales en una zona, y las segundas son las que producen un efecto adicional no deseado.

Ustedes podrán decir que la instalación de la central nuclear en mi provincia originó beneficios iniciales, y podemos concordar con ello, porque en una primera etapa, durante la construcción, se generó una economía externa por el aumento de la mano de obra, el flujo de visitantes a la central y el desarrollo de las zonas aledañas. Pero hoy esto no es así.

En efecto, tenemos la central nuclear instalada en una zona totalmente turística, y ello no alentó el desarrollo de la zona sino que, por el contrario, nos privó del negocio inmobiliario, del crecimiento de la inversión turística y del desarrollo de la región.

Por último, tratando de ser breves, debemos decir que a raíz de una ilegal resolución —re-pito, una ilegal resolución— de la Secretaría de Energía de la Nación nuestra provincia va a ser despojada de una parte muy apreciable de su patrimonio. Recientemente, el complejo hidroeléctrico Río Grande fue transferido de la órbita de Agua y Energía a Nucleoeléctrica S.A., con el fin de que integre la unidad de negocios a privatizar, como se señala en el proyecto de ley en tratamiento.

La mayoría de estas centrales tuvieron un proceso de transferencia al dominio de las provincias. Esto no ocurre en Córdoba con el complejo hidroeléctrico Río Grande. Se trata de una central única en América y sin par en el mundo; un prodigio de la ingeniería que, lamentablemente, va a ser incluido dentro del mecanismo de privatización por una resolución ilegítima. Debo decirles que este complejo factura ocho millones de dólares por año, emplea a 68 personas y sólo

cuesta tres millones de dólares. Es decir que es totalmente rentable. Creemos que se nos debe devolver a los cordobeses esta parte de nuestro patrimonio. Por ello, he presentado un proyecto de ley para solicitar la transferencia de la central de Río Grande a la provincia de Córdoba.

Todos los cordobeses se han pronunciado en contra del proyecto de ley en tratamiento. El prestigioso diario "La Voz del Interior", que constituye, en alguna medida, el canal de comunicación de los habitantes de nuestra provincia, se ha hecho eco desde hace mucho tiempo del rechazo de toda la provincia al marco regulatorio y al proceso de concesión, no sólo haciendo públicas las protestas de los habitantes de la zona sino también las opiniones de nuestros intendentes, del gobierno de la provincia, de todos los partidos políticos, de las organizaciones gremiales y de las organizaciones no gubernamentales y vecinales que se han manifestado en contra de la iniciativa que hoy se votará en este Senado.

Por lo que he expresado, agradeciendo la permisividad de mi bloque; por lo que piden todos los cordobeses, porque pretendo interpretar de esta manera la posición del gobierno de mi provincia, de los legisladores de todos los partidos de mi provincia, de los intendentes y jefes comunales, de las entidades ambientalistas, de los dirigentes políticos y gremiales; porque estoy profundamente comprometido en lograr el desarrollo sostenible de nuestra Córdoba, haciéndola una provincia grande y pujante en el marco de un país grande y pujante, adelanto mi voto negativo en general y en particular al presente proyecto de ley.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Le corresponde hacer uso de la palabra al señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Le cedo brevemente el uso de la palabra al señor senador San Millán para que formule algunas aclaraciones.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Es para hacer algunas aclaraciones y precisiones con respecto a distintas afirmaciones realizadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra, sobre todo en lo que respecta al tema de la valuación de las centrales nucleares.

Es preciso aclarar que esta valuación es para la constitución de la sociedad NASA. No se trata de una valuación para la concesión. Cuando, de aprobarse este proyecto de ley, comience el pro-

ceso de privatización, deberá realizarse una valuación especial previa a la concesión. Ello se enmarcará en un mecanismo establecido por la ley 23.696, de reforma del Estado, a la que nos remite la ley 24.095 para el tema de la tasación.

Además, quiero aclararle al señor senador por La Pampa de la Unión Cívica Radical que con este proyecto la CONEA se fortalece en su rol originario y recibe del privado aportes de capital que le permitirán llevar a cabo su función de investigación y desarrollo en razón del canon que deberá pagar el operador privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º, inciso d), del proyecto.

Segundo. Si bien el desguace de las centrales nucleares es realizado por la CONEA, ella lo hace con los recursos que aportaría el privado en caso de aprobarse el presente proyecto de ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la norma.

Por el decreto 1.540/94 no se produjo la transferencia de las plantas de radioisótopos ni de las de agua pesada, como afirmó el señor senador Berhougaray, sino sólo lo vinculado con la central de Embalse y de Atucha I y II.

En cuanto a la afirmación de que se prohíbe el ejercicio de la docencia a quienes entren en el régimen del retiro voluntario, debo aclarar que no es así. Lo que sí existe es una prohibición de ser incorporados nuevamente al Estado por el término de cinco años, como se establece en todos los casos de retiro voluntario, tanto en el Estado nacional como en la mayoría de los estados provinciales.

En cuanto a las preocupaciones del señor senador Avelín con respecto a que la Auditoría General de la Nación no auditó, quiero aclarar que en 1994 la NASA fue auditada por dicho organismo, que en este momento está realizando la auditoría correspondiente a 1995. En el mismo sentido debo señalar que la SIGEP actúa en el Directorio de la NASA como comisión fiscalizadora.

En cuanto a la contestación a los pedidos de informe formulados por el señor senador Avelín relacionados con este tema, debo señalar que ellos han sido respondidos por la Secretaría de Energía de la Nación, conforme obra en los antecedentes de este cuerpo.

Respecto de la preocupación de que esta ley modificaría el compre nacional, quiero aclarar que el compre nacional no se establece por medio de esta iniciativa, sino que ya está vigente, lo que ha quedado claramente palpable, y así está demostrado en el fallo de la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación conocido como "Servotron".

En cuanto a la ley de inversiones mineras respecto de la capacidad concerniente a las provincias, hay que diferenciar la prospección minera primaria de la prospección de materiales nucleares; de igual modo sucede con el régimen nacional de hidrocarburos.

Sr. López. — Yo había pedido la palabra para solicitar una inserción...

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Quería hacer uso de la palabra antes de que lo hiciera el presidente del bloque justicialista para manifestar mi rechazo al proyecto. Asimismo, y dado lo avanzado de la hora, solicito que se autorice la inserción de mi discurso.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente: El dictamen de mayoría por el cual se autoriza la privatización de las tres centrales nucleares provoca serios perjuicios al patrimonio del Estado y compromete la continuidad del desarrollo científico y tecnológico alcanzado por el país, la seguridad radiológica y nuclear de las instalaciones y constituye un pésimo negocio para el Estado nacional.

Si tenemos en cuenta que la Secretaría de Energía de la Nación fijó a través de la resolución 283/94 una valuación de 261 millones de dólares y usando el método "valor histórico" el monto ascendería a 1.140,80 millones de dólares o bien el de "valor de reposición" sería de 1,18 millones, queda muy claro lo favorable del negocio, pero para el eventual comprador.

Este proyecto marcha a contramano de lo que se hace en el resto del mundo: 18 países tienen actualmente en construcción 55 centrales nucleares, todas ellas bajo jurisdicción estatal, salvo las de Japón donde es sabido que el Estado ejerce una fuerte tutela sobre la actividad privada.

En los últimos años, distintos proyectos privatistas fueron abortados en naciones como Inglaterra (año 1989 gobierno de Margaret Thatcher), Estados Unidos, muy recientemente el gobierno de Ontario en Canadá y Francia.

En este último país, Jean Claude Leny, presidente del ente estatal Framaton, en noviembre de 1994 declaró "el poder político ha tomado finalmente conciencia que Framaton no es una industria banal y que en consecuencia su traspaso al sector privado y por ende su desmembramiento del complejo estatal nuclear significaría el comienzo del desmantelamiento de este sector".

En Francia se considera la energía como un bien estratégico, pero no sólo desde el punto de vista de la defensa, sino desde la concepción moderna de lo estratégico para el desarrollo económico.

Así lo entendió el gobierno francés el cual por segunda vez en pocos años desistió de la privatización.

En ese sentido los argentinos, tampoco podemos darnos el lujo de ignorar que una privatización apresurada abre enormes interrogantes sobre la seguridad de las instalaciones, los operarios, la biodiversidad y de la población circundante, pues actualmente el nuevo ente regulador no cuenta con la capacidad técnica y organizativa necesaria para imponer a empresas privadas el cumplimiento de las onerosas y estrictas normas de salvaguarda que caracterizan la industria nuclear.

No se puede hablar de crecimiento, de desarrollo económico ni de progreso social si no hay una planificación energética, no siendo esta afirmación una mera circunstancia ideológica, sino una realidad categórica.

En todos los países del mundo, cualquiera sea la ideología política que los gobierne, se planifica en materia de energía, pues está directamente relacionada con el desarrollo del país, ante la inminencia de la finalización de los recursos no renovables.

La participación del capital privado no puede darse sin que previamente se definan, entre otros aspectos la cuestión de los repositorios finales, la cual es un problema federal que debe resolverse dentro de un acuerdo nacional, esto es que contemple tanto la opinión de las provincias como la continuidad de la política nucleoelectrica argentina.

De no procederse así y concretarse la entrega en concesión por un largo número de años o por la venta de estos activos al capital privado sin haber definido previamente una política nacional de la estrategia de manejo de los residuos radiactivos, especialmente de alta actividad, generado en la operación futura de las centrales, se enfrentaría potencialmente, además de los graves problemas de seguridad que acarrea no prever lo anteriormente mencionado un litigio de altas implicancias económicas con los inversores, ya que no podría descartarse que de encontrarse a nivel federal una solución a este problema, el Estado podía llegar a verse obligado a imponer limitaciones a la operación futura de dichas centrales, dándose así una casi segura causal de reclamo por lucro cesante.

Este problema está siendo enfrentado actualmente por la Secretaría de Energía de los Estados Unidos (DOE), ya que a pesar de haberse aprobado en el año 1982 en dicho país una ley que contemplaba la habilitación de un repositorio nuclear para el año 1998, la oposición del estado involucrado (Nevada, Proyecto Yucca) impedirá cumplir con dicha previsión. En lo mejor de las hipótesis ahora se habla del 2010/2012, habiéndose así generado un conflicto entre las empresas privadas y el gobierno de la USDA de aproximadamente 12.000.000.000.

No sólo preocupa en materia de seguridad la limitación de la responsabilidad civil del explotador a 80 millones de dólares (monto tomado de la Convención de Viena, el mismo es preceptivo, no obliga a que el país se atenga a ese número para arriba, sino como piso), sino también el hecho que sólo se encuentran comprendidos dentro de la responsabilidad del explotador los daños sobre su personal y contratista, los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, que estén desarrollando tareas (todas éstas dentro de la instalación nuclear) y los accidentes que se produjeran con sustancias fuera de ésta, en caso de que las sustancias hubieran sido objeto de robo, pérdida, echazón, abandono,

cuando ésta debería ampliarse como indemnizables por el eventual daño nuclear a cualquier humano, al ambiente (daño irreparable e incalculable recordar Chernobyl), y a las cosas, como consecuencia de la instalación administrada.

En cuanto al monto éste debe ampliarse a 200 millones de dólares que es el monto promedio de los países con centrales nucleares (Japón, 260 millones; Alemania, 140 millones y Estados Unidos, que no se ha acogido a la Convención de Viena, tiene normas particulares por las cuales entre el Estado y los explotadores deben responder hasta 7.500 millones), y más teniendo en cuenta que el riesgo nuclear sólo puede ser tolerado por el Estado ya que el costo asociado con un serio accidente en una instalación nuclear excedería la capacidad de pago de cualquier empresa de generación o compañías de seguro, pues quien lo haga en su totalidad caería en bancarrota, por cuanto si el Estado como fin terminara asumiendo un costo que sea el menor posible.

Hace pocos meses, el doctor Selin, presidente de la Nuclear Regulatory Commission de los Estados Unidos, declaró que: "las reglas de mercado imponen tal competencia a las empresas generadores de energía nucleoelectrica, que las induce a reducir sus costos de generación mediante una menor calificación de gerenciamiento de sus centrales nucleares, con sus consecuentes implicancias en la seguridad operativa e inclusive retaceando reparaciones o modificaciones destinadas a incrementar también los referidos niveles de seguridad nuclear de sus plantas.

Asociado con la seguridad está el tema de la capacitación técnica, la cual reviste mayor prioridad que el beneficio económico, resulta difícil de creer que una compañía privada, la que ha sido establecida con el propósito específico de obtener beneficios, asigne a la seguridad una mayor prioridad que a los beneficios.

La declaración de San Carlos de Bariloche, ha dicho entre otras cosas "se ha procedido ha desintegrar la Comisión Nacional de Energía Atómica, quitándole un importante componente con capacidad económica y tecnológica en el campo de la generación de la energía eléctrica".

Si además se tiene en cuenta que el proyecto no deja establecido quién se hará cargo del costo de decomiso de las centrales argentinas al final de su vida útil. Sólo prevé en su artículo 9º al final que "todo explotador de una central de generación nucleoelectrica deberá aportar a un fondo para retiro de servicio de centrales nucleares. La forma de constitución, administración y contralor de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo nacional".

La vaguedad de esta redacción, el corto período de vida remanente de la central de Atucha I (10 años), el costo estimado de una operación de este tipo, acerca de la cual no hay antecedentes (se habla de 350 millones para cada central y las amplias atribuciones que se otorgan al Poder Ejecutivo nacional hacen suponer que grueso de ese costo de decomiso será afrontado por el Estado nacional.

No hemos acompañado este proyecto, porque a esta altura de las circunstancias, es por demás de evidente que su único objetivo ha sido la privatización y no ha tenido en cuenta la posibilidad de establecer claramente una política en materia nuclear y creo firmemente que

un sector estratégico como la energía nuclear, indispensable para asegurar la soberanía no puede quedar fuera del control directo del Estado.

Una industria cuya razón esencial de ser consiste en asegurar el abastecimiento electroenergético en las próximas décadas, no puede caer en la lógica del beneficio rápido que domina al sector privado en la economía de mercado, ya que ello resultaría incompatible con los aspectos estratégicos involucrados, con la seguridad nuclear y el progreso del país.

Sr. López. — Aprovecho la oportunidad, señor presidente, para señalar que vamos a hacer uso de un derecho que tienen las minorías parlamentarias cuando entienden que se avanza sobre los intereses de la Nación. Me refiero al derecho de no estar presentes al momento de la votación, (*manifestaciones en las bancas*) pero no para ir a ver un partido de fútbol, que no nos interesa, (*manifestaciones en las bancas*) ya que nos interesa mucho más esta cuestión. Por eso, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar en el salón de al lado,...

Sr. Figueroa. — Ahí hay una pantalla.

Sr. López. — ... pero no vamos a convalidar ni con la cola la aprobación de este proyecto de ley. (*Manifestaciones en las bancas.*)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: ante todo, quiero señalar que el tema de la privatización de la energía nuclear ha llevado un largo camino.

Hace aproximadamente tres años ingresó en este cuerpo un proyecto del Poder Ejecutivo, firmado, entre otros, por el anterior ministro de Economía. En esa oportunidad, el bloque justicialista indicó que se estaba incumpliendo con la ley de reforma del Estado por la forma en que el Poder Ejecutivo proponía hacer la privatización, que era incorrecta.

En aquel momento nos dijeron que era imposible no declarar previamente, y por ley, sujeta a privatización la actividad nuclear para poder ser votada. Efectivamente, esto ocurrió y se llevó a cabo de alguna manera todo el proceso que establece la Ley de Reforma del Estado. Tenemos la más firme y completa convicción de que lo que vamos a aprobar es lo que mejora la actividad y permite seguir desarrollándola. Cumplimos acabadamente con la ley y reafirmamos la actividad que en este sentido viene llevando a cabo nuestro gobierno.

Sr. Presidente (Menem). — Se procede a la votación en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

-- La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Solicito que en la votación en particular se vote por capítulos. Pero debo aclarar que de acuerdo con la disidencia expresada por el señor presidente de la Comisión de Energía, mi colega de bloque, el senador Sapag, cuando se traten los artículos 1º, 13, 18, 38 y 40, mi voto debe computarse por la negativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se tomará en cuenta, señor senador.

Si hay asentimiento se votará por capítulos.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Procederemos a la votación en particular.

— Se enuncia y aprueba el capítulo I, artículos 1º a 13.

— Se enuncia el capítulo II, artículos 14 a 29.

Sr. Ulloa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: en mi nombre y en el del señor senador Aguirre Lanari, pido que en el artículo 16, inciso c), se supriman las palabras "de minería y concentración de uranio".

Respecto de los artículos 22 y 23, hay un error formal. La palabra "autoridad" está impresa con minúscula, y debe ir con mayúscula porque se refiere a la Autoridad Regulatoria. Esto no significa una modificación, sino que simplemente se trata de un error material.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. San Millán. — La comisión no acepta la modificación del artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el capítulo II en la forma en que está en el dictamen de mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban el capítulo III, artículo 30; el capítulo IV, artículos 31 a 33 y el capítulo V, artículos 34 a 41.

— El artículo 42 es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Se van a votar los pedidos de inserción formulados.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

9

CONTROL PARA OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

Sr. Presidente (Menem). — Pasamos a la consideración de los órdenes del día.

En primer lugar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comercio en el proyecto de comunicación del señor senador Baum y otros señores senadores por el que se solicita se establezcan los mecanismos de control para los operadores de comercio exterior. (Orden del Día N° 41.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (*Lee*)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comercio han considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Daniel Baum y otros señores senadores (S.-2.709/96) solicitando se establezcan los mecanismos de control para los operadores de comercio exterior y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De conformidad con el artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 18 de febrero de 1997.

Carlos A. Verna. — Luis A. León. — Alberto R. Maglietti. — Carlos Manfredotti. — Ricardo A. Branda. — Alfredo Avellán. — César Mac Karthy. — Bernardo P. Quinzio. — Jorge J. Massat. — José L. Girja. — Héctor M. Maya. — Jorge A. Villaverde. — Antonio T. Berhongaray. — José A. Romero Feris. — José O. Figueroa. — Emilio M. Cantarero.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios

¹ Ver el Apéndice.

3

Colegio "Absalón Rojas", monumento nacional

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 1234.

4

Recargos en facturas de empresas de servicios públicos

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1237.

5

Sucursal del Banco Nación, Santa Cruz

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1238.

6

"Encuentro de Legisladores Culturales del Mercosur y España"

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 1240.

7

Actividad pesquera en el Mar Argentino

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1245.

8

Jornadas Internacionales de Intercambio y Actualización PYMES

—El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 1247.

9

Fallecimiento de Deng Xiaoping

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 1248.

10

Transferencia de terreno a la Municipalidad de Puerto Madryn, Chubut

—El texto de ley aprobado es el que figura en la página 1251.

11

Expo Campo Castex'97

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 1252.

12

Fondo Especial del Tabaco

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1139.

13

Condecoración a veterano de guerra

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 1162.

14

Repudio del secuestro de un periodista

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 1254.

15

Discordancia con un decreto del gobierno del Paraguay

—El texto del proyecto de la declaración aprobada es el que figura en la página 1255.

16

Extensión de beneficios a excombatientes de Malvinas

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 1155.

II

INSERCIONES

1

Entregada por el señor senador Salum***Debate sobre el proyecto de ley nacional sobre actividad nuclear***

Señor presidente:

Casi como un oráculo premonitorio, en el estudio del Banco Mundial denominado "Argentina: de la insolencia al crecimiento", de 1992, se recomendaba entre otras cosas al Poder Ejecutivo, en el punto 43. "Finalmente, la compañía de energía nuclear (CONEA) debería ser reestructurada transformándola en unidades comerciales y de investigación que serían luego transfe-

ridas fuera del ámbito de la Presidencia. Dos posibles unidades comerciales (productoras de energía y agua pesada, respectivamente) podrían pasar a manos de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía hasta que se proceda a su privatización."

Cuatro años más tarde, esta breve (pero contundente) recomendación se plasma en este proyecto de ley que estamos debatiendo y que supone un cambio de 180 grados con respecto a la política nuclear seguida por la República Argentina e iniciada el 31 de mayo de 1950, cuando el entonces presidente de la República, teniente

general Juan Perón, por medio del decreto 10.936 crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, generando un proceso que ya cumple 47 años y que (cosa extraña en nuestro país) significó el inicio de una auténtica política nuclear proseguida, con diferentes matices pero sin discusiones acerca de su importancia, por todos los gobiernos de turno.

Ahora bien, lo más lamentable del asunto es que esta iniciativa encuentra sustento únicamente en esta recomendación del Banco Mundial. Y en la justificación local de esta recomendación que nos explica que "necesitamos de los ingresos provenientes de la privatización del sistema nuclear para cubrir el déficit fiscal". Es decir, argumentación basada en un asunto exclusivamente de equilibrio de tesorería.

Ni la recomendación foránea tiene solidez ni tampoco encuentra sustento la decisión política nacional de llevar a cabo este proyecto. La realidad, vista desde su faceta financiera, es que el aporte proveniente de estas privatizaciones resulta irrelevante e insignificante a los efectos de cubrir el déficit fiscal.

Ni hablar, en lo que se refiere a un análisis más profundo como puede ser el que surge de la comparación entre los probables ingresos por privatización y los recursos empleados por la Nación en consolidar el sistema nuclear durante cuatro décadas.

Pero tomemos otro ángulo de análisis. Intentemos una comparación con las experiencias surgidas de anteriores privatizaciones. Para ello, ubiquémonos en el escenario armado al momento de esos debates: se nos decía que había que privatizar porque de esa manera se reduciría el déficit fiscal, se disminuiría el gasto público y, como beneficio adicional, se iría reduciendo sustancialmente la deuda externa. Hoy podemos afirmar que ninguna de las tres condiciones se han cumplido.

Pero esta privatización es contundentemente diferente. Porque en estas cuatro décadas, el sistema nuclear argentino no sólo ha demostrado que es eficiente, que está a la altura de los mejores del mundo, sino que también (administrado correctamente) que es rentable. En efecto, la generación de energía nucleoelectrónica de sus dos centrales en funcionamiento permiten actualmente solventar los gastos de investigación, desarrollo y estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica en su conjunto.

Y esto sin contar otras actividades como el uso de radioisótopos y radiaciones para la salud, la industria y el agro; la generación de proyectos innovadores como la planta de irradiación de barros cloacales o los ingresos provenientes de la realización de consultorías para terceros, como los casos del estudio de ingeniería para un reactor de 20 MW para Egipto o el asesoramiento a Perú para el diseño de un plan nuclear.

Porque el punto clave es éste, señor presidente. Este proyecto y las normas legales relacionadas dictadas en 1994 y 1995 sobre desmembramiento de la CONEA, como el decreto 1.540/94, suponen la desarticulación del proyecto nuclear en lo que hace a la investigación y desarrollo y la pérdida de su capacidad de generación de riquezas en ciencia y tecnología. Y esto se fundamenta en varias razones:

1º — Al quedar las funciones de investigaciones en manos del Estado, pero la producción (es decir lo realmente rentable) en manos de los privados se crea una di-

sociación perjudicial entre las necesidades del sistema y los que pueden generar respuestas a esas necesidades. Esto podría provocar, por ejemplo, que a los operadores privados por una cuestión de rentabilidad o de conveniencia les sea más fácil acceder o propiciar investigación en otros países.

Voy a citar el dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados cuando al tratar este mismo proyecto explicitó: *Nuestras reservas energéticas, sobre todo las de combustibles no renovables, son escasas. Es indispensable entonces realizar la inversión de capital necesaria para reavivar la nucleoelectricidad, al igual que la hidroelectricidad. En este sentido, reivindicamos el rol indelegable del Estado. Es el Estado, también, quien debe asegurar la adecuada integración entre "investigación y desarrollo" y las "actividades productivas y de servicios", característica esencial para la obtención de los resultados positivos alcanzados por la CONEA, y que deben ser preservados en el futuro.*

Recordemos que la privatización subsecuente a la sanción de este proyecto será el primer caso en el mundo de centrales atómicas que cambian de operador, en nuestro caso de manos estatales a manos privadas. Si a esto le sumamos la experiencia surgida de anteriores privatizaciones en nuestro país, el cómo se dará la relación entre un sistema de investigación en manos del Estado y un sistema de operación en manos privadas, el resultado nos arroja más dudas que certezas.

Dudas que se acrecientan con la lectura del decreto 674/95 por el cual se genera una estructura de trabajo para la CONEA, creando una gerencia general basada en sus tres centros atómicos (Bariloche, Constituyentes y Ezeiza) y una gerencia de tecnología encargada de efectuar el control de gestión de los proyectos de desarrollo de tecnología. La estructura se completa con la gerencia de administración y la gerencia de cooperación y transferencia de tecnología.

La llave del sistema de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología nuclear será esta gerencia de cooperación y transferencia, la que deberá ocuparse de elaborar la política de transferencia de tecnología "desde" y "hacia" la CONEA y de incentivar los programas de cooperación técnica internacional. Esta gerencia, tal como lo reconoce también documentación institucional del organismo, será el foco de la principal actividad de la CONEA, la transferencia tecnológica, en dos grandes aspectos:

— Uno, el que está relacionado con la transferencia de conocimiento de una ciencia básica a otra aplicada, de una disciplina a otra y (lo que nos interesa ahora) de una institución o empresa a otra.

— El otro, comprende la transferencia de tecnología como un bien de capital o de uso, sometido a mecanismos de compra venta similares a los de bienes de capital, insumos a manos de obra.

De qué manera se efectivizará esta transferencia de tecnología con su correlato contractual es algo que ni el decreto 674/95 definen ni esta norma en debate aclara. ¿Los operadores privados tendrán algún tipo de obligación en lo que se refiere a la contratación de, por ejemplo, estudios técnicos vinculados a la operación de las centrales? ¿No es presumible arriesgar que, en el caso de operadores extranjeros con experiencia en la ma-

teria, decidan establecer un mecanismo de transferencia de tecnología con organismo de sus países de origen? Recordemos que existe abundante legislación comparada en Europa y América del Norte en donde se protege e incentiva la investigación y transferencia en materia nuclear.

2º — El artículo 6º en su inciso d) al establecer un canon que será un porcentaje de los ingresos provenientes de la venta de energía no es lo suficientemente preciso. Y esta precisión debe venir de una definición clara y puntual del monto del canon o de ese porcentaje de los ingresos.

Porque si pretendemos que el Estado, a través de la CONEA, proyecte seriamente los lineamientos del Plan Nuclear Argentino, debemos darles las herramientas para que esa planificación sea algo concreto y no en abstracto. Ahora bien, esta norma sí es clara y puntual en cambio en el artículo 26, cuando establece puntualmente el coeficiente que se aplicará a la venta de energía nucleoelectrónica en concepto de tasa o impuesto. Entonces, esta misma definición contundente aplicable para el caso del subsidio a la investigación debería estar en la letra de esta ley, y no esperar una reglamentación.

Porque también al puntualizar concretamente este coeficiente evitamos que este canon se convierta en el futuro en prenda de cambio entre los operadores privados y el gobierno. Y acercamos un elemento más de claridad a la privatización de las centrales, brindando a los interesados reglas de juego determinadas. Tenemos que evitar la confusión entre continuidad de la investigación y rentabilidad del sistema. Y la forma de evitarla es definir con cuánto contará anualmente en materia de canon por venta de energía la CONEA.

La investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología muchas veces no responde a criterios mercantilistas de retornos rápidos de inversión. Más bien, estas áreas se desenvuelven bajo otros criterios como el de interés en desarrollar un sector determinado o crecimiento nacional en tal o cual área. Pero si subordinamos la financiación de la investigación a las variaciones del mercado o a factores políticos, el resultado será la discontinuidad de las tareas ante el primer balance de los operadores privados con resultados no previstos.

3º — La precariedad con que este proyecto trata las funciones de investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica hacen temer un grave deterioro en la capacidad operativa de este organismo. Que, debemos recordarlo, es el segundo ente de investigación nacional (después del Conicet), contando con una planta de casi 3.500 técnicos profesionales y técnicos en los cuales el país ha invertido ingentes recursos en capacitación. Lo que ha colocado la gestión y el nivel de los estudios de la CONEA entre los mejores del mundo, como recientemente lo ha demostrado (una vez más) un documento de la NASA elogiando la labor desarrollada por uno de los institutos dependientes de la CONEA: el Instituto de Investigaciones Aplicadas (INVAP), excelente ejemplo de que la ciencia y la tecnología de buen nivel no están disociadas de la producción de riquezas.

Creo que en este proyecto, señor presidente, no se contempla seriamente la continuidad de los esfuerzos que en investigación y desarrollo el país ha invertido por más de cuatro décadas.

Precisamente en 1996, cuando este mismo proyecto tuvo ingreso en el Senado, pedí una ampliación de giro para debatir esta norma en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que presido, por tener la misma incumbencia indiscutible sobre estos asuntos. En efecto, este proyecto trata en general sobre aspectos que hacen a la investigación y desarrollo en materia de ciencia y tecnología nuclear, pero en forma particular el artículo 2º incisos b), l), ll), m), n), ñ), o) y p) y el artículo 6º inciso d) legislan sobre el tema. Sin embargo, se ha tomado el criterio de denegar esta solicitud, criterio totalmente opuesto al seguido por la Cámara de Diputados, en donde (por lo menos) su Comisión de Ciencia y Tecnología respectiva ha podido debatir el asunto en un plenario de comisiones.

Lo expuesto hasta ahora es en lo que se refiere a la necesidad válida de este proyecto, y a la continuidad de la investigación en ciencia y tecnología nuclear, pero hay otros aspectos que deberían ser materia de discusión y corrección de este proyecto de ley nacional sobre la actividad nuclear.

Lo que se ha denominado Plan Nuclear Argentino preveía para fin de siglo seis centrales nucleares en funcionamiento y una planta de agua pesada. La realidad hoy es que sólo hay dos centrales operando y una tercera con más del 80% de obra finalizado. Pero la planta de agua pesada ya está operativa. Esto implica que tenemos una planta diseñada originalmente para abastecer a seis centrales, que hoy debe producir para dos, con el consiguiente correlato de que su producción no es altamente competitiva en lo que se refiere a precios. Máxime cuando, la caída del Muro y las economías socialistas han originado una sobreoferta de elementos nucleares provenientes de la ex URSS y otros países con tecnología nuclear. Si bien desde 1995, los precios en el mercado de estos materiales se han consolidado y han empezado a subir, es necesaria la terminación de la tercera nuclear, Atucha II, para de esta manera abaratar costos de producción de agua pesada.

La obligación establecida para los operadores en esta norma de contratar agua pesada y uranio enriquecido en el país es sumamente acertada y muy importante, pero no suficiente. Creemos que el plazo de 6 años para la finalización de la obra de Atucha II es un plazo excesivamente largo que repercute en la rentabilidad de la planta de agua pesada. Estudios realizados al respecto, entre los que se pueden contar un informe de la Asociación de Profesionales de Energía Atómica, establecen que cuatro años son más que suficientes para su culminación.

Proponemos, entonces, que se establezca la obligación de que Atucha II debe ser terminada en un plazo no mayor de cuatro años.

La recomendación del Banco Mundial, con la que empecé mi intervención, marcó el inicio de un recorrido continuado con el decreto 1.540/94 y en el cual esta iniciativa que hoy votaremos supone la anteúltima estación, antes de la privatización y desguace final de un proyecto nacional del cual todos los argentinos, sin distinciones políticas, nos sentimos orgullosos durante cuatro décadas.

Gracias.

Dr. Humberto E. Salum.

Senador de la Nación.

Solicitada por el señor senador Meneghini

Privatización de centrales nucleares

Señor presidente:

Para fines de 1993, en la mayoría de los países desarrollados se registraba una fuerte dependencia de la energía de origen nuclear para el suministro eléctrico.

Estas dependencias abarcaban desde más de 60 % en Francia, el 60 % en Bélgica, el 52 % en Suecia, 40 % en Suiza, 36 % en España, 33 % en Finlandia, 27 % en Alemania, 24 % en Japón, 22 % en el Reino Unido, al 20 % en Estados Unidos.

Estos países complementan esa oferta energética con otras provenientes mayormente de fuentes hidráulicas, como el caso de Suiza y Suecia; otros, como Alemania, Bélgica y el Reino Unido lo hacen principalmente con energía térmica, y España, Estados Unidos, Finlandia y Japón con una combinación de energía térmica e hidráulica.

Si bien es cierto que después de los incidentes ocurridos en la central norteamericana de Three Mile Island y fundamentalmente luego del accidente en la central soviética de Chernobyl se ha producido una moratoria de hecho en la mayoría de los países occidentales, al mismo tiempo se ha continuado la instalación de centrales nucleares en algunos países escasos de recursos energéticos alternativos como Corea del Sur, que está desarrollando un plan de ocho nuevas unidades.

No obstante lo afirmado al inicio del párrafo anterior, también los propios EE.UU. están aún llevando adelante la construcción de cuatro centrales nucleares para la corporación estatal Tennessee Valley Authority (TVA) (Watta Bar 1 y 2 - Bellafonte 1 y 2).

Desde el punto de vista de la seguridad, las centrales de diseño occidental poseen niveles de seguridad comparables con los de cualquier otra rama de la industria. Estos niveles son, por ejemplo, mejores que los de las centrales térmicas a vapor.

Es cierto que Suecia decidió mediante un referéndum el desarme anticipado de sus centrales nucleares, esto es antes del fin de su vida útil, pero también es cierto que los plazos previstos no pudieron ser cumplidos debido a imposibilidades prácticas. Suecia tiene bajo aprovechamiento efectivo a prácticamente todos sus recursos hidroeléctricos y el 52 % que aportan las centrales nucleares sólo podría ser aportado por centrales térmicas siendo que Suecia no posee ni petróleo, ni gas, ni carbón.

Las llamadas "energías alternativas" no poseen ni remotamente el potencial de abastecer de electricidad a un país desarrollado como Suecia, cuyo consumo energético per cápita supera los 17.000 kWh/hab./año. Esas tecnologías suministran electricidad a costos que sacarían de competencia a cualquier industria que intentara proveerse de ellas.

Respecto a la propiedad de las plantas generadoras podemos contemplar casos como el de los EE. UU., donde la mayoría de las centrales son privadas hasta otros como el de Francia en que todas las centrales son estatales.

Si pasamos al caso argentino, el gobierno nacional intenta, desde hace más de dos años, traspasar al sector

privado las dos centrales nucleares actualmente en operación, Atucha I y Embalse, y la que se encuentra en construcción, Atucha II. También intenta privatizar el ciclo de combustible nuclear y otras actividades conexas. Los inconvenientes para ello son graves y múltiples.

El primero reside en la situación técnica actual de las dos centrales en actividad.

La central Atucha I está cercana al fin de su vida útil y requeriría importantes y costosos trabajos para prolongar esa vida útil en unos 10/15 años.

También los requeriría para reducir el anormalmente elevado nivel de radioactividad interna —superior a lo permitido por las normas de seguridad internacionales más recientes— radioactividad esta que le quedó como residuo de su última avería y la reparación apresurada que se realizó para subsanarla.

Además por la antigüedad de su diseño (data de los años '60) tiene incorporados entres sus componentes piezas de aleación que se han tornado peligrosamente radioactivas por su contenido de cobalto. Este tipo de materiales hoy en día ya no se utilizan en los nuevos diseños.

Las reparaciones mencionadas no sólo implican costos centenarios en millones de dólares, sino también largos períodos de inactividad con el consiguiente lucro cesante para el inversor. Mediante la resolución 283/94 la Secretaría de Energía ha estimado el costo de estas reparaciones en alrededor de u\$s 100 millones, en unos 7 meses de trabajo. Del texto de la resolución no queda en claro si esa cifra y el período de detención previsto cubren la totalidad de los trabajos necesarios a realizar o solo los indispensables.

La central de Embalse requiere también una importante reparación debido a los efectos de un error de diseño, detectado en las centrales canadienses del mismo tipo (Pickering II) y que pone en peligro la integridad de los tubos de presión. Es una reparación costosa y también implica una larga detención de la central. Como agravante, una sola empresa posee la tecnología adecuada para esa reparación y es la empresa que la diseñó y construyó. La Secretaría de Energía, a través de su resolución 283/94, previó la necesidad de detener esta central para efectuar dichas reparaciones durante un período de seis meses y un costo estimado de u\$s 45 millones. (Con el lucro cesante llegaría a un total de u\$s 127 millones.)

La central de Atucha II, actualmente en construcción, tiene el problema de que su proceso constructivo fue mal manejado, casi como el de Yacyretá. El agravante es que el contratista principal —Siemens— es también socio en la empresa comitente ENACE.

Los costos han crecido por encima de los previsto y se ha llegado a la situación de una obra en la que la parte civil está casi en el 100 % terminada, la provisión de equipos tiene completo más del 90 %, restando el montaje y la puesta en marcha y, así y todo, se estima necesario invertir entre u\$s 700 y 1.000 millones para completarla.

Debe tenerse en cuenta además que, en su momento, la Secretaría de Energía le ofreció a Siemens la oportu-

nidad de cotizar la terminación de la central a un precio fijo lo que fue rechazado por esta empresa. (Lo que habla de la escasa ética aplicada por ella en esta obra.)

De todos los limitantes antes señalados, la tasación que la Secretaría de Energía ha previsto para la venta del conjunto de las centrales sólo alcanza a u\$s 261 millones por el 99 % de las acciones de la sociedad que las posee. (Resolución 283/94 en cumplimiento del artículo 10 del decreto 1.540/94).

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo y tiene media sanción de diputados no deja establecido con claridad quién se hará cargo del costo del "decomiso" de las centrales argentinas al final de su vida útil.

Sólo prevé en su artículo 9º (al final) que "todo explotador de una central de generación nucleoelectrónica deberá aportar a un fondo para retiro de servicio de centrales nucleares. La forma de constitución, administración y contralor de este fondo será determinada por el Poder Ejecutivo nacional".

La vaguedad de esta redacción, el corto período de vida remanente de la central Atucha I (10 años), el costo estimado de una operación de ese tipo, acerca de la cual no hay antecedentes (se habla de u\$s 350 millones para cada central) y las amplias atribuciones que se otorgan al Poder Ejecutivo hacen suponer que el grueso de ese costo de decomiso será afrontado por el Estado nacional.

Finalmente, no es para nadie un secreto que los EE.UU. no ven con buenos ojos el desarrollo de las llamadas "tecnologías sensibles" en los países periféricos. Así se abortó el plan espacial argentino y varias exportaciones de materiales nucleares (que inclusive han acarreado demandas por daños y perjuicios contra el Estado).

La separación de los sectores dedicados a la investigación y desarrollo nucleares respecto de la producción (encarnada en las centrales) ha logrado que el primer sector dependa para su subsistencia sólo de las asignaciones del presupuesto nacional. Es de prever que, a través de sucesivos recortes en esa partida, se vaya estrangulando al sector con el consecuente retiro de la masa de científicos y profesionales que constituyen el auténtico capital acumulado por la CONEA a través de 50 años.

Señor presidente: considerando que el contenido del proyecto de ley nacional de la actividad nuclear, que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ha ingresado al Senado de la Nación bajo el número C.D.-52/96 en agosto de 1996, no contiene las mínimas previsiones exigibles en materia del resguardo del patrimonio estatal.

Considerando también que la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía ha explicitado las necesidades de reparación y montos aproximados de las inversiones que requerirían las centrales nucleares en actividad para operar en condiciones de seguridad y, en base a ello, ha determinado un precio-base para la privatización que resulta a todas luces ridículo considerando el valor intrínseco de los bienes que se transferirían, al tiempo que ha

acrecentado las sospechas acerca de que se presentarían oferentes únicos para cada unidad.

Teniendo en cuenta además que desde el punto de vista de la estricta justificación económica de la operación resulta transparente que el Estado recibiría al presente sumas irrelevantes debiendo cargar a su costa las futuras operaciones de decomiso de las centrales al fin de su vida útil, operaciones sobre las cuales se cuenta con escasa o nula experiencia internacional y cuyos costos derivados no pueden ser determinados con precisión pero que superan con creces lo que se recibiría por la venta.

Agregando a lo anterior que la transferencia de las centrales al sector privado alejaría definitivamente de los centros de producción nucleoelectrónica a los científicos, profesionales y técnicos del sector de investigación y desarrollo nuclear, proceso ya comenzado con la división de la CONEA, lo que significaría en el mediano plazo la liquidación lisa y llana del único sector de tecnología avanzada con que aún cuenta nuestro país.

Y considerando finalmente que más allá de las actuales proyecciones en materia de recursos hidrocarburíferos e hidroeléctricos, resulta absolutamente indispensable, de miras al largo plazo y al irreversible agotamiento de los recursos no renovables, mantener previsiones concretas respecto al sector nuclear.

Por todo lo expuesto:

El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical

RESUELVE:

1º — Declarar que el proceso de privatización del sector nuclear que impulsa el gobierno nacional es altamente perjudicial para patrimonio nacional y es equivalente a la renuncia a cualquier posibilidad de desarrollo científico-tecnológico argentino.

2º — Advertir, tanto a los posibles adquirentes de pliegos, como a las representaciones diplomáticas de sus países de origen, en caso de ser éstos extranjeros, que un futuro gobierno de la Unión Cívica Radical impulsará la reversión de esta cuestionada privatización.

Ante esa eventualidad se reconocerá a los posibles adquirentes exclusivamente el monto de las cifras oportunamente abonadas, con la sola adición de intereses a las tasas internacionales prevaletientes en cada época para ese tipo de operaciones.

Al mismo tiempo, se dispondrá una rendición de cuenta de quien o quienes hubieran estado a cargo de la explotación a cualquier título y cualquier partida que no responda a un concepto técnico, así como los gastos conceptualizados como honorarios, auditorías, consultorías, asistencias técnicas y similares, o aquellos otros que se refieran a beneficios, dividendos, regalías y similares se considerarán como pagos a cuenta de los montos a percibir.

El saldo resultante, de existir, será cancelado en la forma que se determine mediante una ley especial.